



**INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES**

LA UNIVERSIDAD DE POSGRADO DEL ESTADO

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

**INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES**

**ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES  
“JOSÉ PERALTA”**

**Promoción 2012 - 2014**

**TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE MAGISTER EN RELACIONES  
INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA, MENCIÓN POLÍTICA EXTERIOR**

**TÍTULO:**

**ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA POLÍTICA EXTERIOR Y LA  
POLÍTICA MIGRATORIA DE SUDÁFRICA EN LA ETAPA POST-  
APARTHEID**

**AUTOR:**

**LUIS ALBERTO QUIÑÓNEZ AYOVÍ**

**TUTOR:**

**Dr. NORBERTO EMMERICH**

**Quito, abril de 2016**



No. 315-2016

## ACTA DE GRADO

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de septiembre del año dos mil dieciseis, **LUIS ALBERTO QUIÑONEZ AYOVÍ**, portador de la cédula de ciudadanía: 0802196709, egresado de la Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia 2012-2014, se presentó a la exposición y defensa oral de su tesis, con el tema: **"ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE LA POLÍTICA EXTERIOR Y LA POLÍTICA MIGRATORIA DE SUDÁFRICA EN LA ETAPA POST-APARTHEID"**, dando así cumplimiento al requisito, previo a la obtención del título de: **MAGÍSTER EN RELACIONES INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA**.

Habiendo obtenido las siguientes notas:

Promedio académico:	8.74
Tesis Escrita:	8.46
Grado Oral:	7.00

De conformidad con la facultad prevista en el estatuto del IAEN CERTIFICO que la presente es fiel copia del original



Fojas 111

Fecha: 29/09/2016

Secretaría General

**Nota final Promedio: 8.23**

En consecuencia, **LUIS ALBERTO QUIÑONEZ AYOVÍ**, ha obtenido el título mencionado:

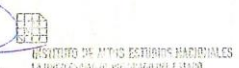
Para constancia firman:

Dra. Isabella Giunta  
PRESIDENTA DEL TRIBUNAL

Dra. Katalina Barreiro  
MIEMBRO

Dra. Roxana Arroyo  
MIEMBRO

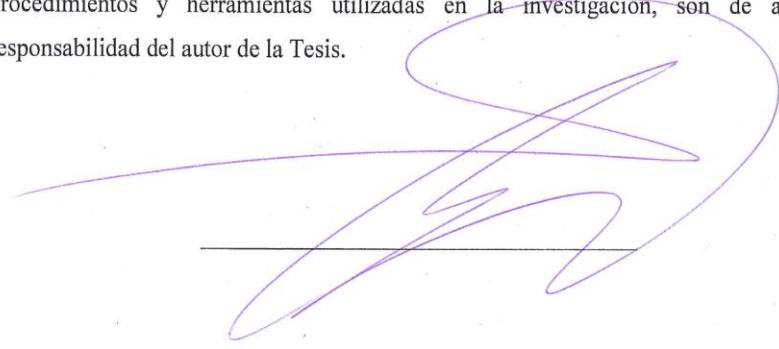
Dra. Ximena Garbay  
SECRETARIA GENERAL



SECRETARÍA  
GENERAL

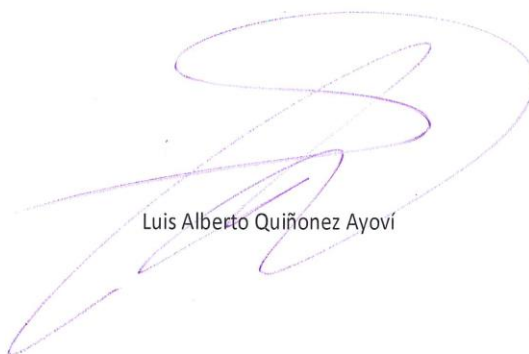
## AUTORÍA

Yo, Luis Alberto Quiñónez Ayoví con cédula de ciudadanía número 0802196709, declaro que las ideas, juicios, valoraciones, interpretaciones, consultas bibliográficas, definiciones y conceptualizaciones expuestas en el presente trabajo; así cómo, los procedimientos y herramientas utilizadas en la investigación, son de absoluta responsabilidad del autor de la Tesis.

A handwritten signature in purple ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left. The signature is positioned above a thin horizontal line.

## AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

"Yo Luis Alberto Quiñonez Ayoví, con Cédula de Identidad No. 0802196709, cedo al IAEN, los derechos de publicación de la presente obra por un plazo máximo de cinco años, sin que deba haber un reconocimiento económico por este concepto. Declaro además que el texto del presente trabajo de titulación no podrá ser cedido a ninguna empresa editorial para su publicación u otros fines, sin contar previamente con la autorización escrita de la universidad"



Luis Alberto Quiñonez Ayoví



## DEDICATORIA

El presente trabajo lo dedico a mis padres, esposa, hijas y demás familiares.

Mi gratitud al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, al Instituto de Altos Estudios Nacionales y a mi asesor el Dr. Norberto Emmerich.

## ÍNDICE

PORTADA .....	0
AUTORÍA .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
DEDICATORIA .....	4
ÍNDICE.....	5
SIGLAS .....	7
RESUMEN EJECUTIVO.....	8
ABSTRACT .....	9
INTRODUCCIÓN.....	10
<b>CAPÍTULO I.....</b>	<b>15</b>
1. MARCO TEÓRICO .....	15
1.1. Antecedentes .....	15
1.2. Migración Humana.....	20
1.3. Política exterior .....	31
1.4. Política Migratoria .....	37
<b>CAPITULO II.....</b>	<b>41</b>
2. APARTHEID .....	41
2.1. Definición.....	41
2.2. Apartheid en Sudáfrica .....	44
2.3. Realismo y apartheid en Sudáfrica. ....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
<b>CAPÍTULO III.....</b>	<b>52</b>
3. POLÍTICA EXTERIOR Y POLÍTICA MIGRATORIA SUDAFRICANA .....	52
3.1. Política Exterior Sudafricana .....	52
3.2. Política Migratoria Sudafricana .....	59
<b>CAPITULO IV.....</b>	<b>69</b>

4. COHERENCIA ENTRE LA POLÍTICA EXTERIOR SUDAFRICANA Y SU POLÍTICA MIGRATORIA, EN LA ETAPA POST-APARTHEID .....	70
4.1. Relación entre la Política Exterior sudafricana y su Política Migratoria, después del apartheid.....	70
<b>CAPÍTULO V</b> .....	74
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....	74
5.1. Conclusiones .....	74
REFERENCIAS .....	76
ANEXOS .....	85

## SIGLAS

<b>ANC:</b>	Congreso Nacional Africano.
<b>CIDOB:</b>	Centro de Estudios y Documentación Internacional de Barcelona.
<b>FHC:</b>	Fernando Henrique Cardoso.
<b>FMI:</b>	Fondo Monetario Internacional.
<b>IDEA:</b>	International Institute For Democracy and Electoral Assistance.
<b>INADI:</b>	Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de la República de Argentina.
<b>MREMH:</b>	Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
<b>ONU:</b>	Organización de las Naciones Unidas.
<b>OTAN:</b>	Organización del Tratado del Atlántico Norte.
<b>PN:</b>	Partido Nacional
<b>PC:</b>	Partido Comunista
<b>USA:</b>	Estados Unidos de América.

## RESUMEN EJECUTIVO

La presente investigación analiza la relación entre la política exterior y la política migratoria de Sudáfrica en la etapa post-apartheid. Se realiza un abordaje a temas como movilidad humana, política exterior, política migratoria, apartheid; así como también en el ámbito sudafricano se analiza su política migratoria y exterior, concluyendo con análisis de su coherencia.

Con un análisis comparativo de las realidades migratorias en América Latina y Sudáfrica en el siglo XIX y XX, estudiamos como las realidades migratorias y los intereses bajo de la mesa para lograr la institucionalización de una normativa migratoria que permita el mantenimiento del statu quo, no difieren considerablemente a pesar de la distancia física de los países, lo que nos lleva a descifrar que el sistema de injusticia social no es coincidencia, sino más bien producto de un patrón que se reproduce socialmente. Por otro lado encontramos que siendo la política exterior la expresión en el ámbito externo de la política interna de los países, esta ha sido utilizada para justificar las inequidades internas; esta realidad es un secreto a voces en nuestra región, y por qué sería diferente en las otras latitudes del planeta.

En todo caso se realiza un abordaje realista de la política migratoria y exterior en Sudáfrica, así como también se examinan diversas obras de la materia con el fin de llegar a definiciones claras y conceptuales de política migratoria y política exterior y sobre todo demostrar la incoherencia entre la política exterior y migratoria sudafricana; sin dejar de lado un abordaje importante a la política exterior y migratoria después del apartheid con la llegada de Nelson Mandela al poder, de la misma manera se analizan los importantes cambios de ese sistema, y uno de ellos indudablemente fue el triunfo del Congreso Nacional Africano (ANC), pero de la misma manera se concluye claramente que a pesar del triunfo del ANC no ha sido suficiente para alcanzar los cambios trascendentales que este país necesita.

## **ABSTRACT**

This research analyzes the relationship between foreign policy and immigration policy in South Africa in the post-apartheid period. An approach is made to issues such as human mobility, foreign policy, immigration policy, apartheid; as well as in the South African context and their migratory foreign policy is discussed, concluding with analysis of its coherence.

A comparative analysis of the realities of migration in Latin America and South Africa in the nineteenth and twentieth century, studied how migration realities and interests under the table to achieve the institutionalization of an immigration law that allows the maintenance of *stato quo*, do not differ considerably despite the physical distance of the countries, which leads us to decipher the system of social injustice it is no coincidence, but rather the result of a pattern reproduced socially. On the other hand we find that foreign policy remains the explanation in the external environment of the internal politics of countries, this has been used to justify internal inequities; this really is an open secret in our region, and that would be different in other parts of the planet.

In any case a realistic approach to immigration and foreign policy in South Africa is done, as well as various works of matter are also discussed in order to reach clear definitions and conceptual foreign policy and immigration policy and especially demonstrate the inconsistency between South Africa's foreign and immigration policy; without neglecting an important approach to foreign and immigration policy after apartheid with the arrival of Nelson Mandela to power, just as the significant changes in the system are analyzed, and one of them was undoubtedly the triumph of the African National Congress (ANC), but just as clearly it concludes that despite the victory of the ANC has not been sufficient to achieve the momentous changes this country needs.

## INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene su razón de ser y se enmarca dentro de los contenidos contemplados en el diseño curricular de la Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia, del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Su objeto de estudio, pretende demostrar si la Política Exterior de Sudáfrica tiene coherencia con su Política Migratoria, dado que la política exterior se asienta en principios universales, mientras su política migratoria continúa siendo restrictiva. Con la caída del Apartheid, Sudáfrica va a cimentar su Política Exterior especialmente en el “Ubuntu y sus ejes fundamentales serán el Renacimiento Africano, el Panafricanismo y la Cooperación Sur-Sur” (Barriga y Bernal, 2013), como ejes de la nueva política exterior post-apartheid, se analizará si el ubuntu ha sintonizado con la política migratoria, dada la forma declarativa de una política exterior bien intencionada y las necesidades internas del país en seguirse sosteniendo como el país más desarrollado de África.

### **Las Políticas Migratorias antes y durante el Apartheid.**

Vale entonces dar una mirada al pasado para conocer el origen de las políticas migratorias dentro del régimen del apartheid, “En 1948, con la creación del *Apartheid* se oficializa la segregación racial como una política de Estado para la consecución de una Sudáfrica blanca. El enfoque migratorio se materializó en las dos principales leyes migratorias del Gobierno sudafricano, existentes desde antes de la institucionalización del régimen de apartheid, como eran: *The Aliens Control Act* (1937) y *The Aliens registration Act* (1939), cabe señalar que estas no fueron las únicas leyes aprobadas en la implementación del Apartheid, según Robin Hosie, se aprobaron mas de 300 leyes relativas al apartheid (Hosie, R. 2004)”. Con la primera se establece explícitamente la condición racial como criterio de entrada al territorio sudafricano. La segunda, no sólo controla la entrada de inmigrantes sino que regula y vigila su estadía en el país. Por otro lado, se genera una política migratoria basada en un enfoque de dos puertas. Una puerta de entrada recibiendo a poblaciones que cumplieran con los criterios de atracción definidos por la minoría en el poder, y la otra, la puerta de atrás, tenía una doble función. Por un lado, impedir que los migrantes no deseados entrasen y por el otro, permitiendo el ingreso temporal de mano de obra barata. Nótese, que desde antes que se institucionalizara el régimen segregacionista,



ya se había empezado a dar pasos importantes que supondrían más adelante la radicalización por parte de los blancos en el poder y llegar al extremo que fue la institucionalización del régimen del apartheid que cambiaría por completo la historia de este país africano. Podemos observar que con el enfoque de las políticas migratorias en dos puertas, la idea de una puerta de entrada recibiendo a poblaciones que cumplieran con los criterios de atracción definidos por la minoría en el poder, nos hace trasladar a lo que sostenían pensadores del inicio de las Repúblicas en América latina, como Alberdi y otros, quienes imploraban por una inmigración blanca europea, con educación, dinero e interesados en hacer avanzar esta tierra de bárbaros, era ese concepto de blanquear sus países porque veían al hombre blanco como la solución a todo los problemas de esas tierras nuevas, criterios que van a significar el posterior genocidio de los pueblos indígenas que poblaban el territorio argentino, para los que no había lugar en el modelo de modernización del país.

Para Alberdi “lo que llamamos América Independiente no es más que Europa establecida en América y nuestra revolución no es otra cosa que la desmembración de un poder europeo en dos mitades, que hoy se manejan por sí mismas. Todo en la civilización de nuestro suelo es europeo; la América misma es un descubrimiento europeo” (Alberdi, 1852: 63). El autor desde la génesis de su estudio pone como punto referencial ese sentido de pertenencia a Europa, eso significa que cualquier otro modelo que osare en pensar en lo original en lo propio estaría descartado porque según él, Europa era nuestra madre de la cual deberíamos imitar toda idea de progreso.

El criterio de Alberdi, de abrir las fronteras para que nuestra América sea habitada por europeos con el dinero suficiente para invertir en industrias y empresas, intentaba imitar el sistema estadounidense de la época que de una u otra manera abrió las puertas a la inmigración Europa acaudalada económicamente. De ninguna manera tiene reparos en observar a lo propio como salvaje, inculto, inimitable, si no era venido desde el imperio desde la gran Europa. Ese criterio de desvalorización de lo propio y la confianza en lo otro en lo venido de afuera vienen a fundamentar su pensamiento, despreciando la riqueza cultural y la incapacidad de los pueblos originarios en enrumbar su propio destino, aquello viene a constituir la génesis de la política migratoria latinoamericana.

A pesar que dichas posiciones de Alberdi no fueran pregonadas por los políticos de manera pública, véase el desarrollo político de nuestra América y se podrá observar una copia textual de sistemas que no se acoplan a nuestra realidad.

Por el contrario, el apartheid fue un modelo de explotación económica que sí incluía a la población negra, aunque semi-esclavizada y segregada.

Al realizar un análisis de la situación actual, en el sentido de la doble función de la puerta de atrás, nos podemos dar cuenta que está vigente hasta nuestros días; y un punto de atención, sería lo que observamos en países desarrollados como Estados Unidos y los países de la Unión Europea; es público y notorio que estos países le otorgan visa a ciudadanos cualificados los mismos que para ellos serían buenos candidatos a convertirse en unos decentes migrantes, ya sea porque tienen educación superior, científicos, experimentados deportistas, o sea ciudadanos que engrandecerían sus países, por lo tanto serían considerados deseados, pero por otro lado, necesitan esos ciudadanos que realicen el trabajo que desprecian los ciudadanos de esos países de destino, entonces, utilizando todo tipo de argucias legales, dejan la puerta abierta para que puedan entrar y ser explotados por la empresa del capital que necesita mano de obra barata sin garantías sociales.

Ahora bien, la política migratoria sudafricana durante el *Apartheid* se puede analizar desde dos ejes. En primer lugar, se presenta un proceso de *desnacionalización* de la población negra nativa, el cual se materializa con la expedición principalmente de dos normas: *The Native Lands Act* (1913), (nótese que estas leyes se aprobaron antes de la institucionalización formal del apartheid, eso significa que de ninguna manera el régimen segregacionista nació de la noche a la mañana, hubo una construcción sistemática del mismo, desde finales del siglo XIX) que establecía territorios negros dentro del país, fuera de los cuales la población negra no podía obtener ni ser propietario de tierras; y en 1950 *The Group Areas Act*, en la que se crearon los *bantustanes* – producto de la división del territorio nacional – que eran las zonas más pobres donde se concentraba la población negra. De esta manera, estas políticas – sumadas a las demás normas del régimen del *Apartheid* - generaron que los negros fuera de los *bantustanes* se convirtieran en

extranjeros en su propia tierra. Como nos podemos dar cuenta, dentro del régimen segregacionista, los sudafricanos eran extranjeros en sus propias tierras, habían espacios determinados para su movilización y desarrollo personal, salir de esos lugares, sino fuere por cuestiones eminentemente laborales que significaren aportar para el crecimiento de la riqueza de la población blanca, ya era una irrupción a la normativa migratoria del país, como se podrá colegir, el régimen de apartheid no solamente te discriminaba por el color de la piel, sino más bien te excluía de las oportunidades de trasladarte donde tu desearas dentro del mismo país.

### **La Política Exterior antes y durante el Apartheid.**

La política exterior desplegada por Sudáfrica antes del apartheid, respondía estrictamente a la política exterior desplegada por Londres, dado que a pesar que se da la independencia en ese país del sur de África, en realidad eso no fue otra cosa que la expresión de la falsa moral que han ejercido las grandes potencias a través de la historia, mostrando falsas expresiones de libertad y oportunidades globales, cuando la manipulación y los acuerdos tras bastidores se han convertido en el modus operandi de las potencias, afectando de esa manera los derechos de los demás miembros de la comunidad internacional.

El caso sudafricano no fue diferente, aparentemente se independiza el país, pasaba de ser una colonia pública ante los ojos del mundo a un Estado independiente pero sometiendo a la población originaria africana al olvido y la negación de persona.

La Política Exterior desplegada por Londres no era otra cosa que incentivar las guerras intestinas en el corazón de África y la sustracción de los recursos naturales de los países más débiles, así como el afán desenfrenado de la anexión de nuevos territorios no solo en África sino también en la misma Europa.

Durante la etapa del apartheid, con la constitución de 1960, como no podría ser de otra manera, los sudafricanos blancos nacidos en la colonia, sentían la necesidad de independizarse políticamente de la metrópoli con el fin de darle más vigor al sistema de explotación y exclusión que se había instaurado en ese país, nótese que esta independencia

solo sería en algunos tópicos, puesto que la economía seguía anexada a las decisiones que se tomaban desde Londres, dada la dependencia que existía y existe desde esa metrópoli, nótese que en dicho país en la actualidad tienen sus oficinas las principales empresas sudafricanas, en todo caso la política exterior desplegada por este país se va fundamentar en el mismo padrón existente con anterioridad al régimen del apartheid, con el aditivo que promocionarán la fortaleza del su país con la exclusión de la población negra nativa, así como la asociación y el apoyo de países que impulsaban la segregación. En fin su política exterior propugnaba un alineamiento total a Londres.

Posteriormente, en el año de 1994 con la llegada del Congreso Nacional Africano al poder dirigido por Nelson Mandela, la política exterior sudafricana, como no podría ser de otra manera adquiere un profundo cambio de timón y se va a fundamentar en el Ubuntu, tomando como sus principales ejes: el Renacimiento Africano, el Panafricanismo y la Cooperación Sur-Sur.

En la presente investigación analizaremos en el primer capítulo las bases del presente estudio enfocándonos en asuntos básicos como son migración humana, Política Exterior y política migratoria. En el segundo capítulo se analizarán asuntos fundamentales como son el apartheid; el apartheid en Sudáfrica; realismo y apartheid en Sudáfrica; a fin de contar con una panorámica muy clara de lo que significó el apartheid en ese país, así como también las consecuencias. En el tercer capítulo se analiza la política exterior y migratoria en Sudáfrica, a fin de conocer cuales fueron los avances de la misma con el fin del apartheid y la llegada de Nelson Mandela al Poder. En el cuarto capítulo se analiza la coherencia entre la política exterior sudafricana y su política migratoria, en la etapa post-apartheid. Y en el quinto capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones, así como también los anexos referentes a la normativa legal del apartheid.

## CAPÍTULO I

### 1. MARCO TEÓRICO

#### 1.1. Antecedentes

El Realismo y el Constructivismo son las principales teorías actualmente de explicación de las Relaciones Internacionales, y aunque raramente sean mencionadas como tales, están permanentemente en las noticias de un modo u otro (Del Arenal, 1990). En el caso que nos ocupa tomaremos la primera como base de nuestro trabajo investigativo.

El Realismo es la teoría más antigua de las dos y, de hecho, podríamos rastrearlo hasta Tucídides y la guerra del Peloponeso. Esta teoría parte del supuesto de que el mundo internacional es anárquico, porque no existe ningún sistema de autoridad central que pueda obligar a los Estados a obedecer y cumplir leyes, y por tanto los únicos actores que importan son los Estados. Al ser anárquico, impera el más fuerte, llevando a una visión donde destaca el papel de las potencias. Por supuesto, los demás países no suelen estar de acuerdo con la preponderancia de otro, de modo que compiten y luchan entre sí para incrementar su poder. Al querer todos ocupar los lugares hegemónicos, lo que surge es un conflicto permanente donde el engaño y la competencia (o, al menos, la sospecha de la misma) hacen imposibles las colaboraciones a largo plazo, debido a que es un juego de suma cero (o sea, cuando uno gana es porque otro pierde). En este juego, el principal poder que importa es el duro: cañones, barcos, regimientos de infantería, divisiones aéreas, etc. eso es lo que determina la capacidad de defenderse y agredir a otros y, con ello, la capacidad de controlar la política mundial. Política que debe buscar garantizar el control de los puntos estratégicos y el acceso a los recursos primordiales, dando una enorme importancia a la Geoestratégica. Los discursos de Bush y su gobierno son habitualmente claros ejemplos de una visión realista de las Relaciones Internacionales (Sequeira, 2013).

El paradigma realista fue llevado adelante sin duda por Bush en la invasión de Irak, donde desdeñó por completo la importancia de la legitimación de la intervención por parte de la ONU, crear grandes consensos internacionales, etc. Y, con ello, pese a que la intervención militar fue un éxito, el manejo posterior fue un fracaso (Del Arenal, 1990).

Una vez habiendo aclarado la teoría que utilizaremos de base para nuestra fundamentación teórica, nace entonces la necesidad de explicar por qué el realismo nos serviría a fin de acercarnos a la coherencia entre la Política Exterior Sudafricana y su Política Migratoria, en la etapa Post-Apartheid. Frente a ello, es importante observar cómo el Estado Sudafricano, desplegando toda la fuerza de su soberanía y la gran capacidad económica y política, pudo venderse ante el mundo en épocas donde la segregación racial había sido abolida, aunque de forma porque debemos admitirlo que se sigue expresando hasta la actualidad con diferentes tapices. Y continuando con nuestra profundización, cómo un país que seguía manteniendo dicho sistema que utilizaba la política migratoria como una de las herramientas para sostener su crecimiento económico, pudiera obtener el beneplácito de la comunidad internacional, frente a las constantes violaciones a los derechos humanos de los migrantes, así como también de los mismos sudafricanos negros, conminados a la exclusión y marginación total en su propia tierra.

Maximiliano Rodríguez (2003) del Observatorio de Conflictos de Argentina en su artículo “el apartheid sudafricano, un caso particular del desarrollo del imperialismo”, sostiene que “durante el desarrollo del apartheid, se establecen en Sudáfrica gran cantidad de mega empresas. Estos monopolios son Toyota, Kodak, BMW, Coca Cola, Colgate-Palmolive, General Motors y Volkswagen, entre otros. Producen una occidentalización del país demasiado notoria. Pasa de ser un país atrasado económicamente a convertirse en un país apto para la división internacional del trabajo. Pero la misma lógica que había producido las transformaciones descritas, ya no se podía aplicar porque estaba llegando a su fin. En este momento el sistema había chocado con sus propios límites de acción. Era evidente que debía reformularse, si los grupos blancos querían que siguiera funcionando”. Ahora bien, desde una perspectiva realista, podemos observar que a las compañías transnacionales que dominaban el Estado sudafricano, no les quedó otra opción frente a la catástrofe económica que se avecinaba, producto de bloqueos y sanciones internacionales; en dejar caer el régimen del apartheid, invocando

el interés nacional que ciertamente no era otra cosa que el interés de sus capitales, por lo tanto, a ellos no les interesaba que hubiera o no democracia en Sudáfrica, sino más bien que sus negocios se sostengan por ello no dudaron en entregar el poder político a los negros nativos, con la condición de que sus negocios no fueran tocados.

De la misma manera, podríamos decir que esta teoría encuentra asidero en el Estado Sudafricano, cuando Chango Illanes (s/f) plantea que “Mandela llegó al poder en el marco de un acuerdo entre el ANC y las grandes empresas transnacionales que manejaban el país, como Anglo Transvaal y Angloamerican Co.”. “El acuerdo consistía en terminar con el apartheid y mantener al capitalismo transnacionalizado. Mandela consiguió abatir el denigrante régimen del apartheid porque este no beneficiaba a las transnacionales sino solamente a los sudafricanos boers, blancos de origen holandés, defensores de intereses racistas, que habían promovido toda una legislación y un discurso de desarrollo separado de las etnias. Los boers ejercían el papel de intermediarios entre los intereses de las transnacionales y el pueblo africano, ante el cual se presentaban como agentes disciplinarios o burguesía intermediaria. Esta dinámica representaba un altísimo costo para las transnacionales. Por ello, a cambio de este acuerdo, las transnacionales contribuyeron a terminar con el sistema apartheid” (Instituto, 2008: 2 - 3)

Pues bien, con la llegada del Congreso Nacional Africano al poder en 1994 se promulgaron leyes dirigidas al control y a la regulación de los flujos migratorios, siendo las más importantes la Ley sobre Refugiados de 1997 y la Ley de Inmigración de 2002. Esta última dirigida a regular a las personas que iban a ser admitidas en el país, las que tenían intención de convertirse en residentes y finalmente, aquellas que saldrían de éste. Adicionalmente, en 1996 se redacta una nueva Constitución y una Carta de Derechos en las cuales se sustituye la palabra “*citizens*” por “*all persons*” en la asignación de libertades fundamentales y que se interpreta como una inclusión del inmigrante y una percepción del mismo como sujeto de derechos; podríamos decir que con la llegada del Congreso Nacional Africano al poder, las cosas cambiaron sustancialmente, en materia de derechos de movilización para los ciudadanos pero con esa lógica conectada al neoliberalismo, lo que viene a significar una continuidad de sometimiento de la sociedad ahora libre en beneficio de los dueños del capital. “Las presiones del FMI y del Banco Mundial impidieron una verdadera redistribución de las riquezas. Sudáfrica entraba al mercado



mundial, donde separarse del camino impuesto por los organismos multilaterales de crédito implica el “castigo” a los “malos alumnos”. Muchos integrantes del Congreso Nacional Africano, pensaron que el declive económico cuestionaría el mandato negro, o quizás esto fue solo la excusa de una burguesía negra, que comenzaba a ascender a medida que la economía de su país crecía. Para lograr este “despegue”, estimularon la radicación de inversionistas extranjeros lo que supuso privatizaciones masivas, ventajas impositivas, despidos, reducciones en el sector público, etc. más del 60% de la población vive bajo el límite de pobreza, mientras menos del 11% concentra la producción del país, el más rico del continente por sus riquezas naturales y su ubicación geográfica. Es una mezcla única de primer y tercer mundo cuyo resultado, más que el segundo mundo, es la dualidad. Un país que reproduce dentro de sus fronteras la realidad global, los inaceptables desequilibrios entre países ricos –representados por los blancos de Sudáfrica- y los países pobres –en la figura de los negros-” (Divinzenso, 2002).

No sería responsable sostener que no hubieron cambios con el ascenso al poder del Congreso Nacional Africano, pero en materia de libertades de movilización para ciudadanos extranjeros no se ha avanzado lo suficiente a la luz de los acontecimientos diarios, con redadas públicas, tal tiempo del apartheid.

“Sudáfrica es apodada como la "nación del arco iris" , es el punto de atracción de inmigrantes de todas partes de África e incluso fue sede de la última edición del Foro Social Mundial de las Migraciones (WSFM); sin embargo, África del Sur está todavía lejos de ser un país de colores. Además de las cicatrices y las heridas aún abiertas en la sociedad desde el régimen del apartheid, los migrantes que viven en suelo sudafricano han sido objeto de actos de xenofobia, que se han hecho más intensos en los últimos años” (Borges, D. 2015).

Es importante referirnos a datos y conocer que “La población extranjera en Sudáfrica, tanto documentada como indocumentada, para 2015 se estima en 5 millones de personas dentro de una población de 52 millones, con una tasa de desempleo de 25%. Teniendo como origen de estos grupos de migrantes a Zimbabwe, Zambia, Lesotho, Malawi, Swazilandia y Tanzania” (S.P. Folha, 2015). Este porcentaje pensado desde una población de “52 981 991 millones de personas”, es mínimo, sin dejar de lado la posición

del catedrático Jacques Ramírez, quien sostiene que “en temas migratorios las cifras habrá que tomarlas con pinzas toda vez que es imposible comprobar cuantas personas entran y salen de los países utilizando pasos ilegales” (Ramírez, 2014).

Es importante reconocer que existe una estrecha vinculación entre el reciente proceso neoliberal y las corrientes migratorias de las últimas décadas y de ninguna manera podríamos concebir un mundo globalizado sin poner como parte fundamental a las migraciones, la economía global necesita mano de obra barata que sustente el poder de las grandes economías de capital con una mínima responsabilidad social.

De la misma forma podemos observar que la política migratoria sudafricana se constituye en un obstáculo para la consecución de los objetivos panafricanistas, puesto que como resultado de las diferencias en las condiciones internas de cada Estado en África, los ciudadanos tenderían a emigrar hacia los grandes polos de desarrollo, dado que les ofrecerían una mejor calidad de vida. Ahora bien, a pesar de que el Estado sudafricano –como se afirmó anteriormente- ha sido uno de los principales abanderados de dicho discurso, su respuesta frente a la inmigración –sobre todo la irregular y la no calificada- ha sido como la que se manejaba en el Estado del Apartheid, quien “prefería la deportación en lugar de la sanción” (Republic of South Africa - Labour Department, 2007: 42)

Finalmente, se observa que la política exterior y migratoria del Estado sudafricano apuntan a direcciones diferentes, puesto que la primera maneja un discurso de apertura e inclusión de todos los pueblos africanos. Mientras que la segunda, muestra una Sudáfrica de puertas cerradas, en razón de la consecución de los objetivos de política interna relacionada con la inclusión de toda población nacional, el crecimiento y desarrollo económico. Por consiguiente, es necesario encontrar un equilibrio entre la política exterior, la política interna y la migratoria, para poder ampliar los principios basados en el Ubuntu hacia las poblaciones de inmigrantes .

Ahora bien, después de estos antecedentes se hace necesario analizar el concepto de migración humana, y posteriormente el concepto de política exterior y política migratoria.

## **1.2. Migración Humana**

### **1.2.1. Definición**

Lograr una definición única de las migraciones humanas, no es una tarea fácil, dada la complejidad del tema y los criterios que esgrimen varios autores sobre la materia, y es allí donde pasamos a observar lo que sostienen algunos de ellos.

Según Aída Ruiz, (2002) “Por migración entendemos los desplazamientos de personas que tienen como intensión un cambio de residencia desde un lugar de origen a otro de destino, atravesando algún límite geográfico que generalmente es una división político administrativa”. Como se puede observar nos encontramos frente a una definición simplista que de ninguna manera aborda el fondo del asunto que tiene que ver con las causas e implicaciones para ese desplazamiento, puesto que de ninguna manera esos desplazamientos son voluntarios, sino más bien vinculados a problemas que van desde lo social hasta las amenazas a la vida y la seguridad de las personas.

De su parte Michael Kearney y Bernadete Beserra (2002) “Un movimiento que atraviesa una frontera significativa que es definida y mantenida por cierto régimen político – un orden, formal o informal- de tal manera que cruzarla afecta la identidad del individuo”. Kearney y Beserra empiezan a acercarse a un concepto, dado que una vez que la persona salió desde esa frontera que no es otra cosa que la delimitación de los territorios por parte de los Estados, para aprovechar de la mejor manera de los recursos finitos que descansan en el suelo y subsuelo. El individuo se convierte en víctima de las consecuencias de esa decisión tomada ya sea voluntaria o no.

Concomitantemente Iain Chambers (1994), señala que “la migración implica un movimiento en el que el lugar de partida y el punto de llegada no son inmutables ni seguros. Exige vivir en lenguas, historias e identidades que están sometidas a una

constante mutación”. De la misma manera este autor cae en un error al observar la migración como una decisión simple y voluntaria de las personas y no se detiene a observar por un minuto que el problema migratorio tiene una base mucha más allá de la simple movilización y el no lograr la integración por parte del migrante.

De su parte, Ludmila Borisovna Biriukova (2002), manifiesta que “la decisión de migrar es el resultado de un cálculo racional en el cuál cada individuo compara los costos de la migración con sus recompensas”. Nuevamente la autora cae en la injusticia de atribuir al migrante las responsabilidades que deriven del acto como si la decisión o la acción de migrar sea una responsabilidad enteramente del migrante, y también se observa que la misma enfoca la problemática como una responsabilidad personal, dejando de lado las grandes causas que producen este fenómeno.

Por otro lado el Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay, en su informe sobre migración con motivo de su Censo 2010, realiza también una aproximación a la definición de migración “la migración es el desplazamiento con traslado de residencia desde un lugar de origen a un lugar de destino que implica el cruce de algún límite geográfico” (Censo, 2010). Este concepto empieza a aterrizar la definición de migración que más se acerque a la realidad, pero de la misma manera peca de inocente, porque no siempre los migrantes tienen un destino, sino más bien se trasladan de acuerdo a sus necesidades y grados de seguridad según los casos.

Como se puede observar, de la revisión de los conceptos dados por investigadores de la materia ninguno abarca la magnitud de la definición que se quiere dar, no se trata que los estudiosos estén equivocados en sus acepciones, sino más bien la magnitud del tema impide definirlo en cuatro líneas que significa definición, sino más bien va más allá. Dado que hablar de migración humana, no solo nos lleva a las decisiones libres y voluntarias que toman los hombres para trasladarse de un lugar a otro. En un principio de mi investigación, me refería a la génesis de la migración y más adelante me refería a esa migración forzada genocida que fueron víctimas grandes pueblos del África y que hasta hoy quedan secuelas del mayor flagelo de la humanidad como fue la esclavitud.

El tiempo pasó de la misma manera las modalidades de migración también cambiaron, y el desarrollismo inyectado por la globalización han seguido permitiendo que este fenómeno avance sin tenerse la certeza de cuándo va parar.

La migración hoy tiene tantas aristas y complejidades que de hecho es casi imposible conceptualizarla, pero me atrevería a afirmar que observando las definiciones esgrimidas por Kearney y Chambers, la migración no es otra cosa que *el desplazamiento de una persona, una familia o un grupo de personas, desde sus lugar de origen a un lugar incierto, producto de acciones que no dependen de su absoluta voluntad, sino más bien empujadas por situaciones que tienen que ver con el sistema donde viven que afectan su entorno*. Como se podrá observar, al referirme al desplazamiento, es importante reconocer que para que se hable de migración es importante que haya un desplazamiento desde su lugar de origen hasta un lugar incierto y lo contextualizo de esa manera, porque a pesar que el migrante tenga planteado viajar a un territorio X, no siempre se podría dejar por sentado que efectivamente ese va ser su destino, dado que en el trayecto y sus permanencia muchas cosas pueden suceder, por ejemplo, si se fue empujado por la crisis económica y aspira mejorar sus ingresos, al llegar al lugar X, puede suceder que las condiciones no son óptimas para su estadía dado que las ofertas de trabajo no son las mejores.

En caso que haya migrado por amenazas a su seguridad personal, sucede que las condiciones de seguridad en el país de destino sean malas, y tenga que migrar hasta otro lugar. Estos dos criterios a medida de ejemplos, son solamente dos explicaciones que aclaran el panorama del lugar de origen al lugar incierto, de la misma manera existen muchas otras circunstancias que de la misma forma fundamentan el criterio que el migrante sale de un lugar de origen a un lugar incierto.

Cuando me refiero a esas acciones que no dependen de su absoluta responsabilidad, me estoy enmarcando en aquellas circunstancias que a pesar que sean decisiones personales, siempre las mismas estuvieron empujadas por alguna situación del sistema; si una persona migra a otra ciudad u otro país para trabajar, lo hace aparentemente por su voluntad, pero realmente lo acontecido es producto de un sistema que empuja cada día a las personas a mejorar sus condiciones de vida, sin que ello

signifique que el migrante tenía la plena certeza de dejar su familia, su entorno y salir en busca de nuevas oportunidades, no es una decisión de plena voluntad, sino más bien sistémica, dado que las situaciones que son caracterizadas en el entorno son muy diversas, y pueden ser temas económicos, seguridad, salud, bienestar social, familiar etc.

### **1.2.2. Tipos de migraciones**

Al dar una mirada simplista de las migraciones, se entendería que estas se reducen únicamente en la emigración e inmigración, esto es en la salida o el ingreso de migrantes, lo que de hecho nos dejaría con un vacío inmenso al no explorar realmente los tipos de migraciones que de hecho son muy diversas. En el presente caso vamos a estudiar los tipos de migraciones con dos importantes intelectuales como son: Jorge L. Tizón García y Cristina Blanco, quienes serán la base para este análisis.

Jorge L. Tizón García (1993), en su obra *Migraciones y Salud Mental*. Realiza una importante aproximación a las tipologías de migraciones, es así que las agrupa de la siguiente forma: a) según el tiempo; b) según el modo de vida; c) Según las demandas y necesidades profesionales; d) según la edad; y, e) Según el grado de libertad. Cada una de estas agrupaciones generales, tienen subgrupos los mismos que pasamos a analizar.

#### **Según el tiempo:**

a) Estacionales. Son las de aquellos individuos, generalmente trabajadores, que se trasladan para recolecciones u otros trabajos y que sólo se realizan en determinadas temporadas del año.

b) Temporales reiteradas. Aquellas en donde a las personas se les renueva su contrato de trabajo, a medida que la empresa contratante va acometiendo nuevas tareas, hasta que se finalizan las mismas.

c) De varios años. Es la expectativa más frecuente entre los emigrantes modernos. Se emigra generalmente con la fantasía, a menudo irreal, de que solamente se

va a estar unos años fuera del país de origen. En muchos casos ello no es así y la emigración se convierte en definitiva.

d) Indefinidas. Se parte del lugar de origen con la idea de no volver a éste, salvo en vacaciones o en viajes ocasionales.

Como podemos observar, las migraciones según el tiempo tienen una característica común que consiste en que la persona empujada por intereses muy particulares sale desde su lugar de origen con el fin de mejorar sus condiciones de vida, como ya lo dije con anterioridad, a pesar que existe la voluntad de salir desde su lugar de origen, esa voluntad no es libre y espontánea, es más bien el producto de una acumulación de necesidades particulares derivadas del sistema en que se vive y la influencia de la globalización que empuja al ciudadano a la búsqueda de mejorar aparentemente sus condiciones de vida, sin importar sus derechos y garantías familiares.

Hablar de temporalidad, nos lleva a ese deseo innato del hombre que para conseguir sus objetivos se marca tiempos, aunque los mismos no siempre sean reales, existe visión de planear la vida a cierto tiempo, situación que no está lejos de la migración, se cree que en cierto tiempo trabajando en X o Y país voy a mejorar mi condición de vida, pero sucede que el tiempo marcado se convierte en poco y se sigue acumulando más tiempo hasta convertirse en migraciones indefinidas al punto que más adelante van arrancar sus familias desde sus lugares de origen y ser trasladadas a otras realidades muy lejos de la vivida por décadas, lo que acarrea grandes problemas en la adaptación y convivencia que en la mayoría de los casos acaban afectando gravemente la estabilidad familiar.

### **Según el modo de vida:**

Tiene que ver con las preferencias de un modo de vida de acuerdo a las actividades que realicen las personas en consonancia con su proceso vital. La tendencia en los últimos años ha sido migrar de los pueblos hacia las ciudades y en menor cantidad a la inversa.

Es importante reconocer, como lo he manifestado en el transcurso de esta investigación, que aunque las personas migren aparentemente por su voluntad, existen factores exógenos causantes de esas migraciones, la migración campo – ciudad, se ha



convertido en una situación tan habitual, y por otro lado la migración ciudad – campo, se ha vuelto una situación de élites. En el caso relacionado a la primera clase de migración, esto es campo – ciudad, se da por un sinnúmero de factores, que van desde el abandono del Estado a las poblaciones campesinas hasta la falsa ilusión que en la ciudad se acabarían todas las penas y dolores; el papel del Estado en la protección de los derechos de las personas del campo, al menos en los países subdesarrollados, es cuestionable, dada la alta tasa de pobreza y la total falta de acceso a servicios básicos de la población, sumado a que los derechos de las poblaciones rurales son vulnerados a diario por grandes compañías que se aprovechan de la tierra y sus recursos naturales, obligando a la población a abandonar sus tierras con la ausencia total del Estado que garantice sus derechos, vale manifestar que lo relacionado a la migración forzada se lo analizará más adelante dentro de la presente investigación.

La migración ciudad – campo, se ha convertido en un caso de élites, dado que las personas de estratos económicos altos retornan para el campo por dos razones: primero, con el fin de construir sus grandes haciendas y pasar a construir verdaderas emporios agroindustriales en algunos casos o haciendas particulares para el deleite familiar; segundo, las grandes empresas transnacionales miran el campo con el fin de extraer los recursos naturales que yacen en el subsuelo para lo cual de la misma manera que los anteriores utilizando pequeños pagos e inclusive la violencia sacan a las comunidades nativas con el fin de asentarse en sus territorios, lo que les obliga a trasladarse a las ciudades.

### **Según las demandas y necesidades profesionales:**

Buscando un status profesional estable. Es el caso de los trabajadores del campo que se incorporan a la industria.

a) Exigencia de la actividad profesional. Tal es el caso de los militares, funcionarios, diplomáticos, etc.

b) Búsqueda de un desarrollo superior. Aquí se engloban las migraciones de los intelectuales, que buscan nuevos horizontes formativos y/o profesionales fuera de sus fronteras.

El presente tipo de migración tiene una característica importante, que es la vinculación de una actividad laboral que obliga al proceso migratorio pero por otro lado se incluyen las migraciones relacionadas con intelectuales que con el fin de mejorar sus condiciones profesionales y de vida emigran.

Es importante reconocer que este tipo de migración es la aplaudida por los países de destino de migrantes, dado que este tipo de migraciones permiten el engrandecimiento de sus países, primero por los gastos que realizan funcionarios diplomáticos y de más altos ejecutivos que vivirán por un tiempo en sus países, y por otro lado el gran aporte que darán los intelectuales, grandes deportistas y personas que ayudarán al mayor desarrollo de esos países; en estos casos las puertas están abiertas e inclusive hay un sinnúmero de incentivos para la migración a los países destino de migrantes, pero por otra parte claro, se cierra la puerta a esa otra migración sin educación y sin mayor preparación que aspira llegar a esos países. En el presente caso nos hace regresar y mirar las dos puertas planteadas inicialmente por el régimen sudafricano para el ingreso de migrantes.

#### **Según la edad:**

a) Infantil. Los niños suelen cambiar de país acompañando a sus padres, generalmente al mismo tiempo o después que éstos. Se trata de un dato importante porque, tanto en un caso como en otro, los niños van a padecer doblemente el hecho migratorio: directamente y a través de lo que les transmiten los padres. Además, cuando emigran después de los padres, lo hacen tras un periodo en el que se han visto privados de éstos y, posiblemente, han podido vivir una situación de mayor o menor deprivación afectiva. No obstante si tal deprivación afectiva ha sido adecuadamente substituida desde el mismo punto de vista (afectivo), a la larga les será más fácil integrarse en la nueva tierra, ya que es probable que se hallarán menos integrados en el origen, que sus mayores.

b) De adultos. Son los que lideran el proceso a partir de sus criterios y necesidades, incluyendo en estas aquellas que les atañen como responsables del cuidado, atención y manutención de otros.

c) De ancianos. Los ancianos pueden verse forzados a abandonar su pueblo por diversos motivos: porque va quedando deshabitado, para buscar disfrute y mejor calidad de vida en otros lugares después de la jubilación o porque sus hijos ya han emigrado con anterioridad y quedan solos. Unirse con sus hijos nuevamente les brinda la

posibilidad de reemprender la vida con los nietos y complementar las experiencias que tuvieron con sus hijos. De todas maneras una migración para una persona de edad conlleva siempre importantes dificultades psicosociales que, si no son adecuadamente atendidas facilitan enormemente la descompensación psicopatológica del emigrante.

Este tipo de migraciones, se han convertido en muy comunes en la mayor parte de países del mundo, y es que cuando los migrantes se han establecido y creen haber logrado una estabilidad, en la mayoría de los casos, su primer pensamiento es su familia, para lo cual en la mayoría de los casos utilizando procesos tan peligrosos como los que ellos han utilizado con anterioridad, buscan esa tan anhelada reunificación familiar, trasladando sus familias a lo que también se incluyen en muchos casos sus padres que a pesar de la edad y ese arraigo al lugar en el que han vivido por décadas, se ven obligados a salir y vivir en condiciones que terminan afectando su salud mental.

Cabe señalar que no siempre el tipo de migración debe ser transfronteriza, es allí donde los riesgos a la seguridad de los migrantes es alta, bajando la intensidad cuando son migraciones en el mismo país, esto es campo – ciudad o de una región o ciudad a otra.

### **Según el grado de libertad:**

a) Voluntarias. Hoy este tipo de migración se observa especialmente en aquellas personas cuyo móvil y motivación principal es de tipo económico.

b) Forzadas. Dentro de éstas se consideran:

✚ Los esclavos. En épocas de colonización fueron llevados grandes contingentes de seres humanos para ser explotados por los colonizadores. Esta práctica perduró durante largos años.

✚ Los deportados o desterrados. Son aquellos a los que se les obliga a dejar su país o región porque se les quita su tierra. Aunque sufren todos los avatares de la emigración y generalmente descienden en su status social, muchas veces pueden ser ayudados por otros compatriotas o por organizaciones sociales o políticas.

✚ Los refugiados. Aquellos que han de abandonar su país porque de lo contrario peligran su medio inmediato de vida o incluso su vida misma. Al igual que los

anteriores, suelen tener más dificultades de asentamiento en el país receptor ya que a menudo hacen el cambio precipitadamente.

Hablar de migraciones voluntarias y forzosas, nos lleva a profundizar en el tema y determinar que no existen migraciones voluntarias, porque ninguna persona saldría de su lugar de origen si estuvieran garantizados todos sus derechos en la medida que su formación y sus conocimientos no necesiten de otros espacios para su desarrollo. Siempre en las migraciones existirán situaciones particulares que obligaran a la persona a migrar, puesto que de ninguna manera en un solo espacio estarían todos los componentes necesarios y suficientes para la realización de una persona, es allí la génesis de la migración como tal.

De su parte las migraciones forzosas, vienen sucediendo desde la génesis de la humanidad, y miles de años después retratada en la biblia con el antiguo testamento y la salida de los israelitas desde Egipto, más adelante en el siglo XVI, con una de las mayores masacres humanas que fue el proceso de esclavitud del pueblo africano arrancado desde de África, y ya en el siglo XX con el exterminio del pueblo judío en Alemania, y recientemente con la cantidad de desplazados que a diario deben abandonar sus tierras originarias, amenazados por guerras y más acciones que impiden su permanencia en el territorio.

Como se podrá observar, los tipos de migraciones forzosas tienen un largo antecedente y un sinnúmero de casos que avergüenzan la conciencia universal, lo que significa que de ninguna manera son hechos recientes en la humanidad, sino más bien por el contrario su recurrencia ha perdurado por miles de años.

Por otra parte Cristina Blanco (2000), en su obra *Las Migraciones Contemporáneas*, establece la siguiente tipología a partir de categorías como el límite geográfico, la duración, los sujetos de la decisión y las causas.

- a) De acuerdo al límite geográfico las migraciones pueden ser:
  - Internas
  - Externas o internacionales
  
- b) De acuerdo a la duración pueden ser transitorias o definitivas

- c) De acuerdo a los sujetos de la decisión se presentan migraciones espontáneas, dirigidas o forzadas.
- d) De acuerdo a las causas que las motivan las migraciones son ecológicas, políticas o económicas.

Blanco (2000), explica cada una de sus categorías de la siguiente manera:

Con respecto a las *migraciones internacionales*, pueden ser establecidas dos subcategorías. La primera es cuando se traspasan fronteras nacionales, y los movimientos están sujetos a control administrativo, muchas veces por parte del país emisor y siempre por parte del país receptor. No basta con querer emigrar, es necesario que el país de destino acepte la estancia del nuevo inmigrante. Para ello se deben cumplir una serie de requisitos que determinan la admisión y establecen la situación jurídica del inmigrante en el nuevo país. Cuando el inmigrante cumple con todos los requisitos legales para instalarse, la inmigración es legal. Cuando no es así y, a pesar de ello, el inmigrante se instala en el país de destino, se configura una inmigración ilegal. Cabe decir que la legalidad o ilegalidad es un atributo ligado a situaciones, hechos o acciones, pero nunca a personas. Por ello no es correcto hablar de inmigrantes legales o ilegales, a pesar de que el uso de estos términos está totalmente extendido, sobre todo para el caso de éstos últimos. Es más correcto denominarlos inmigrantes indocumentados, irregulares o clandestinos, además de que ello disminuiría la fuerte carga negativa que recae sobre este tipo de inmigrantes. Por otro lado, y aunque es menos frecuente en las sociedades occidentales, donde existe una reconocida libertad de emigrar (no así de inmigrar), los movimientos también pueden ser ilegales o legales desde el punto de vista de la emigración.

La segunda subcategoría dentro de las migraciones internacionales hace referencia al traspaso de ciertos límites no establecidos ya por los Estados, sino por unidades territoriales más amplias. Para el caso de la Unión Europea se ha implantado fuertemente una diferenciación entre ciudadanos comunitarios y no comunitarios en función de los acuerdos establecidos.

En cuanto a su duración, las migraciones *transitorias* son aquellas en las que el migrante establece su residencia en el lugar de destino como una etapa transitoria (caso típico de los trabajadores temporales). Las migraciones *de carácter permanente* son aquellas en las que los migrantes establecen su residencia en el lugar de destino de forma

definitiva o por un prolongado espacio de tiempo (como puede ser la duración de su vida laboral).

En cuanto a los sujetos de la decisión, se diferencian las migraciones *espontáneas, dirigidas y forzadas*. Las primeras son aquellas en las que el migrante decide voluntariamente abandonar su lugar de origen sin mediación institucional alguna o sin verse forzado a ello. En las migraciones dirigidas el migrante mantiene su voluntad de emigrar, pero instalado por agencias favorecedoras de los desplazamientos. Es el caso conocido del reclutamiento de mano de obra extranjera en algunos países europeos, tras la Segunda Guerra Mundial. Por último están las migraciones forzadas, en las que el migrante no decide voluntariamente su traslado, ni muchas veces su destino (caso de los esclavos, repatriados, exiliados...).

La última tipología, a la que hace referencia Blanco, es la relacionada con las causas de los desplazamientos. Las más frecuentes históricamente hablando, son las *ecológicas, las económicas y las políticas*. Las primeras son causadas por catástrofes naturales o situaciones adversas del hábitat, las cuales fueron muy numerosas en épocas primitivas, cuando el ser humano aún no disponía de los medios técnicos necesarios para hacer frente a los desastres naturales o sus consecuencias.

*Las migraciones económicas* son las producidas, como su nombre lo indica, por causas económicas. En este tipo de migraciones los individuos parecen tomar “libre y voluntariamente” la decisión de migrar.

*Las políticas* son las provocadas por intolerancia nacionalista, por intransigencias religiosas o políticas, por situaciones sociales altamente conflictivas. Aquí se incluyen todos los movimientos originados por cualquier tipo de conflicto bélico o por persecuciones de carácter racial, étnico, dando lugar a las figuras de los desplazados, exiliados, aislados o refugiados.

Como podemos observar, Blanco con esta caracterización se acerca a un más a la génesis de las migraciones, y reconoce ciertamente que el mismo sistema estereotipa el proceso migratorio, así como también utiliza la migración de la manera más conveniente para sus intereses; por lo tanto deja muy claro características básicas ya esgrimidas por Tizón en relación a las migraciones forzadas. El caso sudafricano encaja perfectamente en el análisis de Tizón y Blanco, dado que con la institucionalización del

Ubuntu, los sudafricanos vienen a convertirse en apátridas con las consiguientes aplicaciones de leyes que laceraban sus mas elementales derechos.

Nótese que aquella violación flagrante al derecho a migrar, no solamente afectaba a los sudafricanos, sino mas bien a los extranjeros negros que llegaban con la falsa ilusión de mejorar sus condiciones de vida en ese país.

El tipo de migración existente en Sudáfrica, desde un inicio y tal como lo sostengo dentro del presente estudio no es diferente a las demás migraciones en América; con la llegada de los conquistadores europeos observaron ese territorio como parte de la nada y donde se hacía necesaria la dominación de lo originario con el fin de extender sus dominios y más allá de la simple dominación territorial estaba el interés de ocupación absoluta de las tierras y personas, eso significa la reinstalación de un sistema esclavista en pleno siglo XX. Posteriormente encontramos que los principales tipos de migraciones que han operado en Sudáfrica, antes, durante y después del apartheid han sido: migraciones según el tiempo y según la forma de vida; dado que en un principio las migraciones hacia Sudáfrica por parte de los europeos y africanos, estaban enfocadas en trabajar por una temporada y después regresar a sus países de origen, situación que estaba ligada también a mejorar sus condiciones de vida.

Es importante reconocer que dado el desarrollo industrial sudafricano, producto de sus riquezas naturales explotadas y bien comercializadas en Europa por parte de los blancos, en detrimento de la escasa industrialización de los demás países africanos, envueltos en guerras, aupadas por la misma Europa, permitió que Sudáfrica se convierta en el país más adelantado del África, lo que indudablemente contribuyó a su pujanza económica, en detrimento a los derechos humanos de las comunidades locales y peor aún de los migrantes.

### **1.3. Política exterior**

Considerando que una de las bases de este trabajo de investigación es analizar la política exterior sudafricana en la etapa pos-apartheid, haremos una exposición de esta teoría que se va convertir en parte fundacional del presente estudio, y así como también



observar más adelante como la política exterior fue planteada antes, durante y después del apartheid, así como también estudiar la contradicción de esta, con la llegada de Nelson Mandela al poder quien va a sustentar su política exterior en principios básicos para la convivencia global, análisis éste que se realizará a medida que se avance en la investigación. Miremos entonces que dicen los científicos sobre política exterior.

### **1.3.1. Definición**

Alcanzar un concepto unificado de lo que es la política exterior, no es una tarea fácil dado que es una materia que involucra a un sinnúmero de actores endógenos y exógenos, lo que dificulta encontrar un concepto uniforme que la defina. La política exterior de ninguna manera se la puede observar únicamente como esa área creada solo por tecnócratas que se enfocan específicamente en asuntos internacionales, de la misma manera no se la podría encasillar en el área de la diplomacia solamente, dado que los diplomáticos ejecutan esa política que está creada con anterioridad por actores estatales; consecuentemente podríamos afirmar que la política exterior de ninguna manera se podría quedar en un simple diseño, sino más bien profundizar en cuestiones básicas que interesan a los estados, así como también convertirse en ese manual de consulta práctica para la toma de decisiones que interesen al país.

Es importante observar que señalan algunos teóricos sobre la materia, por lo que nos remitimos a Reynolds (1971) quien sostiene que “la política exterior, puede por lo tanto, ser ya definida como el conjunto de acciones de un Estado en sus relaciones con otras entidades que también actúan en la escena internacional con objeto, en principio, de promover el interés nacional”. Por su parte Medina (1973) sostiene que “la política exterior representa la forma en que un país se conduce frente a su contexto externo”. Por otro lado Tomassini (1991) expresa que “al respecto también puede ser útil señalar lo que no es una política. Desde luego, como se ha dicho, no debe ser confundida con la decisión que generalmente es más circunstancial y más estrecha y es adoptada dentro del marco más general de una política, como ocurrió con las decisiones de intervenir en Suez o de invadir las islas Malvinas. Toda política involucra intenciones, sin reducirse a ellas, pues incluye también el comportamiento inspirado por esas intenciones. Sin embargo, dicho comportamiento puede involucrar acciones y omisiones”.

Como podemos observar, todas las definiciones de los estudiosos que acabamos de analizar, se acercan de buena manera a una definición de política exterior, pero de ninguna manera conceptualizan el tema de manera tal que aquello encuadre en una definición suficientemente clara para acogernos a ella, ya que Reynolds claramente se enfoca en las acciones que tienen que ver con las relaciones de otras entidades que actúan en el escenario internacional, así como también en el interés nacional, lo que de ninguna manera podría ser una conceptualización enteramente clara, puesto que las relaciones con otras entidades en el campo internacional, no siempre van e enfocarse en el intereses nacional del estado, sino más bien en las circunstancias y oportunidades que sean necesarias y satisfactorias para el Estados como tal, porque si cada estado en el campo internacional se mueve siempre de acuerdo a los intereses nacionales, de ninguna manera podría haber acuerdos internacionales, dado que cada país tendría sus propios intereses nacionales que en su mayoría no sean compatibles con el interés nacional de los otros Estados, vale la pena referirse en el presente caso, a la ejecución en enero y abril de ciudadanos extranjeros en Indonesia por el delito de tráfico de drogas, a pesar que la decisión de Indonesia respondía al interés nacional de ejemplificar con esas ejecuciones el no cometimiento futuro de dicho delito, significo un gran ataque al interés nacional de otros estados quienes no aplican la pena de muerte, así como también el más duro golpe fue la pérdida de la vida de sus ciudadanos, lo que llevó a sus gobiernos a pensar en acciones diplomáticas en contra de Indonesia.

La definición de Medina, peca de simplista, porque de ninguna manera podríamos observar la política exterior de un Estado como la forma en que un país se conduce frente a su contexto externo, dado que la política exterior de un país, no puede ser enfocada simplemente desde el gobierno de turno como tal, no puede moverse al son de las olas, dado que aquello generaría una seria debilidad en el contexto internacional.

La política exterior, a pesar que nazca dentro de una etapa política determinada, no podría ser considerada como una política exterior de gobierno, sino más bien una política exterior de estado, sin importar la tendencia política en el poder, esta política exterior, no podría cambiar considerablemente, puesto que su diseño debería nacer desde la base de la sociedad del estado correspondiente, no vamos a decir que se debería

consultar cada párrafo de la política exterior a la ciudadanía, pero de manera general, se podría interpretar el sentir el ciudadano que debe estar reflejada en ella. Es verdad que las tendencias políticas son diferentes dentro de un estado, pero la forma de expresarse esa política debe ser la que cambie, pero las bases programáticas de esa política deberían estar sembradas y definidas dentro del marco general del Estado, es por ello un riesgo el constante cambio y reforma de las constituciones en países menos adelantados, porque so pretextos de cambios y reformas, proceden a modificar en muchos casos las bases constitutivas de los Estados que engloba la política exterior.

Tomassini por otra parte, es pragmático al señalar que no puede ser confundida con la política exterior, las acciones circunstanciales de una política exterior, dado que una acción aislada de ninguna manera podría conceptualizarse como política exterior, uno de esos caso podría ser considerado la pena de muerte en casos de narcotráfico a extranjeros ya señalado en párrafos anteriores; pero si podría considerarse como una expresión de política exterior, las acciones ejecutadas por los Estados Unidos de América (USA), así también como por la Organización del Atlántico Norte (OTAN), políticas exteriores dirigidas claramente a la intervención en otros países con el fin de garantizar el futuro consumo para sus propias economías de los recursos de los países a los cuales invaden.

Ahora bien, la definición que más se ajusta a política exterior es la planteada por Calduch (1993), quien sostiene que es “aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de un Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con otros actores de la sociedad internacional”. Como podemos observar Calduch parte desde la disgregación inicial de la política en general y la enfoca acertadamente al sostener que es una parte de la política que se articula de un conjunto de decisiones y actuaciones, que nos es otra cosa que las decisiones gubernamentales y las actuaciones vendrían hacer las acciones del servicio exterior o los militares en tiempos de guerra, cuyas decisiones y actuaciones definen los objetivos para generar, modificar o suspender sus relaciones con los actores internacionales, definición que acertadamente encierra en un todo la definición de política exterior.

### **1.3.2. Etapas de la Política Exterior**

Como no podría ser de otra manera, la política exterior no podría abstraerse simplemente a definiciones generales o particulares, puesto que si así fuera no tendría razón de ser su existencia puesto que nos quedaríamos en planteamientos conceptuales y dejaríamos de lado la importación e implementación de la teoría para convertirla en práctica. Es allí entonces, donde nos toca analizar cómo se articula la política exterior con el fin de darle validez a la teoría inicial.

Con este antecedente, creemos plausible sostener que una política exterior debería tener tres componentes básicos para su desarrollo, a decir: diseño, implementación y evaluación.

### **1.3.3. Diseño**

Pensar en diseño, no sería otra cosa que la elaboración como tal de la política exterior, y esa elaboración para que sea legítima debe partir desde los valores del pueblo que se representa, sería ilegítima una política exterior que nazca únicamente de las elites y que no represente ciertamente el sentir popular, que no se identifique con la razón de ser de un estado que es el pueblo, algunos párrafos atrás me refería esa legitimidad que debería estar basada en aspectos constitucionales al menos, y no en la decisión simple de tecnócratas.

Al revisar la obra *América latina y el Caribe: Políticas Exteriores para Sobrevivir*, compilado por Heraldo Muñoz (1985), observamos que el autor realiza un recorrido de las políticas exteriores de cada uno de los países de América latina y el Caribe, llegando a la conclusión que la elaboración de su política exterior, salvo raras excepciones de países nacían desde el seno de las aspiraciones de la sociedad, sino más bien fueron políticas exteriores diseñadas en el momento y frente a los temas acuciantes de la época, y de ninguna manera representaban el gran intereses de las mayorías, es cierto que de ninguna manera la política exterior va recoger las ideas y criterios de toda la población de un estado, pero en todo caso es necesario implementar acciones que signifiquen contar con elementos que validen la implementación de la misma.

En la obra “A America Latina e a Política Mundial”, editada por Heraldo Muñoz y Joseph S. Tulchin, (1984) los autores realizan un análisis a profundidad de que significó la formulación de la política exterior brasileña, así como también los grandes dilemas que se formaron en sus momento por el tema de la representación y las responsabilidades en el exterior, así como también realizan una extensa explicación a la época del gobierno militar en Brasil, donde a pesar de un sinnúmero de decisiones equivocadas en el campo internacional, estos respetaron el diseño de la política exterior definido desde los años de 1930 por el Barón de Río Branco.

Consecuentemente Daniel Ortega, en su libro “El acero de la guerra o el olivo de la paz” (1983), en sus discursos básicos sobre la Política Exterior de la Revolución, hace énfasis en las bases de su política exterior, explica de donde nace la política exterior de la revolución frente el saqueo de la patria por parte de la dictadura de Somoza.

Como se puede observar, el diseño es la base de la política exterior, son los cimientos que permitirán el sostenimiento en el tiempo y el espacio de la aplicación de la política exterior, vale entonces señalar que el diseño de la política exterior de un Estado, es la piedra angular de su largo trajinar en la comunidad internacional.

#### **1.3.4. Implementación.**

La ejecución de la política exterior es la segunda fase en la existencia de una política exterior y esta empieza desde que la misma ha sido diseñada, como bien está ejemplificado en el texto “A agenda internacional do Brasil, a política externa brasileira de FHC a Lula”, de Amauri de Souza (2008). En esa obra se hace un análisis del Brasil y el sistema internacional, así como también de las prioridades de la Agenda Internacional del Brasil, como se podrá observar esta ya es la puesta en movimiento de una política exterior que ya está elaborada y lo que explica esta obra es su implementación para lo cual se analizan a profundidad los escenarios internacionales para su implementación, seguido por el cambio de gobiernos que vienen desde la derecha con Fernando Henrique Cardoso hasta la izquierda con Luis Ignacio Lula da Silva.

Como se podrá observar, el caso brasileño es el más claro ejemplo de implementación de la política exterior, puesto que sin importar las tendencias políticas de turno, la política exterior sigue su propio rumbo, no vamos a negar que de una u otra forma los políticos de turnos den un guiño de ojo a gobiernos amigos, así como implementaciones que más favorezcan a sus aliados internacionales, pero de ninguna manera el diseño general de su política exterior va variar, esa está diseñada y sin importar quien este de turno en el Palacio de Planalto, esa se cumple.

### **1.3.5. Evaluación.**

Como no podría ser de otra manera, la aplicación de toda tipo de política debe ser evaluable para determinar su efectividad, en vano sería sostener algún tipo de política que no sea efectiva, en estos casos se podrían observar políticas exteriores de países adelantados, quienes al final de cada mandato realizan una evaluación de la aplicación de la política exterior, para determinar su continuidad o el cambio de estrategias según el caso, dado que su diseño inicial no va variar por la fuerte institucionalidad de esos países.

Después de un análisis claro de la política exterior, podemos observar que en el caso sudafricano, esta fue implementada con el único fin de hacerle creer al mundo que en dicho prospero territorio africano, no existían violaciones a los derechos humanos y peor aún discriminación racial, y sobre todo que la forma de obtener el tan anhelado desarrollo era mediante la implementación de un sistema racial que determinaba claramente la inferioridad de las personas por su color de piel.

## **1.4. Política Migratoria**

La política migratoria sudafricana en la etapa pos-apartheid, es sin duda también parte fundacional de esta investigación, es importante entonces revisar esta teoría que se va convertir en parte fundacional del presente estudio, y así como también observar más adelante como la política migratoria entra en contradicción con la política exterior planteada por Mandela, nótese que dentro de la etapa del apartheid, la política exterior se adecuaba a la perfección de lo que buscaba ese sistema. Pasamos entonces a dar una mirada a lo que dicen los científicos sobre política migratoria.

### **1.4.1. Definición**

La política migratoria de un país tiene muchos detalles que la convierten en particular, dada la visión de cada Estado; nos atreveríamos a afirmar, que la visión de migraciones para los países desarrollados, nunca van a ser coherentes con las visiones existentes en los países en vía de desarrollo. Así como también el diseño de una política migratoria así también como su implementación está muy ligada a las épocas a y aspiraciones de los Estados. Por ejemplo, la visión de migración de los años 30 y 50, en Europa y Estados Unidos, al término de dos guerras mundiales, ya no es la misma visión del nuevo siglo donde las economías europeas están muy afectadas y decir de los Estados Unidos con una migración intensiva.

Los tiempos cambian, así como también las necesidades de los países, en medio de la primera guerra mundial, se necesitaba la presencia de extranjeros en Europa en llamas para convertirse en cañón, posteriormente al término de la guerra, era necesaria la presencia de inmigrantes para levantar la Europa devastada por la guerra, entonces se hacía necesaria la elaboración de una política exterior que se adaptará a las circunstancias del momento. Por su parte los Estados Unidos, en medio de las dos guerras, necesitaba mano de obra extranjera para ser explotada al más alto nivel y poder cumplir con las grandes demandas de sus aliados en la producción de un sinnúmero de bienes y servicios para la guerra; como se podrá observar la visión de la política migratoria ha venido mutando paulatinamente.

Por su parte, los países menos desarrollados, no tuvieron una visión clara sobre la elaboración de una política migratoria, dado que la visión era abrir las puertas para el extranjero, porque este venía colmado de conocimientos y grandes cantidades de dinero para la inversión local, lo que permitía una apertura total con mínimos requisitos de ingreso; lo cual no podríamos llamarlo de ninguna manera política migratoria, dada su escasa estructuración, así como también su nula aplicación. Estos países, dejaron abiertas las puertas para la migración indiscriminada de sus ciudadanos con las expectativas de las futuras remesas de estos, o también permitir la salida y alivianar la carga estatal, que de una u otra manera permitirán generar algún tipo de beneficio económico al país, tómese

en cuenta el gran sostén dado a muchos de nuestros países las grandes remesas enviadas por migrantes.

Con estas aproximaciones podríamos afirmar con toda claridad que la política migratoria no es otra cosa que aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de un Estado para permitir el desplazamiento de una persona, una familia o un grupo de personas, desde su lugar de origen a otro.

#### **1.4.2. Características de la Política Migratoria**

Según Manuel Augusto Costa (1971: 104), las características de la política migratoria pueden ser económicas, sociales, demográficos. La intervención debe ser efectuada con una perspectiva abrazante y por tanto insertada como capítulo especial en una política demográfica y económica. Como lo señalé en páginas anteriores, la política migratoria se la diseña de acuerdo a las situaciones que se presenten en un territorio dentro de un determinado periodo de tiempo, es por esta razón que las políticas migratorias son mutables y se van adaptando a las situaciones, de ninguna manera se puede observar una política migratoria como un mandato constitucional, sino más bien como ese mecanismo que permite una convivencia eficaz de la sociedad preservando su sostenimiento.

En el caso sudafricano, observamos que el tipo de política migratoria se implementó en base de las necesidades políticas de la época, convergiendo en la misma situaciones económicas y sociales

Partiendo de las características de la política migratoria, según Costa, encontramos que en las *Económicas*, la aplicación de una política migratoria enfocada en la economía, tendría una doble aplicación, porque podría ser aplicada por parte de un Estado para la captación de mano de obra barata y semi-explotada con el fin de mejorar su producción gracias a la explotación de extranjeros en el país de destino; y, por otro lado el país que envía sostiene su economía gracias a las remesas remitidas por los expatriados. En el caso sudafricano se observa que las grandes empresas transnacionales



estaban interesadas en la mano de obra barata y con nulos derechos, de tal forma de lograr el aumento de sus ganancias, transgrediendo los derechos de sus trabajadores.

*Sociales*, la aplicación de este tipo de política se aplica dada una complejidad de situaciones que pueden ir desde guerras civiles hasta persecuciones políticas, política que se aplicará para acoger personas amenazadas en su integridad, ya sea por cuestiones de violencia o acciones de la naturaleza. Esta característica se aplica perfectamente en el caso sudafricano, dado que con la expulsión y reclusión de los nativos africanos en los bantustanes, se hacía necesaria la abertura de la puerta de atrás para el ingreso de población negra de los países vecinos, quienes motivados por la pujanza de ese país, van a viajar en condiciones inhumadas hasta Sudáfrica, para después convertirse en competidores de los nativos y base fundamental para las disputas que van a alimentar la xenofobia entre africanos.

*Demográficas*, este tipo de política se aplica frente al envejecimiento de la población en un país o área geográfica determinada, por cuestiones que tienen que ver con exterminios de la población por guerras, o por afectaciones de la naturaleza.

## CAPITULO II

### 2. APARTHEID

#### 2.1. Definición

Previo a analizar el apartheid propiamente dicho, se hace necesario analizar el racismo de manera general y para ello nos vamos a referir al estudiado efectuado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de la República de Argentina, quien manifiesta claramente que el antecedente al racismo es el sistema esclavista impulsado desde Europa (principalmente, portugueses, holandeses e ingleses) durante los siglos XV a XIX que apeló al secuestro, traslado y explotación compulsiva de personas africanas que fueron tratadas como instrumentos de comercio. La mercantilización de los cuerpos, expresada en el sometimiento extremo de mano de obra esclava africana e indígena, es un antecedente representativo del paradigma de progreso que instituyó la asociación del color oscuro de la piel (el imaginario de “raza negra”) con lo negativo y al color claro de la piel (el imaginario de “raza blanca”) con lo positivo, delineando estructuras de poder.

La diferenciación de la humanidad en supuestas “razas humanas” se remonta al siglo XVIII con las primeras clasificaciones exhaustivas del mundo. Carlos Linneo, un botánico y zoólogo iluminista, estableció las primeras taxonomías sistemáticas del reino vegetal y animal, y brindó las primeras clasificaciones de grupos humanos con características culturalmente vagas al día de hoy (figuraban “el hombre con cola”, “el sátiro” y “el troglodita”, por dar algunos ejemplos). Luego, surgirían las clasificaciones según pertenencias geográficas asociadas a características de personalidad. En la misma época, el conde de Buffón fue el primero en hablar de “razas” humanas y fueron “explicadas” según el clima al que estaba referenciado cada grupo, según el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de la República de Argentina. Podemos afirmar que el racismo se encontraba latente en estas ideas.

Según el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de la República de Argentina, el siglo XIX trajo consigo el auge del paradigma del evolucionismo cultural. Tomando la idea de “progreso” vigente desde la ilustración,

el evolucionismo cultural fue el ordenamiento de las sociedades humanas existentes en “estadios” supuestos de la humanidad, caracterizados según el grado de desarrollo tecnológico. De esta manera, los estadios donde ubicar a cada sociedad estuvieron determinados por la mayor o menor presencia de la dimensión naturaleza o cultura en su desarrollo social, lo que diagnosticaba el grado de progreso en el que se encontraba (referenciada en el desarrollo tecnológico).

Si pensamos en una línea imaginaria cuya flecha apunta hacia un extremo, el punto de partida, valorado negativamente, correspondería a un estado primario de naturaleza, y el punto de llegada, valorado positivamente, sería un estado de máxima cultura. El “progreso” estaría expresado en esa flecha que se aleja de la naturaleza y avanza en pos de alcanzar mayor “perfección” cultural (INADI, 2015).

Esta idea, bajo un criterio de desarrollismo tecnológico y cultural ordenaba la evolución y estaba signada por un movimiento direccionado hacia un solo destino evolutivo: el modelo de sociedad europea occidental como máximo ideal a alcanzar. Los pueblos no occidentales, como los pueblos indígenas y africanos, el pueblo árabe o el gitano, entre otros, fueron vistos como rudimentarios, cercanos a la “naturaleza”.

Así, fueron clasificados como “bárbaros” o “salvajes” los más lejanos a la propuesta de progreso europea, pueblos que por ello estaban supuestamente más cercanos a la naturaleza, asociada a la animalidad, la irracionalidad y la inmadurez, lo que justificaba por su parte, comportamientos paternalistas de conquista por parte de Europa en nombre de “la civilización”.

Aunque la idea de evolución ya reinaba en las teorías sociales de la época, el pasaje hacia la racialización fue posible por el triunfo del paradigma darwiniano sobre la evolución de las especies, donde una de las claves es la herencia biológica que opera como transmisor de lo que la selección natural favorece.

De esta forma, el paradigma darwiniano interpretado con el sesgo ideológico dominante fue extrapolado a lo social y vino a reforzar este racismo agazapado desde la Ilustración en la idea de progreso de las sociedades, ahora definitivamente en términos de evolución, biologizando los discursos.

Fue así que a partir del evolucionismo cultural se definió la idea de diferenciación racial por causa biológica, según la cual, a través de la herencia basada en la sangre como metáfora de la herencia genética, se transmitían las aptitudes culturales de cada grupo.

En el siglo XIX el paradigma del evolucionismo cultural vino a asentar estas clasificaciones que dieron lugar a un ordenamiento de las sociedades en una línea de evolución cultural. A una diferenciación grupal –que no era otra cosa que una diferenciación cultural eurocentrada – se le asociaron características físicas, donde el contraste radical fue “lo blanco” europeo “civilizado” frente a “lo negro” africano “salvaje”.

Así, el evolucionismo cultural sirvió de trasfondo para la ideología de las “razas” humanas: diferencias físicas y sociales aparentemente transmitidas por herencia biológica, destacándose el color de la piel como principal rasgo clasificador. En un contexto claro de formación de los Estados-nación, y por consiguiente de construcción de discursos nacionalistas asociados al expansionismo capitalista europeo, el debate sobre las razas humanas cobró centralidad, dando lugar a clasificaciones jerárquicas que principalmente avalaban la superioridad de “la raza blanca” representada por Europa.

En el siglo XX, el paradigma racista evolucionista se plasmó en diferentes modelos de dominación y aniquilación de la otredad. Brevemente, particularizaremos en dos momentos históricos en los que el racismo fue una política impartida desde las instituciones: el **nazismo** y el **apartheid**.

El Apartheid, cuyo significado literal es “separar” en lengua afrikáans, “se basaba en principios cristianos de lo que es justo y razonable. Su objetivo era la manutención y la protección de la población europea del país, como una raza blanca pura y el mantenimiento y la protección de los grupos raciales indígenas como comunidades separadas en sus propias áreas. Si seguía el curso de la igualdad, al final significaría el suicidio de la raza blanca, y la opción debía ser tomar el curso de la segregación (Hosie, 2004). El sistema tuvo como objetivo la segregación política, social y cultural de la población negra sudafricana. Es decir que se formó sobre la base de una diferenciación social basada en la clasificación de “razas humanas”. Se trató de un cercenamiento de derechos, con la

promulgación de leyes que contemplaban para la población negra la imposibilidad de votar, transitar por territorios reservados a la población blanca, acceder a la educación universitaria y denegar la utilización de servicios públicos, entre otras medidas.

## **2.2. Apartheid en Sudáfrica**

A contracorriente del clima político en los entonces territorios coloniales durante la segunda guerra mundial, en Sudáfrica se impuso la profundización de la política de control social, segregación y explotación racial, con el objeto de mantener los privilegios de las minorías de origen europeo, frente a los cambios socioeconómicos derivados de la crisis mundial de 1930 y de la industrialización por sustitución de importaciones durante la segunda guerra mundial. Así como también el crecimiento de la oposición política y el rechazo del racismo, dentro y fuera de Sudáfrica, acrecentaron el miedo de la población de origen europeo a perder los privilegios basados en la segregación racial (Cabanillas, 2011: 28). Eso significa que para la instrumentalización del régimen del apartheid, no solo jugaron factores internos, sino también externos que aportaron para la configuración de ese régimen, con la industrialización por sustitución se hacía necesario la existencia de mano de obra barata que va convertirse en semi-esclavizada con el fin de lograr y conseguir la mayor producción nacional, a fin de evitar la importación de productos que podrían ser fabricados en el país a un costo inferior a lo que significa su importación, por otro lado, el gran crecimiento de una oposición política, así como también las voces externas que criticaban las formas de vida de los negros sudafricanos, van a prender las alarmas de los blancos que con temor a perder sus privilegios y canonjías, toman la decisión de implantar un sistema que les permita mantenerse a salvo y sobre todo mantener el control de la economía.

En las elecciones de 1948 resultó ganador el Partido Nacional, artífice del apartheid. Este partido en el poder promulgó un conjunto de leyes por medio de las cuales se institucionalizó la segregación racial y étnica de la población, la desigualdad en el acceso a los recursos económicos (principalmente tierra y trabajo) y la represión sistemática de toda oposición política o desafío a las normas racistas vigentes (Cabanillas, 2011: 29). Con las elecciones de 1948, como no podría ser de otra manera, y con el fin de dar los pasos más agigantados, el PN gana las elecciones y sus primeras acciones

fueron la promulgación de leyes que permitieran sostener el sistema ya ideado con el fin de mantener su estatus económico y social, dado que por ellos era impensable crecer y progresar en un régimen de igualdad de derechos, se hacía necesario la semi-esclavitud de los negros sudafricanos.

Como se podrá observar, a pesar de no existir un régimen de apartheid institucionalizado desde antes de 1948, con toda vehemencia podríamos afirmar que la supremacía blanca en este país se venía manifestando desde épocas coloniales, dado que los afrikáners, entendía ese país como su territorio y miraban a los nativos como extranjeros, quienes llegaron ignoraron la existencia de los originarios de esos territorios, y es allí que las crisis generadas por la primera y segunda guerra mundial, realmente afecto la economía global y por ende la sudafricana, mirando las disminución de sus ingresos económicos, lo que significaría la instalación de algún sistema que permitiera la explotación humana mediante la negación de la igualdad del ser humano, entonces, yo soy superior y tu trabajas para mi mediante un salario bajo, pero también vale resaltar que esa visión no solo pretendió quedarse en la parte económica como tal, sino más bien, tenía una idea general de implementación de un sistema que afecte lo social, económico y político, así como la sicología humana para generar cambios que significaran perpetuar la injusticia social en beneficio de los intereses de los blancos.

La implementación del Apartheid en Sudáfrica, más allá que se implementó por etapas mediante las cuales la población nativa africana tuvo que someterse, tuvo como su aliado más consistente, la aplicación de normas legales que avalaban la acción del Gobierno del Partido Nacional.

La Ley de Registro de Población, fue la piedra fundacional del Apartheid, puesto que con esa normativa se establecieron los marcos operativos del censo de 1951; esta norma era los derechos y las obligaciones de las personas (Cabanillas, 2011: 31). En el caso de los originarios africanos los derechos eran nulos en contraposición con las grandes obligaciones a cumplir, en contraposición a los derechos de los blancos quienes si gozaban de muchos derechos y nulas obligaciones.

La Ley de Prohibición de Matrimonios Mixtos, promulgada en 1949, ilegalizó las uniones entre personas de distintos grupos humanos, restricción extendida a las relaciones sexuales en 1950 con la Ley de la Inmoralidad (Immorality Amendment, 1950: 95). El mismo año se promulgó la Ley de Áreas de Grupos, mediante la cual, las familias cuyos cónyuges no tenían la misma categoría eran consideradas ilegales, y no podían residir en la misma zona geográfica (Group Areas, 1950). Normas que de por sí empezaron a afectar la base de la familia, así como su estabilidad, dado que la familia como base de la sociedad fue gravemente afectada al prohibir el relacionamiento de personas de diferentes grupos étnicos así como también la prohibición de vivir juntas cuyas familias que no tuvieran las mismas categorías; consecuentemente con ello, al determinarse áreas específicas para que los negros vivan, aquello estaba acompañado de la falta absoluta de sistemas básicos para la vida, lo que va permitir la aparición de muchas enfermedades que van hacer estragos en la salud humana de esa población.

Siguiendo a Cabanillas, podemos conocer que la segregación en Sudáfrica fue legalizada en todos los ámbitos públicos en 1955; en 1953 se realizó la separación en las escuelas, en 1955 en los colegios técnicos y en 1959 en las universidades. Con la separación de las escuelas, colegios e universidades, se buscaba afectar gravemente la educación, dado que esta es la base para la libertad humana, trataron de manipularla al límite de hacer creer a la niñez y juventud sudafricana, que la implantación de ese sistema era beneficioso para todos.

Durante la implementación del apartheid, los movimientos anti apartheid, tuvieron una posición inicial de desafío. El papel jugado por el Congreso Nacional Africano, organización dentro de la cuál militó Mandela, tuvo un poder catalizador al poder coordinar acciones de masas con el Congreso Indio Sudafricano, Congreso de los Demócratas y Partido Comunista de Sudáfrica. En el año de 1955, el Congreso de los Pueblos aprobó la Carta de la Libertad, que consistió en un manifiesto unificador que marcó ideológicamente todas las etapas de la lucha anti apartheid. Entre sus demandas más importantes, estaban la desracialización de la sociedad sudafricana, un gobierno democrático del pueblo, una reforma de la tierra y la nacionalización de empresas (Freedom Charters, 1955). La implantación del sistema de apartheid, más allá de afectar los derechos de los africanos nativos, también afectó sensiblemente a los extranjeros

como los indios y demás ciudades que no fueran ingleses o alemanes, sumado a una clase blanca también, que no era de las élites y se agrupaban bajo las ideas del PC.

Evidentemente dentro de este estudio no podríamos dejar de lado los bantustanes, considerados parte fundamental de la institucionalización de la supremacía blanca, con visión de perennización en una Sudáfrica blanca, para lo cual recurriremos a Mahmood Mamdani, quien en su obra: “Ciudadano y Súbdito. África contemporánea”, plantea la necesidad de entender el funcionamiento del Estado de Sudáfrica, como un Estado bifurcado que ejercerá en su territorio un Despotismo Descentralizado, en donde los jefes nativos serán el pilar del sistema, regulando el acceso a la tierra y reclutando la mano de obra forzada. La combinación de autonomía financiera para las autoridades locales y el absolutismo administrativo para sus agentes creó dicho despotismo, en donde los campesinos “libres” están encerrados en compartimentos étnicos custodiados por los jefes. Este mundo es entendido por Mamdani, como un mundo de “súbditos” condenado a convivir con los ciudadanos urbanos, característica central del Estado bifurcado (Mamdani, 1998: 151). Como no podría ser de otro forma el Gobierno Sudafricano, necesitaba apaciguar los conflictos internos generados entre los ingleses y los boers, dado que el desarrollo industrial impulsado por los ingleses en Sudáfrica permitía la recepción de mayores beneficios económicos en contraposición que los boers que se dedicaban a la agricultura, convirtiéndose estos últimos en fuerza de trabajo de los ingleses, sumado a la inconformidad por la ocupación también de puestos de trabajo por los mismos africanos nativos, motivo por el cual se hacía necesario llegar a consensos entre los dos grupos blancos a fin de repartirse el País, pero dentro de esta repartición, había algo que no encajaba y era la existencia de los negros como partes de la Sudáfrica. Situación ésta que empujó al gobierno Sudafricano, apoyado en los líderes tribales a crear los bantustanes, como van a funcionar Repúblicas independientes de Sudáfrica, pero manejadas por lacayos jefes tribales.

Es importante reconocer que estas supuestas Repúblicas independientes no fueron reconocidas por la ONU, y peor aún por los demás países independientes hasta esa fecha, pero eso sí por Sudáfrica que fue la impulsadora; estos bantustanes se convirtieron en centros de concentración y exterminio de la población negra, nótese que los sudafricanos no podían abandonar esos lugares sin la debida autorización o mejor dicho



para una mejor comprensión, necesitaban visados para poder movilizarse en su mismo País.

En suma podríamos afirmar que los bantustanes, se convirtieron en la mayor expresión de afianzamiento del régimen del apartheid, dado que con ello se intentó desnacionalizar a los nativos, darles una categoría de extranjeros dentro de su misma tierra, así como también configurar un modelo de explotación comparable solamente con el holocausto nazi.

El 21 de Marzo de 1960 se reprimió violentamente a una manifestación de personas que protestaba contra el sistema de pass laws (leyes de pases) a través del cual se establecía un control acérrimo en el traslado de la población negra tanto en zonas urbanas como rurales. Esta represión se la conoce con el nombre de Masacre de Sharpsville, ya que produjo el asesinato de 69 ciudadanos/as negros/as, la detención de 11.727 manifestantes y dejó un saldo de 180 heridos/as. En recuerdo a este episodio, en 1966 la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como el *Día Internacional de la Lucha contra el Racismo*. Esta fecha conmemora la resistencia y valor del pueblo sudafricano que marchó en defensa de sus derechos sociales y civiles contra la violencia del Apartheid (INADI, 2015).

Durante la vigencia del apartheid en Sudáfrica, fueron innumerables los asesinatos políticos selectivos, el destierro, así como la prisión de la mayor parte de los dirigentes que luchaban por la abolición de ese sistema. Fueron largos los años de prisión de Nelson Mandela y sus compañeros de lucha, el Apartheid tuvo su fin luego de 40 años de vigencia presionado por sanciones económicas insostenibles para el gobierno y la lucha imparable del Movimiento Negro en pos de la defensa de sus derechos como ciudadanos plenos. El 17 de junio de 1991 el Parlamento Sudafricano votó por unanimidad la derogación de las leyes del Apartheid, iniciando así una etapa de transición democrática que llevó por primera vez a la presidencia de la nación a un ciudadano negro, Nelson Mandela.

### 2.3. Realismo y apartheid en Sudáfrica

Para analizar el realismo y el apartheid en Sudáfrica, se hace necesario recurrir a uno de los más grandes estudiosos del realismo, me refiero a Morgenthau quien en su obra *In defense of National Interest (1951)* señala que “cualquier política exterior que opere bajo el *standard* del interés nacional debe tener obviamente alguna relación con la entidad física, política y cultural que llamamos nación. En una cultura mundial donde un cierto número de naciones soberanas compiten y se enfrentan por el poder, las políticas exteriores de todas las naciones deben necesariamente referirse a su supervivencia como el requerimiento mínimo” (Morgenthau, 1952: 972). Primeramente es importante reconocer que la Política Exterior de un Estado, es la expresión de su Política Interna, el carácter o la fuerza con la que se opera a nivel nacional de un país así será su expresión internacional, ahora bien, la implementación del sistema del apartheid no fue un hecho fortuito que sucedió sin un antecedente, este sistema se venía implementando en ese País desde varias décadas atrás y para ser más exacto desde la misma creación de la Unión Sudafricana que data del año de 1910. Pues bien, para la implementación del apartheid en Sudáfrica, el Gobierno como tal, desplegando toda la autoridad nacional implementó un sistema que a pesar de no ser de la aprobación mayoritaria de la comunidad internacional (y digo que no fue una aprobación mayoritaria puesto que muchos países se opusieron a dicho régimen, y como todos conocemos los países de siempre apoyaron a Sudáfrica en su triste trajinar internacional) logrando sostenerse por más de cuatro décadas.

El interés nacional sostenido por Sudáfrica, se sustentaba en el derecho de los blancos para apropiarse de los recursos naturales y lograr la semiesclavitud de la población negra, de ninguna manera se podría entender ese interés nacional como la voluntad humana de defender los derechos y la supervivencia de una sociedad toda, sino más bien esa defensa de un sector frente a la negación de la otra parte de la sociedad. El interés nacional que plantea Morgenthau, desde luego deberá tener alguna relación con la entidad física, política y cultural que llamamos nación, pero en el caso sudafricano, ese interés tenía relación con el aprovechamiento de estas premisas pero en beneficio de una clase de un sector, lo que en cierta forma dentro de una sociedad internacional anárquica se hace complicado el asumir una posición de acusación o defensa de un Estado nación

que confunde a propósito su visión de Estado con el fin de confundir a la Comunidad Internacional.

Tal como el mismo autor citado sostiene, que el sistema internacional es anárquico, y dentro de esa anarquía internacional, se desarrollan situaciones que al no estar regidas por ningún sistema se convierten en parte cotidiana del convivir internacional, situación que de sobremanera no es del agrado colectivo internacional, sino más bien se construyen y se sostienen gracias a la falta de interés nacional que signifique determinada acción.

Dentro de una sociedad internacional anárquica, existen ciertas acciones que al no ser ampliamente divulgadas por los medios de comunicación para completar en una crítica social fuerte, muchas veces son permitidas so-pretexito del respeto a la soberanía de los Estados, vale entonces reconocer también que ese respeto a la soberanía de los Estados se enmarca en el punto “te respeto siempre y cuando yo como Estado amigo goce de algunas oportunidades manteniéndome a tu lado”, pero cuando mis intereses están en juego, allí si los Estados participan con el fin de defender lo que creen que es de ellos. El caso sudafricano es el mejor ejemplo de analizar el funcionamiento de una sociedad internacional hipócrita y sobre todo que abusó de los escasos medios de comunicación de esa época para manipular.

Es importante reconocer también el gran papel que juegan hoy los medios de comunicación, dado que para que se conozca una información, no es necesario esperar que los medios tradicionales la difundan, sino más bien, las redes sociales se han convertido en uno de los más grandes vehículos y aliados de la comunicación, en contraposición con lo que existía en el siglo pasado, donde el desarrollo de la comunicación era de por sí precaria e impedía la difusión efectiva de lo que acontecía en los más diversos países del mundo. Vale entonces reconocer que esa debilidad informativa de aquella época, fue sin duda una base fundamental para la manipulación de la Comunidad Internacional desinformada de lo que realmente sucedía en Sudáfrica

Es importante el papel jugado por la oposición política, así como también las ONG, que aunque sean impugnadas por muchos gobiernos antidemocráticos, son la forma de expresión libre de ciudadanos comprometidos con un mundo más justo; quienes

denunciaron globalmente las atrocidades cometidas por los blancos en Sudáfrica, frente a la incredulidad y el interés particular de algunos gobiernos.

Con estos antecedentes, bajo la mirada atónita de los países progresistas, el régimen sudafricano impuso el apartheid como mecanismo suficiente y necesario que permitiría la supervivencia del Estado Nación, y es allí que invocando el interés nacional se establece dicho sistema que por lo demás causó grandes heridas en la conciencia universal.

Por otro lado, la abolición del apartheid en Sudáfrica, obedeció a la misma corriente del pensamiento en análisis, puesto que su permanencia se estaba convirtiendo en una amenaza a la existencia del Estado sudafricano, dado que la crisis económica debido a los bloqueos y boicots internacionales, estaban afectando gravemente las cajas financieras de las transnacionales, así como también la grave presión interna impulsada por las luchas sociales, y la consecuente presión internacional permitieron que el régimen del apartheid llegue a su final.

No podríamos sostener que este cambio fue pacífico, se cometieron muchos crímenes de Estado con el fin de impedir esa transformación, pero claramente se puede observar que el poder del capital, no tiene imposibles, siempre y cuando hallan intereses económicos de las transnacionales, no hay sistema político que se mantenga, y es allí que podemos observar que el pacto entre las transnacionales con gobiernos de fachada y la oposición representada por Nelson Mandela llegaron a consensos que van significar la caída del sistema del apartheid, pero eso si la perennización de las transnacionales en ese país.

No se podría culpar a Mandela por ese pacto, puesto que si no lo realizaba el, tendría que realizarlo cualquier otro líder que estuviera al frente del momento político, pero lo que sí se le debe reclamar a Mandela fue la negociación que no incluyó una indemnización de las transnacionales que mantenían a gobiernos de fachada, por los crímenes cometidos que nunca se borrarán de la conciencia universal.

## CAPÍTULO III

### **3. POLÍTICA EXTERIOR Y POLÍTICA MIGRATORIA SUDAFRICANA**

#### **3.1. Política Exterior Sudafricana**

##### **3.1.1. La Política Exterior sudafricana antes del Apartheid**

Para analizar la política exterior sudafricana, antes del apartheid, es necesario partir desde el inicio de la independencia británica, si es que cabe decir independencia, porque hasta el día de hoy muchas decisiones referentes a ese país se siguen tomando desde Londres, “el periodo entre 1909 y 1910 comprende la independencia y constituye fundamentalmente la génesis del desarrollo constitucional de Sudáfrica. Este periodo estuvo marcado por la promulgación del Acta de Sudáfrica por parte del Parlamento británico, instaurando una Unión Sudafricana independiente formada por los territorios de Colonia del Cabo, el Estado Libre de Orange, Natal y Transvaal. Con el acta de Sudáfrica de 1909 solo se reconocía la independencia de Sudáfrica en la medida en que la Corona británica seguía ejerciendo la jefatura simbólica del Estado y estaba representada en el territorio por el Gobernador General. Así pues, determinadas leyes del Parlamento británico seguían aplicándose en Sudáfrica, y la independencia se limitaba a la administración de cuestiones internas. No obstante, en 1931 el Parlamento británico promulgó el Estatuto de Westminster, que eliminaba muchas de las restricciones constitucionales sobre los dominios británicos y reducía la presencia y la importancia de la Corona. Después de la aprobación del Estatuto, el Parlamento sudafricano promulgó el Acta de Reconocimiento de la Unión de 1934, que descartaba la aplicación en Sudáfrica de las leyes del Parlamento británico a no ser que así lo quisiera el Parlamento de la Unión” (IDEA, 2015).

Como podemos observar, la política exterior desplegada por Sudáfrica antes del apartheid, respondía estrictamente a la política exterior desplegada por Londres, dado que a pesar que se da la aparente independencia en ese país del sur de África, en realidad eso no fue otra cosa que la expresión de la falsa moral que han ejercido las grandes potencias a través de la historia, mostrando falsas expresiones de libertad y oportunidades

globales, cuando la manipulación y los acuerdos bajo de la mesa han afectado en demasía el derecho de toda una sociedad.

El caso sudafricano no fue diferente, aparentemente se independiza el país, pasaba de ser una colonia pública ante los ojos del mundo a un Estado independiente pero sometiendo a la población originaria africana al olvido y la negación de persona.

### **3.1.2. La Política Exterior sudafricana durante el régimen del Apartheid**

Finalizada la Segunda Guerra Mundial se produjo un reordenamiento en la jerarquía de los actores y en las reglas de juego del nuevo orden internacional emergente. La entonces Unión Sudafricana, que había luchado junto a los aliados, fue acogida en el seno de la comunidad internacional y participó de los trabajos de fundación de la ONU. El primer ministro sudafricano, general Ian Smuts, tuvo una actuación destacada en esos trabajos y fue uno de los coautores del Preámbulo de la Carta de la Organización (Vilalva y Gala, 2001).

En 1948, apenas finalizada la guerra contra el nazismo y universalmente revelados sus crímenes, el apartheid repelía a la conciencia de la humanidad enfocada para la consagración de los valores democráticos y del respeto a los derechos humanos (Magalhaes, 2000: 11). Con la apertura de la comunidad internacional a Sudáfrica, dado que estuvo aliado con los vencedores, y su papel fundacional en la ONU, se creyó con la anuencia internacional para dar pasos suficientes y lograr la institucionalidad del régimen segregacionista del apartheid, donde sus primeros pasos fue la implementación de normativa necesaria para sostener el sistema racista, sin dejar de lado su principal caballo de Troya que era lograr la institucionalización de los bantustanes como pequeñas republicas que servirían para desterrar a los nativos sudafricanos y ponerlos en la posición de extranjeros en sus propios territorios.

En 1960, tras la redacción de una nueva Constitución, los votantes blancos de Sudáfrica decidieron en un referendo constitucional abolir la Unión que se había creado en 1909 a través del Acta de Sudáfrica. En su lugar se instauró la República de Sudáfrica.

Pese a estar basada en el Acta de Sudáfrica, la Constitución de 1961 rompió todos los vínculos con el Imperio británico, asumiendo un Presidente del Estado las funciones de la Corona y del Gobernador General. Todas las referencias al «Rey», la «Reina» y la «Corona» se sustituyeron por «Estado», según el International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Entre los elementos más importantes de la nueva Constitución se encontraban el Presidente, el Primer Ministro y un Consejo Ejecutivo (Gabinete) con sede en Pretoria, una Asamblea Legislativa Bicameral en Ciudad del Cabo y un Poder Judicial independiente con sede en Bloemfontein (IDEA, 2015).

Según el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International, 2015) la Constitución prolongaba el dominio blanco del ámbito político mediante una estructura electoral discriminatoria que privaba del derecho al voto a toda la población que no fuese de raza blanca. La Ley de Autoridad Bantú de 1951 limitaba la participación política de la población negra a sus lugares de origen, denominados «bantustanes». Algunas reformas puntuales en 1964 y 1968 abrieron en cierta medida el espacio político a asiáticos y mestizos, permitiendo que participaran en las cuestiones étnicas. Así pues, en 1964 se creó el Consejo de Representación de las Personas Mestizas, y en 1968, el Consejo Indio de Sudáfrica.

Con la constitución de 1960, como no podría ser de otra manera, los sudafricanos blancos nacidos en la colonia, sentían la necesidad de independizarse políticamente de la colonia con el fin de darle más vigor al sistema de explotación y exclusión que se había instaurado en ese país, nótese que esta independencia solo sería en algunos tópicos, puesto que la economía seguía anexada a las decisiones que se tomaban desde Londres donde hasta la actualidad tienen sus oficinas las principales empresas sudafricanas, en todo caso la política exterior desplegada por este país se va fundamentar en el mismo padrón existente con anterioridad al régimen del apartheid, con el aditivo que promocionarán la fortaleza del su país con la exclusión de la población negra nativa, así como la asociación y el apoyo de países que impulsaban la segregación racial.

El apartheid aisló Sudáfrica de la Comunidad Internacional y su política externa incorporó ese aislamiento al constituir su núcleo de formulación y acción en torno de la defensa del régimen y su sobrevivencia (Magalhaes, 2000: 13)

Las denuncias relativas a la cuestión racial en la Unión Sudafricana se produjeron por primera vez en la ONU en 1952, y fueron presentadas por las naciones árabes y asiáticas. Pero es en la década del sesenta cuando se inicia el proceso de creciente aislamiento internacional, a medida que los nuevos estados independientes de África y Asia se incorporan a la escena mundial y presionan por la aplicación de sanciones. Consecuentemente, Sudáfrica se vio expulsada de la Commonwealth, y aunque no perdió la calidad de miembro de las Naciones Unidas, en 1974 la Asamblea General rechazó las credenciales de la delegación enviada por Pretoria. Así fueron creciendo la presión internacional y la aplicación de sanciones, particularmente a partir de mediados de la década del ochenta. El creciente aislamiento internacional llevó a Sudáfrica a ser considerada “un Estado paria”, por lo cual el gobierno del apartheid debió buscar formas alternativas de inserción internacional. Es en ese momento que se produjo el acercamiento a los estados latinoamericanos que para entonces poseían gobiernos militares, no respetaban los derechos humanos y eran proclives a una lectura del mundo en términos Este-Oeste (Lechini, 2011: 142). Tal y como sostiene Lechini, la búsqueda por apoyo internacional de Sudáfrica frente a su aislamiento, le permitió vincularse a gobiernos tiranos que irrespetaban los derechos humanos, quienes en una posición de criminales internacionales creaban su cartel de ayuda mutua y ocultación de las terribles violaciones a los derechos humanos.

La política exterior de Sudáfrica estuvo fuertemente atada por una parte a los objetivos del gobierno sudafricano y a la supervivencia del Estado “blanco”, y por la otra a las limitantes de un sistema internacional que condicionaba la inserción del país a modificaciones en la política interna. El gobierno del Partido Nacional percibía a Sudáfrica como parte del hemisferio occidental, compartiendo sus valores, su sistema económico y sus preocupaciones por la seguridad. Sudáfrica se constituiría así en un puente entre África y Occidente, como el bastión para contener el avance comunista en la región. Aunque esta posición no tuvo el apoyo externo esperado, se le permitió a Sudáfrica incorporarse al



sistema económico internacional a través de un creciente flujo de ida y vuelta de comercio, capital y tecnología. Por ello, los estados desarrollados trataron de separar las relaciones económicas de las políticas, tomando posiciones cercanas a una combinación de prudencia y diplomática distancia de Pretoria, adoptando un bajo perfil, y, a partir de 1985, imponiéndole sanciones limitadas, según seña Gladis Lechini (2011).

### **3.1.3. La Política Exterior sudafricana después del régimen del Apartheid**

En el año de 1994 con la llegada del Congreso Nacional Africano al poder dirigido por Nelson Mandela, la política exterior sudafricana, como no podría ser de otra manera, adquiere un profundo cambio de timón y se va fundamentar en el Ubuntu, tomando como sus principales ejes: el Renacimiento Africano, el Panafricanismo y la Cooperación Sur-Sur.

Es congruente entonces analizar cada una de estas nuevas características de la nueva Sudáfrica que empezaba a deslumbrar nuevas luces que redundarían en bienestar para toda una sociedad.

**Ubuntu.-** “Expresa la conciencia de la relación entre el individuo y la comunidad. Es al mismo tiempo, un concepto moral, una filosofía y una forma de vida que se opone al narcisismo y al individualismo tan común en nuestra sociedad occidental capitalista. Si bien la idea europea de la naturaleza humana se basa en la idea de libertad, que los individuos tienen el poder de libre elección, la idea africana de Ubuntu se basa en la idea de comunidad que las personas dependen de otras personas para ser personas (Dominguez, 2015). Aquí retomamos esa cita bíblica, “haz el bien y no mires a quien”, con este principio se supondría que la República Sudafricana se comprometería en lograr el avance y desarrollo de todas las naciones africanas y dejar atrás esa falsa idea de un desarrollo aislado sino más bien colectivo, mírese entonces si la aplicación de este principio ha sido honrado o simplemente han habido pincelazos y maquillajes para demostrar una realidad no existente en el apoyo de los otros países africanos.

**Renacimiento Africano.-** “La necesidad de otorgarle poder a los pueblos africanos para liberarse ellos mismos del legado del colonialismo y neocolonialismo y

para situarse en el escenario global como contribuyentes iguales y respetados, así como beneficiarios de todos los logros de la civilización humana” (Mbeki, 2000: 77). La posición de Mbeki, habría que analizarla a detalle y observar cuan realista es, toda vez que hablando de la liberación del colonialismo y neocolonialismo, se tendría que mirar que está pasando en la actualidad con el caso africano, puesto que al tratarse de temas que importan a ese continente, no se debería permitir que se sigan resolviendo en Bruselas o Londres, entonces habrá que analizar, si este continente está en camino de la descolonización o hacia la recolonización, toda vez que cada día se puede observar la dependencia de estos países a los organismos multilaterales que dictan que hacer y no hacer so pena de sanciones.

**Panafricanismo.-** “Se basa en la premisa que todos los pueblos descendientes de África constituyen una comunidad cultural y política basada en los orígenes comunes de opresión racial, política y económica. Del mismo modo, implica una unidad política, económica y cultural entre todos los africanos, con el objetivo de tener éxito en la liberación y progreso de todos los pueblos y naciones africanas” (Adogamhe, 2008: 7). Al observar que los pueblos africanos arrastran una historia común de opresión e injusticias, sería importante que los mismos alcanzaran la unión, a fin de lograr el avance del continente africano, ahora bien, no podemos negar profundos avances que se hallan llevado a efecto, como fue la creación de la actual Unión Africana, entonces habrá que observar si este foro multilateral africano ha contribuido a mejorar las condiciones de estabilidad, paz, hambre, lucha contra la contaminación del medio ambiente, en el continente y si es que al menos han logrado tener una posición unánime en foros internacionales como Naciones Unidas. Es allí, donde nos damos cuenta que las intenciones pueden ser muy buenas, otra cosa es la ejecución de los sueños y aspiraciones.

**Cooperación Sur-Sur.** “La Cooperación Sur-Sur (CSS) es el intercambio de soluciones clave de desarrollo —saber, experiencias y buenas prácticas, políticas, tecnología y conocimientos técnicos, recursos— entre los países del Sur del mundo (FAO, 2016). La Cooperación Sur –Sur, se presenta como una gran oportunidad para los países menos adelantados, a fin de lograr adquirir conocimientos que antes no tenían y viceversa otorgar sus conocimientos a otros países que no mantengan y que los otros posean. Pero en el caso de Sudáfrica, esta cooperación se torna muy compleja, dado el nivel de desarrollo que

mantiene este país en relación con sus socios del sur, pero en todo caso no sería negativo si los países menos adelantados aprovecharan esas potencialidades.

A pesar de los excelentes principios que componen los pilares fundamentales de la política exterior sudafricana, nos encontramos que habiéndose encontrado Sudáfrica durante muchos años aislado de la comunidad internacional, y considerado un Estado “paria” tal y como lo expresó el Embajador Sudafricano en Argentina durante la conferencia con ocasión a los diez años del triunfo de la democracia en ese país, el 1 de abril de 2005. Se necesitaba lograr la inserción efectiva de ese país en el sistema político internacional y económico, podríamos afirmar que esos fueron los primeros pasos en la articulación de su política exterior.

Según María Florencia Tinnirello (2014: 38-39) en su artículo “Sudáfrica como potencia regional. Participación e involucramiento en la resolución y prevención de conflictos en África”, expresa claramente que “la agenda de política exterior esbozada desde 1999, y vigente inclusive hasta la actualidad, está influida por tres núcleos principales: Democracia, Africanismo (Africanist), y anti-imperialismo. De allí en adelante, la agenda para con el continente africano seguiría los lineamientos esbozados en la visión denominada African Renaissance. La misma fue y es concebida como uno de los pilares elementales de la política internacional de Pretoria, razón por la cual permea toda la arquitectura política del país, no siendo ajeno a esto la agenda para con el continente”. Consecuentemente con el postulado “African Renaissance”, podemos observar la participación de ese país como un ente catalizador de la estabilidad regional, así como su involucramiento en un conjunto de organismos económicos que avanzan para mejorar las condiciones de vida del continente, es así que observamos su participación en los diferentes foros regionales, como la Comunidad de Desarrollo del Sur de África (SADC), la Unión Aduanera del Sur de África (SACU), miembro de la Unión Africana (UA). Consecuentemente forma parte prácticamente de la totalidad de las Organizaciones y Asociaciones del sistema de NNUU, así como de otros foros como el Movimiento de los No Alineados, el G 77, el foro IBSA (India, Brasil y Sudáfrica); en abril de 2011 se incorporó al grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Por otro lado Sudáfrica ha sido miembro del Consejo de Seguridad de NN.UU. en 2007-2008 y 2011-2012 y ha presidido la Troica de la SADC en 2012. Desde el 1 de enero de 2013 es miembro del ECOSOC.

Concomitantemente, según el portal Santander Trade.com, Sudáfrica alberga el 75% de las principales empresas en el continente africano, convirtiéndose así en la economía más desarrollado del continente y una de las principales del mundo.

### **3.2. Política Migratoria Sudafricana**

#### **3.2.1. La Política Migratoria Sudafricana antes del Régimen del Apartheid**

Antes del inicio formal del apartheid, la política migratoria de la Unión Sudafricana no estaba institucionalizada como tal, dado que era una sociedad que se regía por dictados tribales, y la apertura de pueblos remotos era tal que dentro de sus cosmovisión se observa al territorio como un todo, donde se podría vivir en comunidad sin perjudicar a los demás, visión esta que va cambiar la vida del pueblo nativo, cuando “a principios del siglo XIX empezaron a establecerse en Sudáfrica los colonos británicos, que se dedicaron principalmente al desarrollo de actividades comerciales, llegando a acuerdos con los nativos para establecer intermediarios e intercambiar mercancías. Esta actitud, junto con la lucha contra el comercio de esclavos, pronto entró en conflicto con las posturas de los colonos holandeses (también conocidos como boers), que para distinguirse de los recién llegados empezaron a denominarse afrikaners. Durante el mismo siglo, creció el número de comerciantes, granjeros y misioneros británicos que venían a Sudáfrica, donde llegaban asimismo los flujos de inmigrantes asiáticos comerciantes pero también trabajadores y esclavos procedentes principalmente de India, China y el archipiélago indonesio” (CIDOB, 2004:457). Esta primera migración europea al Africa es importarte entenderla como la génesis de la ocupación, dado que en un principio la llegada de extranjeros a ese país, tenía una connotación pacífica, dado que los europeos llegaron a ese país no con una visión de conquista sino más bien de amistad, nótese que este criterio está sustentado en los criterios de algunos teóricos, afirmación que desde mi punto de vista no se acerca a la realidad, dado que las ocupaciones nunca han sido pacíficas, siempre han

sido violentas, con los consecuentes genocidios que no contaron con testigos para contar lo sucedido, manteniéndose como realidad lo sostenido por los opresores.

Desde una mirada crítica a la llegada de ingleses y holandeses a Sudáfrica, de ninguna manera se podría afirmar que fue pacífica, insisto, debió haber sido violenta con el fin de aprovechamiento de las tierras, nótese que el uso del arma de fuego, fue un invento europeo, frente a la precaria utilización de arma de guerra utilizada por africanos para su defensa personal y la caza.

Más adelante y siguiendo el estudio del Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona (CIDOB, 2005), la expansión colonial británica provocó que, pronto, la población de origen holandés se dirigiera hacia el interior del país con la intención de emanciparse del control británico y para encontrar nuevas tierras de cultivo donde establecerse. Este flujo tomó especial importancia durante el siglo XIX pero especialmente cuando tuvo lugar *The Great Trek* (la gran marcha), un movimiento organizado por los boers hacia el interior del país que empezó en 1835. Entre esa década y la siguiente, cerca de 14.000 boers dejaron la Colonia del Cabo y se dirigieron a las regiones nororientales. Además del descontento con las autoridades británicas y la oposición a los intentos de anglicanización, otras de las razones que explican este éxodo masivo son los problemas económicos y los conflictos con los xhosa y la población negra en general. Nótese que el estudio está deflagrando la realidad, como es que si los blancos llegaron a Sudáfrica, mediante acuerdos tribales, luego estos acuerdos tuvieron problemas; la realidad es que la presión interna por parte de los nativos oprimidos fue tal, que estos grupos autodenominados boers y afrikaners, trataron de expandir su dominio dentro del territorio y lograr de esa manera una mayor ocupación y sobre todo lograr la total sofocación de los nativos.

Esa migración de los boers, no solamente se desplazó por las costas, buscó áreas menos montañosas para el desarrollo de la agricultura y es allí donde esta migración interna se dirigió a las actuales provincias de Transvaal, Orange y Natal donde se permitió el trabajo esclavo que obtuvieron un estatuto independiente del imperio británico. En 1867 se encontraron en estas regiones importantes yacimientos mineros que fueron el

origen de las guerras anglo-boers que finalizaron en 1902, cuando las tres provincias aceptaron la tutela británica que acabó con la hegemonía agraria de Orange y Transvaal a favor de la minería. Este cambio económico fue especialmente importante porque el auge del sector minero requería cada vez de mayor número de trabajadores. La primera industria minera, al igual que las explotaciones agrícolas, se nutrió de la mano de obra de los blancos que habían perdido la guerra y de los nuevos inmigrantes que llegaban desde diferentes países europeos, según estudios del Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona - CIDOB. Con la aparición de importantes yacimientos minerales, se podría afirmar que cambió la idea de producción agrícola con la de explotación minera, lo que evidentemente va a cambiar el curso de la historia y estos dos grupos de blancos se van a enfrentar en una sangrienta guerra por el control de las riquezas naturales, que al final van a terminar con el triunfo de los ingleses sobre los boers y estos primeros van a convertirse en patronos de los segundos, así como también van a convertirse en mano de obra barata los blancos inmigrantes y los negros que vivían en una situación de semiesclavitud.

Según Investigaciones del Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona (CIDOB, 2005), en 1910 se aprobó la constitución de la Unión Sudafricana que federaba las provincias del Cabo, Natal, Orange y Transvaal, la marginalización y discriminación de los sudafricanos de origen africano empezó a ser tema de debate político. En principio, el trato discriminatorio para con la población negra instaurada mediante la “colour bar” que les impedía el derecho a voto o a la propiedad de la tierra no distaba mucho del trato que las poblaciones autóctonas recibían en la mayoría de colonias europeas”. Como se puede observar, la realidad migratoria en Sudáfrica empieza a mostrar sus verdadera situación local, inicialmente se decía que los blancos llegaron a la actual Sudáfrica, bajo un pacto con los líderes tribales, afirmación que de hecho carece de consistencia, ahora se empieza a aclarar que el trato recibido por los locales no se diferenciaba al de los otros negros dentro de las colonias, eso significa que efectivamente lo que se dio en ese país fue una ocupación con las consecuentes instauraciones de blancos en el poder, con la determinación a mantener oprimido a los locales.

Como podemos observar, antes del nacimiento de la Unión Sudafricana, el proceso migratorio más allá de la presencia de los originarios africanos, fue importante observar la presencia holandesa e inglesa, quienes desde un inicio observaron esas tierras como sin dueños a las cuales habría que someter, y no solo las tierras, sino más bien iniciar el proceso de traslado masivo de mano de obra africana para la explotación de los recursos de ese país. Es allí donde podemos observar la génesis de los que más adelante va a significar el oprobioso sistema de separación racial.

### **3.2.2. La Política Migratoria Sudafricana durante el Régimen del Apartheid**

Una vez analizada la política migratoria como tal, antes del apartheid, encontramos que durante “la instauración del sistema del apartheid se instituyó un control estricto de los movimientos de población y favoreció la inmigración blanca. La inmigración estaba regulada por la Ley de Control de Extranjeros –Aliens Control Act–, que contaba con varias excepciones debidas a los acuerdos bilaterales que Sudáfrica tenía con sus estados vecinos. Estos acuerdos regulaban la entrada de mano de obra extranjera para trabajar en sectores específicos como el sector minero o el sector agrícola. Así pues, la ley sudafricana no tuvo en cuenta a los trabajadores extranjeros negros excepto mediante estos acuerdos bilaterales que se firmaron entre 1950 y 1970. Los acuerdos de trabajo con Botswana, Lesotho y Swazilandia se firmaron a principios de los setenta, mientras que el acuerdo básico con Mozambique referido a los trabajadores de las minas se suscribió en 1964 firmado por las autoridades coloniales portuguesas y se enmendó en 1970. Existió también un acuerdo con Malawi que, en un 1965 se rubricó con la Cámara de Minas en 1965 y en 1967 con el gobierno sudafricano, que ahora se considera extinguido. Estos acuerdos, considerados una de las piedras angulares del sistema de migración laboral del apartheid, permitieron que las contrataciones se gestionaran con autonomía y sin suficientes garantías para los trabajadores, dejando un elevado margen de poder y maniobra a los empleadores en las condiciones de contratación” según el Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona. Tal como quedó explicado en las líneas preliminares del presente estudio, la Ley de Control de Extranjeros, no buscaba otra cosa que era la selección de los migrantes, con dos puertas, una de frente y otra de atrás; la puerta del frente era para el ingreso legal de blancos, científicos y académicos que fueran

a contribuir con el desarrollo de esa República en ascenso y la puerta de atrás era para el ingreso de la mano de obra barata, sin derechos y las más mínimas garantías, quienes realizaban el trabajo que no querían realizar los blancos, en este punto repetimos lo que acontece hasta nuestros días en muchos países de los que se considera occidentales con doble moral que siguen aplicando estrategias de esa naturaleza y por otro lado criminalizan y perseguían a los migrantes irregulares.

Posteriormente, ya en 1960 había 586.400 extranjeros africanos en Sudáfrica, 17,5% de los cuales eran mujeres, mientras en 1970 la cifra era de 489.200, 9,5% mujeres. Este descenso en la mano de obra femenina es debido a que, a partir de 1963, la legislación prohibió la contratación de mujeres y familias desde Botswana, Lesotho y Swazilandia, y a que en 1966 se paró la contratación de trabajadores nacionales de estos países para el servicio doméstico. De todos modos, en ese momento el mayor volumen de trabajadores extranjeros se encontraba en el sector de la minería, seguido por el sector agrícola y la industria manufacturera, según el Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona - CIDOB. Como se puede observar y a pesar de las crítica situación migratorias que vivían en ese País, los africanos continuaron migrando a Sudáfrica; ahora bien porque los africanos seguían migrando a Sudáfrica, a pesar de las graves situaciones que se vivían allí, bueno eso será parte de un nuevo estudio, pero me atrevería a expresar que a pesar de la semiesclavitud con la que les tocaba lidiar diariamente, sería considerado por ellos, mucho mejor que vivir en sus países de origen, para lo cual no entraré en detalles en el presente estudio.

Por otro lado “un elemento de carácter político que ha favorecido la irregularidad en la inmigración sudafricana; Zambia y Tanzania, por ejemplo, prohibieron la emigración legal de sus nacionales hacia la Sudáfrica del apartheid, y en 1974 debido a un accidente aéreo en el que murieron varios trabajadores inmigrantes el gobierno de Malawi prohibió nuevas contrataciones, si bien permitió la salida de los que ya tenían contratos. Por su parte, también limitaron la salida de sus nacionales hacia Sudáfrica, una vez conseguida su independencia en 1975 y 1980 Mozambique y Zimbabwe donde se cerraron todas las oficinas de contratación de mano de obra que existían en el país, que hasta el momento habían sido de los principales países de origen de la inmigración sudafricana. A pesar de las prohibiciones estos flujos no dejaron de existir totalmente pero sí se convirtieron en



irregulares” según el Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona. Es importante resaltar la complicidad de las colonias europeas en las autorizaciones para la salida de su país de trabajadores locales, a fin de garantizar la mano de obra barata que va sostener el régimen injusto del apartheid.

Para el Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona (CIDOB, 2005), ya a principios de los años setenta Lesotho, Malawi y Mozambique eran los principales países de origen de la inmigración laboral en Sudáfrica, que también procedía, en menor medida, de Botswana y Swazilandia. Si bien en la década de los sesenta había sido Mozambique el país de origen de la mayoría de la inmigración en Sudáfrica, pronto fue Lesotho el principal origen de esta inmigración, llegando a ser el país de procedencia de cerca del 50% de la fuerza laboral extranjera que había en Sudáfrica. Los trabajadores se contrataban mediante agencias de empleo situadas en los países periféricos de Botswana, Lesotho y Swazilandia, y también en Malawi, Mozambique y Zimbabwe. Los contratos para estos trabajadores no cualificados eran de dos años y se ofrecía alojamiento individual en condiciones poco propicias para la reagrupación familiar. Paralelamente a esta inmigración regular, durante el apartheid existió un flujo menor pero constante de profesionales cualificados, especialmente procedentes de Ghana, Uganda y en menor medida de Nigeria, que inmigraron clandestinamente hacia los bantustanes sudafricanos. Junto a los extranjeros irregulares, estaban los propios sudafricanos en situación irregular: cerca de 2 millones de personas negras que vivían en los suburbios informales de las zonas blancas de Sudáfrica, fuera de las fronteras de sus bantustanes. Me atrevería a sostener que la convivencia de los negros no nacionales de Sudáfrica en los bantustanes, era imposible, dado que la ser extranjeros no eran bien recibidos por los locales, situación que es visible hasta hoy, motivo por el cual, los negros inmigrantes van a poblar la periferia de las ciudades, los sectores más apartados y sin ninguna condición básica para el desarrollo humano, va a convertirse en espacios de morada para los negros inmigrantes.

Pero la situación, de ninguna manera fue fácil para los negros migrantes, dado que “en los años ochenta, la Cámara de las Minas (*Chamber of Mines*, el órgano regulador de las minas sudafricanas) abrió un proceso de mecanización del trabajo en las minas, y decidió cambiar su política de contratación primando las fuentes de mano de

obra interna para limitar la dependencia de mano de obra externa. Esta modificación tuvo un enorme impacto regional, dado el alto nivel de dependencia económica de los países de origen de esta inmigración laboral. Botswana, Lesotho y Swazilandia son, junto con Mozambique, los países donde existe una mayor dependencia a la exportación de mano de obra hacia Sudáfrica y a los ingresos procedentes de las remesas de los inmigrantes; una dependencia tan notable que hasta la Conferencia de Coordinación del Desarrollo de África del Sur (SADCC) –a la que Sudáfrica se incorporó en 1992– se ha marcado el objetivo de trabajar para reducirla, según el Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona. Situación ésta que va complicar la vida de los migrantes, puesto que su situación laboral se ponía en riesgo y el retorno a sus países, casi una utopía, ya que habían realizado sus vidas en ese país, y regresar ya no se convertía en una opción válida.

En la década de los noventa empezaron los grandes cambios políticos que llevaron a Sudáfrica a abolir el régimen del apartheid y a entrar progresivamente en un sistema internacional que había aislado oficialmente al país. Este proceso tuvo, también, importantes efectos en la política migratoria de Sudáfrica: la Ley de Inmigración de 1991, el último acto legislativo del régimen del apartheid, introdujo de manera ordenada una serie de iniciativas que se habían ido desarrollando a lo largo de los años para controlar de manera estricta los flujos migratorios. Para muchos autores, la restrictiva política de inmigración de Sudáfrica es uno de los legados del apartheid más difíciles de superar, según el Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona - CIDOB.

Durante la oprobiosa etapa del apartheid se puede observar la aplicación explícita de un sistema de migración, ahora si en base a la normativa creada para el sostenimiento de su modelo, lo que va significar la utilización de todas las herramientas jurídicas para garantizar el libre acceso al país a ciudadanos blancos y cerrar la puerta para los negros de otros países, más allá de mantener encerrados en los bantustanes a la población negra local. Pero es importante reconocer que la puerta no estaba totalmente cerrada para los negros inmigrantes, estos aplicaban un sistema como ya explique en páginas anteriores, donde contaban con las dos puertas, y es obvio que la puerta de atrás era la utilizada para el ingreso de la población negra de otras colonias, con el fin de

explotarlos y mantenerlos en condiciones tales que acabaran terminando con las uniones familiares de estos grupos humanos.

### **3.2.3. La Política Migratoria sudafricana después del régimen del Apartheid**

Con la caída del régimen del apartheid, como no podría ser de otra manera, operaron importantes cambios en todas las áreas del País del arcoíris como lo llamó Mandela, una de esas áreas indudablemente fue la migratoria , donde entre 1996 y 2000 el Gobierno del ANC llevó a cabo determinadas amnistías para garantizar unos derechos mínimos a los trabajadores inmigrantes y legalizar a los trabajadores extranjeros de larga residencia en el País, además de importantes leyes dirigidas al control y a la regulación de los flujos migratorios, siendo las más importantes la “Ley sobre Refugiados de 1997 y la Ley de Inmigración de 2002. Esta última dirigida a regular a las personas que iban a ser admitidas en el país, las que tenían intención de convertirse en residentes y finalmente, aquellas que saldrían de éste. Adicionalmente, en 1996 se redacta una nueva Constitución y una Carta de Derechos en las cuales se sustituye la palabra “*citizens*” por “*all persons*” en la asignación de libertades fundamentales y que se interpreta como una inclusión del inmigrante y una percepción del mismo como sujeto de derechos” (Barriga y Bernal, 2011: 21-22); podríamos decir que con la llegada del Congreso Nacional Africano al poder, las cosas cambiaron sustancialmente, en materia de derechos de movilización para los ciudadanos pero con esa lógica conectada al neoliberalismo, lo que viene a significar una continuidad de sometimiento de la sociedad ahora libre en beneficio de los dueños del capital.

Todos esos cambios impulsados por Mandela, de ninguna manera, podría considerárselos aislados, puesto que los mismos dieron pie al apareamiento inmediato de otros problemas para Sudáfrica, es por ello que con toda franqueza podríamos sostener que la década de los noventa abrió nuevas perspectivas para la inmigración procedente de otros países de África Subsahariana cuyos ciudadanos tenían, hasta el momento, restringidos los movimientos hacia la Sudáfrica del apartheid. Según el Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona - CIDOB, a partir de ese momento, Lesotho, Malawi, Mozambique y Swazilandia, los tradicionales países de origen de la inmigración en Sudáfrica, entran en competición con nuevos países, si bien siguen siendo mayoría en los sectores minero y agrícola. Desde África Occidental ha habido

movimientos de nacionales de Nigeria y Ghana mayoritariamente cualificados, que se han integrado en las universidades, y de Senegal y Malí, principalmente dedicados al comercio. En el sector informal también se encuentran nacionales procedentes de República Democrática del Congo y de Zimbabwe. En la década de los noventa también ha habido flujos procedentes de otros países, como Hungría, Polonia y la antigua Alemania Democrática si bien en muchos casos el propio gobierno del ANC ha querido limitar esta inmigración cualificada, aún percibida como un intento de incrementar el número de la población blanca de Sudáfrica.

En 1996 el gobierno Mandela desarrolló un proceso de regularización para los inmigrantes que estaban casados y tenían hijos en Sudáfrica o que llevaban trabajando más de cinco años en el país. El estatuto de residencia fue concedido a 90.000 antiguos refugiados mozambiqueños y 124.000 nacionales de otros países de la SADC, especialmente Lesotho que vivían en el país desde 1986. En total, cerca de 350.000 personas se han beneficiado de estas iniciativas, según el Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona.

Estas primeras acciones a favor de la integración de los trabajadores extranjeros en Sudáfrica no han sido, sin embargo, la opción mantenida por el nuevo gobierno sudafricano a la hora de regular la inmigración, en parte seguramente porque estas iniciativas no han recibido el apoyo mayoritario de la opinión pública. Así, las actuales y recientes regulaciones sobre inmigración –*Immigration Bill*– continúan centradas en el control de los flujos y en el refuerzo de la seguridad de los cerca de 3.000 km de larga y porosa frontera sudafricana. La reforma de la política de inmigración en Sudáfrica empezó en 1996 y no ha sido hasta junio de 2003 cuando el Tribunal Constitucional del país ha aprobado dichas regulaciones.

Como se ha comentado con anterioridad, el fenómeno de la inmigración clandestina no es nuevo en Sudáfrica, pero lo cierto es que desde la década de los noventa ha adquirido unas dimensiones sin precedentes. Según el Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona Se estima que hay entre 2 y 8 millones de inmigrantes en situación de irregularidad, la mayoría procedentes de Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Lesotho y Swazilandia. El conjunto de la población inmigrante

irregular es muy poco homogéneo, e incluye tanto a personas no cualificadas como a trabajadores cualificados; personas que han entrado irregularmente y personas que han adquirido una situación de irregularidad debido a la caducidad de sus visados; etc. La provincia de Gauteng –donde se encuentran Johannesburgo y Pretoria– es el destino de los mayores flujos migratorios del país, sean internos o externos. Además de los flujos regulares, la provincia también acoge las mayores cifras de inmigración irregular, mayoritariamente concentrada en los suburbios y los campos “*squatters*” que rodean estas ciudades. Este importante porcentaje de inmigración irregular, un 6% en el caso menor y un 20% en el caso de las estimaciones más elevadas, suscita grandes temores y se percibe como símbolo de la permisividad de la nueva Sudáfrica.

Ante esta situación, las expulsiones y repatriaciones forzosas se han convertido en una de las bazas principales de la política de inmigración sudafricana. Así, en 1994 se deportaron 91.000 inmigrantes irregulares, una cifra récord que afectó mayoritariamente a nacionales de Mozambique –cerca del 75% del total– y en menor medida a nacionales de Nigeria, Sierra Leona, Etiopía y Zambia. La notoriedad de esta cifra viene dada por comparación con las cifras del régimen del apartheid: en 1990 se expulsaron 293 inmigrantes irregulares y 83.109 en 1992, mientras que en 1996 el número de deportados fue de 181.230. En poco más de 5 años el gobierno sudafricano expulsó a cerca de 600.000 inmigrantes, un 85% de los cuales fueron devueltos a Mozambique, según el Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona - CIDOB.

Por otro lado, es necesario señalar otros dos flujos migratorios clásicos en Sudáfrica. En primer lugar, la inmigración protagonizada por la población de origen indio que se remonta a mitad s del siglo XIX. Aunque inicialmente se había dirigido a las plantaciones de azúcar sudafricanas, la población india se movió paulatinamente hacia las ciudades, donde se concentró en el sector del comercio. Según el Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona – CIDOB, en el censo de 1996 había cerca de un millón de indios en Sudáfrica, el 76% de los cuales residía en la provincia de Kwa-Zulu Natal. Por otro lado, durante el período 1880 a 1910 cerca de 40.000 judíos inmigraron desde Europa Oriental hacia Sudáfrica, y otros 30.000 lo hicieron entre 1910 y 1948. En una gran mayoría de casos los inmigrantes judíos que llegaron a Sudáfrica procedían de unos pocos lugares de Lituania y Belarús, y en muchos casos habían residido

temporalmente en Inglaterra antes de emigrar hacia el continente africano. Entre 1970 y 1991, cerca de 13.600 judíos inmigraron a Sudáfrica procedentes de Rodhesia (la antigua colonia británica compuesta por los actuales Malawi, Zambia y Zimbabwe), Israel y Reino Unido. Además, cerca de 4.500 antiguos emigrantes judíos retornaron a Sudáfrica en la década de los ochenta. Actualmente, la comunidad judía en Sudáfrica la conforman unas 80.000 personas.

En los últimos años se ha reducido en Sudáfrica la inmigración legal, han crecido las dificultades para conseguir la residencia temporal y el gobierno ha utilizado mecanismos y recursos para luchar contra la inmigración irregular. Pero a pesar de ello, lo cierto es que en un país en el que la inmigración había sido estrictamente controlada, la situación actual ha generado temores ante la idea de una “avalancha de inmigrantes”. A pesar que el incremento de flujos en Sudáfrica, tanto legales como irregulares, y tanto de inmigrantes como de emigrantes, son la constatación de la inserción del país en la “normalidad de la globalización”, lo cierto es que la opinión pública sudafricana ha empezado a expresar su rechazo a la presencia de inmigrantes en el país .

## **CAPITULO IV**

## **4. RELACIÓN ENTRE LA POLÍTICA EXTERIOR SUDAFRICANA Y SU POLÍTICA MIGRATORIA, EN LA ETAPA POST-APARTHEID**

### **4.1. Relación entre la Política Exterior sudafricana y su Política Migratoria, después del apartheid**

Ahora bien con la caída del apartheid y la llegada de Nelson Mandela al poder en 1994 se marca un cambio en la Política Exterior y Migratoria del país, pero cabe señalar que los tan anhelados cambios no fueron automáticos, se hicieron reflexiones hasta llegar en “2009 al cambio de denominación del Ministerio de Asuntos Exteriores por el de Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación (DIRC, en sus siglas en inglés), en un giro estratégico que pretendía conectar en mayor medida el proyecto nacional con el exterior, ahora más comprehensivo. Se inició asimismo la elaboración de un documento de referencia para la acción exterior con el nombre El Libro Blanco, bajo el título *Building a Better World: The Diplomacy of Ubuntu*, aprobado por el gabinete y el parlamento. Dicho libro blanco reafirma los principios básicos del espíritu sudafricano plasmados en 2005, centrados en el respeto a las naciones, gentes y culturas (la llamada diplomacia *Ubuntu*) y la cooperación Sur-Sur como contraposición al colonialismo” (García-Calvo, 2015). Pues bien como de manera acertada Gladys Lechini (2006), señala en su artículo el Peso del Apartheid en el Diseño de la Política Exterior sudafricana, se entiende por política exterior el área particular de la acción política gubernamental que se proyecta al ámbito externo frente a una amplia gama de actores e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, tanto en el plano bilateral como multilateral. Pueden distinguirse analíticamente tres dimensiones directamente vinculadas con el manejo de las relaciones externas de un país: el político diplomático, estratégico-militar y económico. La política exterior de un país no es meramente el producto de las decisiones de los gobiernos que las implementan, sino que derivan de la compleja interrelación entre factores internos y externos. Esta reflexión de la autora es amplia y se ajustaría a cualquier Estado libre y democrático pero al analizar la política exterior sudafricana, nos encontramos que “la política exterior está enfocada en un compromiso firme y de principio con un multilateralismo respetuoso de las normas, promoviendo los intereses y el desarrollo de África, contribuyendo a la cooperación Sur-Sur y mejorando las relaciones Norte-Sur. Adoptando un enfoque de cooperación para beneficio mutuo dentro del continente; de la misma forma los principios de la política exterior sudafricana se

desarrollaron en tres etapas. La primera fue una valoración crítica en 1996 de los desafíos globales a los que se enfrentaba la política exterior emergente sudafricana. El resultado de este proceso fue una sólida articulación de lo que constituían los intereses vitales del país, reubicándolo en la escena global y aceptando la relación entre la política exterior y los asuntos económicos y de seguridad. Convertir esto en un marco político factible ocupó gran parte del mandato presidencial de Mandela. El segundo desarrollo importante, que empezó con la presidencia de Mbeki en 1999, identificó dos categorías amplias pero interdependientes entre ellas, la creación de riqueza y la seguridad. La tercera etapa, que se inició en 2000, incluía como prioridad central e idea clave política, la perspectiva de la reafirmación de África, la erradicación de la pobreza y el subdesarrollo, y los esfuerzos por conseguir un orden global más justo y equitativo” (Le Pere, 2005: 400-401).

Para analizar la política migratoria se hace necesario introducirnos a la misma con breves rasgos de su historia a fin de tener un criterio amplio al respecto, para lo cual profundizaremos refiriéndonos a textos del Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona, mismos que sostienen que “las migraciones modernas en el continente africano se comprenden mejor al enmarcarlas en el contexto de la historia y de la evolución política de las sociedades africanas, marcadas fuertemente por el impacto de la colonización del continente. Cuando en 1910 se aprobó la constitución de la Unión Sudafricana –que federaba las provincias del Cabo, Natal, Orange y Transvaal, la marginalización y discriminación de los sudafricanos de origen africano empezó a ser tema de debate político. En principio, el trato discriminatorio para con la población negra instaurada mediante la “colour bar” que les impedía el derecho a voto o a la propiedad de la tierra no distaba mucho del trato que las poblaciones autóctonas recibían en la mayoría de colonias europeas. Más adelante, ahora si en la etapa post-apartheid, la política migratoria va priorizar el control de fronteras, las expulsiones o la exclusión sobre temas como la gestión, la admisión o la integración; no toman suficiente iniciativa a la hora de enfocar los movimientos migratorios desde una perspectiva regional, dado el origen de la mayoría de inmigrantes residentes en Sudáfrica y la dependencia de estos países de las remesas de sus nacionales; entienden la inmigración como una amenaza y han optado por la política migratoria y los instrumentos que hacen hincapié en el control de los flujos y la gestión restrictiva de la entrada de inmigrantes. Estas opciones no tienen en cuenta el factor de la integración y tampoco prestan atención al papel de la inmigración en el



escenario socio-económico y en el proceso de construcción de la identidad de la actual Sudáfrica”.

De la misma forma, existe una situación escandalosa que no soporta ningún análisis científico, como lo señala de manera muy responsable María del Rayo Ventura Navarrete (2012: 5-6) quien sostiene que “actualmente el sistema migratorio en Sudáfrica sigue funcionando por medio de la actuación de los organismos reclutadores, los acuerdos migratorios, el papel de los gobiernos de los países vecinos y de los patrones y la ley Aliens Control Act (1991) heredada del apartheid. Los tratados celebrados durante el apartheid entre los gobiernos de Sudáfrica, Mozambique, Botswana, Lesotho, Swazilandia y Malawi siguen vigentes, principalmente en el ámbito del reclutamiento de trabajadores mineros y agrícolas. La vigencia de dichos instrumentos jurídicos también favorece a los nuevos organismos reclutadores, los cuales realizan su trabajo al amparo de dichos acuerdos”.

Ahora bien “sería pertinente preguntarse si la política exterior que ha manejado el Estado sudafricano post apartheid, es congruente con su política migratoria. Respecto a esto se podría afirmar que ha manejado una política exterior de puertas abiertas al mundo. Sin embargo, cuando se trata de política migratoria, dicha apertura se centra en aceptar únicamente a quienes contribuyen a materializar los fines desarrollistas del Estado. Lo anterior, tiene su fundamento en que en el Estado sudafricano aún persisten rasgos del Apartheid en el ámbito económico” (Barriga y Bernal, 2013: s/n).

Después de la fundamentación encontramos que de ninguna manera existe una relación de coherencia entre la política exterior sudafricana y su política migratoria en la etapa post-apartheid. El gran sueño de Mandela y los más grandes impulsores del Congreso Nacional Africano, al parecer solamente alcanzo a derrotar el apartheid visual, porque los grandes problemas de ese sistema aún persiste en Sudáfrica, país donde la mayor parte de la población es negra y por ende es pobre, economía de ese país que sigue en mano de la clase blanca, las principales decisiones económicas la siguen dictando los blancos sentados en sus grandes oficinas con direcciones en Londres.

Como podemos observar, el Congreso Nacional Africano dio pasos importantes y fundacionales en la actual Sudáfrica; ahora el trabajo es de los nuevos

políticos, la nueva visión que debe imperar para conseguir días mejores. Días que al parecer no llegarán con facilidad puesto que no es posible vislumbrar avances significativos en materia, dado a los grandes cuestionamientos que aquejan al principal partido político en el poder, lo que en cierta forma nos haría pensar que en un tiempo no tan lejano, los blancos retomen el poder político en su totalidad.

## CAPÍTULO V

### 5. CONCLUSIONES

#### 5.1. Conclusiones

La investigación realizada más allá de enfocarse específicamente en la relación entre la política exterior y política migratoria sudafricana en la etapa post-apartheid, aborda un sinnúmero de particularidades referente a la migración desde sus inicios, así como también se analiza la visión política de los pensadores del siglo XIX e inicios del siglo XX de nuestra América, en torno a la apertura, en lo referente a la ansiada migración blanca caucásica y por otro lado el desprecio frontal a la migración no-blanca y nativa.

Es importante reconocer que el desprecio a esa migración no-blanca o nativa, no reflejaba la realidad migratoria ciertamente, puesto que existía y siempre existirá en la ley vacíos que permitirán el ingreso y el movimiento nacional de mano de obra barata e irregular, a fin de seguir alimentando el patrimonio de unos pocos así como estimular la carga impositiva de los estados por el exceso de producción y creación de riquezas a cambio de la explotación de inmigrantes irregulares.

De ninguna manera podríamos encasillarnos en la migración regular o irregular y peor aún en observar la migración simplemente como el hecho de ganar unos porque pierden otros, o de ganar y ganar. La migración, tal como se lo ha explicado dentro la investigación, tiene un sinnúmero de matices y detalles, y a través del tiempo han cambiado sus consideraciones hasta llevarnos a ampliar su conceptualización así como clases y tipos; que van a significar un cambio radical en la forma de pensar la migración desde una óptica más acertada a las actuales circunstancias del desarrollo humano.

Dentro de la investigación, también analizamos la política exterior, y encontramos que siendo una construcción interna de los estados, la misma se diseña de acuerdo a las necesidades nacionales de cada uno de los países, y ella funciona de cara a lo que acontece en la realidad nacional. Sudáfrica, siendo una colonia inglesa, sus acciones reflejaban la visión expresa de la corona, por lo tanto su política exterior y

migratoria estaba regida por los mandatos ingleses, así como el desarrollo interno que mantenía el sistema estaba ciertamente oficializado por los boer, de tal suerte que nada de lo que sucedía en esas tierras estaba fuera de las ordenes y disposiciones británicas.

La situación en ese país no cambió desde el inicio de la República y peor aún en los años que trascurrieron, antes de mejorar la situación para los nacionales africanos, así como también para los inmigrantes, en la década de los cincuenta del siglo pasado más bien se institucionalizó el régimen segregacionista con la implementación del régimen del apartheid, sistema que hasta la actualidad sigue causando grandes problemas en Sudáfrica.

La política exterior sudafricana en relación a su política migratoria, no tuvo avances importantes desde la creación de la república que data desde 1910 hasta la caída del apartheid que ocurrió en 1994, durante esa etapa la explotación laboral, la segregación racial, la negación de derechos para nacionales e inmigrantes fue tal que en cierto modo contribuyó a convertirse ese país en un sistema tan cuestionado a nivel internacional, pero eso si gozando del apoyo de los estados unidos, así como algunos de sus aliados pero las sanciones y el bloqueo internacional fueron tales que empujaron y apresuraron su caída, hasta convertirse en una república democrática, aunque con muchas tareas pendientes pero al fin brilló la libertad para el pueblo sudafricano y migrante.

Con la caída del apartheid y la llegada del Nelson Mandela al poder, este país va experimentar grandes cambios, empezando por convertirse en presidente un hombre nativo sudafricano, por otro lado mediante amnistías se indultaron a muchos presos extranjeros quienes estaban amenazados con ser deportados del país.

Si bien es cierto fueron importantes las acciones inmediatas determinadas por el Gobierno de Mandela, a fin de parar las acciones de deportación, así como las políticas que oprimían a los migrantes, pero lo más profundo y serio fue la fundamentación de su política exterior en el Ubuntu, lo que va significar que su política exterior iría de la mano con su política migratoria, dado que pensar en Ubuntu, es adentrarse en el Panafricanismo, Cooperación Sur-Sur y el renacimiento africano. Estas características cambiarían por completo el mapa de la Sudáfrica excluyente y segregacionista a convertirse en la Sudáfrica amada y soñada por Mandela, situación que va diferir considerablemente del

sueño y aspiración de Mandela, dado los grandes escándalos en materia de derechos humanos ligados a temas migratorios en Sudáfrica.

No es de asombrarse entonces que cuando observamos la realidad migratoria sudafricana a la luz de su Política Exterior, nos encontramos con una realidad totalmente diferente, toda vez que “Sudáfrica deporta entre 150.000 y 200.000 migrantes por año. La mayoría de los migrantes son arrestados en las calles o en los lugares de trabajo y son remitidos a un centro de retención privado al oriente de la ciudad de Lindela. Este centro ha sido foco de controversia y es materia de permanentes investigaciones de derechos humanos sobre el tratamiento a los migrantes” (Crush, 2005: 135). Un monto similar a los deportados por año de los Estados Unidos, toda vez que “Washington deporta cada año un promedio de 300.000 personas” (About.com Inmigración, 2013), esta cifra tomando en cuenta la población de los dos países, que son severamente abismales, nos podemos dar cuenta que la política sudafricana, es terrible, considerando que sus agentes de migración transitan por las calles realizando redadas y buscando irregulares en las fábricas.

Los países de toda África miran a Sudáfrica, de la misma forma en que los países de América Latina mira a los Estados Unidos, los primeros ven a ese país como su mayor sueño, como el espacio donde podrían hacer realidades todos sus más grandes anhelos, pero este país actúa con una política migratoria más rigurosa a la de los Estados Unidos.

## **REFERENCIAS**

## Bibliografía

- Arenal, C. (1990). *Introducción a las Relaciones Internacionales*. Tercera edición. Madrid. Tecnos.
- Borisovna, L. (2002). *Vivir un Espacio. Movilidad Geográfica de la Población*. Puebla: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, P. 13.
- Borges, R. (2015). *Atos de Xenofobia Mostram Lado Sombrio da África do Sul*. Sao Paulo. Migramundo.
- Blanco, C. (2000). *Las Migraciones Contemporáneas*. Madrid. Alianza.
- Cabanillas, N. (2011). *Género y Memoria en Sudáfrica Post Apartheid: la construcción de la noción de víctima en la comisión de la verdad y la reconciliación (1995-1998)*. México. El Colegio, Centro de Estudios Asia y Africa.
- Calduch, R. (1993) *Dinámica de la Sociedad Internacional*. Madrid. CEURA.
- Castles, S. (2006). *Factores que hacen y deshacen las políticas migratorias*". En *Repensando las migraciones. Nuevas perspectivas teóricas y empíricas*. Alejandro Portes y Dewind Josh (Coord.). México: Universidad Autónoma de Zacatecas.
- Castles, S. y Mark J. M. (2004). *El Estado y la migración internacional: la búsqueda de control*. En *La era de la migración. Movimientos internacionales de población en el mundo moderno*. México: Universidad Autónoma de Zacatecas.
- Catalayud, J. M. (2012). *La Policía Sudafricana Mata a Tiros a 34 Mineros en una Protesta*. En Diario el País de España, de 17 de agosto de 2012.
- Centro de Estudios y Documentación Internacionales de Barcelona – CIDOB. (2005) *Claves para interpretar la Política Exterior Española y las Relaciones*

*Internacionales 2004: Migraciones en Sudáfrica.* Barcelona. Anuario Internacional CIDOB 2004.

Costa, M. A. (1971). *Monografía No. 5.* Rio de Janeiro. IPEA/INPES.

Cunningham, H. (2004) *Nations Rebound?: Crossing Borders in a Gated Globe, En Identities: Global Studies in Culture and Power.* Toronto. University of Toronto.

Del Sur Africa Visiones Brasileñas (2000). Instituto de Pesquisa de Relaciones Internacionales. Brasilia. Fundación Alexandre de Guzmán.

De Souza, Amaury (2008) *A Agenda Internacional do Brasil. “A política externa brasileira de FHC a Lula”.* Rio de Janeiro. Centro Brasileiro de Relacoes Internacionais.

HANS J. M. (1952) *Another 'Gread Debate': The National Interest of the United States.* New York. The American Political Science Review, n. 4.

Hosie, R. (2004) *Memórias do Século XX: Vol. 1 - O Surgimento da Era Moderna. Tradução de Maria Clara de Mello Motta e Helena Portella Rapôso.* Rio de Janeiro: Reader's Digest.

Iain C. (1994). *Migración, Cultura, Identidad.* Buenos Aires: Amorrortu.

Instituto de Altos Estudios Diplomáticos de la República de Venezuela “Pedro Gual”. (2008) *Perspectiva Internacional. “Sudáfrica: la Xenofobia con Rostro Neoliberal.* Caracas. Instituto Pedro Gual.

Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay. (2010). *Censo 2010, Núcleos Temáticos, Informe sobre Migración.* Uruguay.

- Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de la República de Argentina (2015). *Promoción y Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación. Argentina.*
- Kearney, M. y Bernadete B. (2002). *Migration and Identities- A ClassBased Approach.* New York. Latin American Perspectives, Issue 138, Vol.31, No.5. Septiembre, p. 4.
- Lechini de Álvarez, G. (2011) *El Peso del Apartheid en el Diseño de la Política Exterior Sudafricana.* Buenos Aires. Revista de Relaciones Internacionales Nro. 3
- Le Pere, Garth (2005) director ejecutivo del Institute for Global Dialogue, Johannesburgo.
- Lechini de Álvarez, G. (2006) *Argentina y África en el espejo de Brasil ¿Política por impulsos o construcción de una política exterior?.* Buenos Aires. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Sudáfrica “Sudáfrica: Perfil del País” 2005, pág. 400 – 401.
- Mamdani, M. (1998) *Ciudadano y Súbdito: África Contemporánea y el Legado del Colonialismo.* Buenos Aires. Siglo Veintiuno.
- Medina, M. (1973) *La teoría de las Relaciones Internacionales.* Madrid. Seminarios y Ediciones.
- Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. (2014) *Ficha País Sudáfrica.* Quito.
- Muñoz, H. (1985) *América Latina y el Caribe: Políticas Exteriores para Sobrevivir. En Anuario de Políticas Exteriores Latinoamericanas.* Buenos Aires. PROSPEL.
- Muñoz, H. y Tulchin, J. (1984). *A América Latina e a Política Mundial. Uma Perspectiva Latino-americana das Relacoes Internacionais.* Sao Paulo. CONVIVIO.



Niggel, W. (1994). *The Making of Modern South Africa: Conquest, Segregation and Apartheid*. Oxford/ Candbridge.

Ortega S. D. (1983). *El Acero de Guerra o el Olivo de Paz*. Managua. Nueva Nicaragua.

Reynolds, P.A (1971) *An Introduction to International Relations*. Londres.

Lognman Group Leed.

Republic of South Africa-Department of Labour, (2007) *Labour Migration and South Africa: Towards a fairer deal for migrants in the South African Economy*. Sudafrica. Labour.

Rodríguez, M. (2003) *El apartheid sudafricano, un Caso Particular del Desarrollo del Imperialismo*. Buenos Aires. Observatorio de Conflictos de Argentina.

Ruiz García, A. (2002) *Migración Oaxaqueña, una Aproximación a la Realidad*. Oaxaca. Coordinación Estatal de Atención al Migrante Oaxaqueño.

Tomassini, L. (1991) *El Marco de Análisis de la Política Exterior*. Bilbao. Servicio Editorial Universidad del País Vasco.

Tinnirello, M. F. (2014) *Artículo “Sudáfrica como potencia regional. Participación e involucramiento en la resolución y prevención de conflictos en África”*. Revista Neiva, Cadernos Argentina – Brasil.

Tizón García, J. L. (1993) *Migraciones y Salud Mental*. Barcelona. Promociones y Publicaciones Universitarias PPU.

Ventura Navarrete, M. del R. (2002) *XI Congreso Internacional de ALADAA, del Colegio de México, “El Fenómeno del trabajo migratorio africano en Sudáfrica en los noventa”*. México D.F. Colegio de México.

## **Fuentes de Internet**

Adogamhe, P. (2008, Julio) “*PAN-AFRICANISM Revisited: Vision and Reality of African Unity and Development*” en *African Review of Integration Vol. 2*, Recuperado el 8 de mayo de 2014 de: <http://www.africaunion.org/root/ua/Newsletter/EA/Vol2%20No2/Adogamhe.pdf>

About.com (2013) *Blog en Español, sobre Inmigración*. Recuperado el lunes 5 de mayo de 2014. <http://inmigracion.about.com>.

Anuario Internacional CIDOB. (2004) *Claves para interpretar la Política Exterior*. Recuperado el 20 de junio de 2014 de: [https://www.google.com.ec/#q=Anuario+Internacional+CIDOB%2C+\(2004\)+en+Claves+para+interpretar+la+Pol%C3%ADtica+Exterior+](https://www.google.com.ec/#q=Anuario+Internacional+CIDOB%2C+(2004)+en+Claves+para+interpretar+la+Pol%C3%ADtica+Exterior+).

Arte Historia (2015) Recuperado 28 de junio de 2015. <http://www.artehistoria.com/v2/contextos/2646.htm>.

Barriga, M. C. y Bernal, N. (2011) *La Política Migratoria Sudafricana: entre contradicciones y continuidades*. Bogotá. Boletín de Estudios Africanos– Universidad Externado de Colombia. Recuperado lunes 5 de mayo de 2014 de: [http://www.aladaa.com.ar/Publicaciones/Estudios\\_Africanos\\_2.pdf](http://www.aladaa.com.ar/Publicaciones/Estudios_Africanos_2.pdf) recuperado.

Barriga, M. C. y Bernal, N. (2013). *En Ponencia Política Exterior y Política Migratoria Sudafricana: ¿En Contravía? Tema: Migraciones y Diásporas Política Exterior*. Bogotá. Recuperado el 5 de mayo de 2014. Universidad Externado De Colombia [http://www.eafit.edu.co/centros/asiapacifico/Documents/PonenciasAladaa/Barriga\\_Bernal\\_PEyPMigratoria.pdf](http://www.eafit.edu.co/centros/asiapacifico/Documents/PonenciasAladaa/Barriga_Bernal_PEyPMigratoria.pdf) .

Crush, J. (2005) *Johannesburg, South Africa: Breaking with Isolation*. En *Migrants and the City: Bangkok, Berlin, Dakar, Karachi, Johannesburg, Naples, Sao Paulo, Tijuana, Vancouver, Vladivostok*, Venecia, UN Habitat. 2005, pág.113 – 149. Recuperado el 5 de mayo de 2014 de: <http://www.chs.ubc.ca/archives/files/international%20migrants%20and%20the%20city.pdf>, recuperado, lunes 5 de mayo de 2014.

Domingues, J. E. (2015). “Ubuntu”, *O Que A África Tem A Nos Ensinar*. Recuperado el 24 de mayo de 2014 de: <http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/ubuntu-o-que-a-africa-tem-a-nos-ensinar/> - Blog : La enseñanza de la Historia.

Divinzenso, A. M. (2002) *El Apartheid después del Apartheid. Consecuencias sociales de la segregación racial en la Sudáfrica actual. Observatorio de conflictos*. Buenos Aires. Recuperado el 11 de junio de 2014 de: <http://www.nodo50.org/observatorio/apartheid2.htm>, recuperado 11 de junio de 2014.

Freedom Charter (1955) *Migración, Precariedad y Nuevos Movimientos Sociales en el Post-apartheid en Sudáfrica*. Recuperado el 8 de agosto de 2015 de: <http://www.anc.org.za>

ILLANES, C (s/f). *En Sudáfrica no hubo Reconciliación sino un Nuevo Bloque Histórico sin Apartheid*. Recuperado el 21 de junio de 2014 de: <http://www.diariolibre.info/secciones/noticias/nota.php?id=2186-7k> (recuperado el 21-07-20014).

International Idea: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (2010) *Documentos inclusivos para la construcción de una sociedad igualitaria. Racismo: Hacia una Argentina intercultural*. Recuperado 10 de

agosto de 2015: <http://www.constitutionnet.org/es/country/constitutional-historysouth-africa> Publicaciones.

*García-Calvo, C. (2015) Política exterior y presencia global: las estrategias de Australia y Sudáfrica. Real Instituto Elcano. Recuperado el 21 de marzo de 2015 de: [http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM\\_GLOBAL\\_CONTEXT=/elcano/elcano-es/especiales/indiceelcanopresenciaglobal/ari71-2015-garciacalvo-politica-exterior-presencia-global-estrategias-australia-sudafrica](http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano-es/especiales/indiceelcanopresenciaglobal/ari71-2015-garciacalvo-politica-exterior-presencia-global-estrategias-australia-sudafrica),*

Mbeki, M. (2000) “*Issues in South African Foreign Policy. The African Renaissance*”. Recuperado el 14 de junio de 2015 de: <http://www.columbia.edu/cu/ccbh/souls/vol2no2/vol2num2art8.pdf>

Market Review (2007) Recuperado el 5 de mayo de 2014 de: <http://www.labour.gov.za/downloads/documents/annual-reports/labour-marketreviewreport/>.

Sequeira, C. *¿Cómo son la Teoría Realista y la Constructivista?*. Recuperado el 12 de octubre de 2014 de: <http://lacomunidad.elpais.com/tribulaciones/2011/11/24/-como-son-teoria-realista-yconstructivista->

## Conferencias

Ramírez G. Jacques (2014) *Conferencia Magistral Impartida a los Terceros Secretarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador*, realizada el 8 de mayo de 2014, en las aulas del IAEN.

## **ANEXOS**

- A. Prohibition of Mixed Marriages Act No. 55 of 1949
- B. Group Areas Act No. 41 of 1950
- C. Population Registration Act No. 30 of 1950
- D. Natives Resettlement Act No. 19 of 1954
- E. Immorality Amendment Act No. 57 of 1969

**Act No. 54  
of 1949.**

- (ii) knives, including pocket knives, any blade of which exceeds three and a half inches in length; (blade in this context, means that part of a knife which does not constitute the haft or handle);
- (e) Spears, assegais and loaded or spiked sticks or any stick exceeding one inch in diameter;
- (f) knuckledusters;
- (g) sandbags;
- (h) jumpers, crowbars or hammers exceeding three pounds in weight;
- (i) axes or pickaxes;
- (j) solid rubber batons;
- (k) tear-gas pens and other instruments projecting lachrymating, asphyxiating or incapacitating gases and cartridges therefor;
- (l) any article which so closely resembles a pistol or other firearm as to be calculated to give the impression that it is a genuine firearm and which is capable, by the discharge of a cartridge (loaded or unloaded) of causing a loud report, calculated to give the impression that a genuine firearm had been discharged, and also cartridges therefor;
- (m) any other article declared by the Minister of Justice by notice in the *Gazette* to be a dangerous weapon for the purposes of this section.

(4) Any person found guilty of an offence in terms of this section shall be liable to imprisonment for a period not exceeding six months or to a fine not exceeding fifty pounds or to both such fine and such imprisonment.

(5) No prosecution shall be instituted under the provisions of this section except on the written authority of the Attorney-General.

(6) Section *nine* of the Prevention of Crimes Ordinance, 1905 (Ordinance No. 20 of 1905, Transvaal), is hereby repealed.

Short title.

**11.** This Act shall be called the General Law Amendment Act, 1949.

**Act No. 55  
of 1949.****ACT**

**To prohibit marriages between Europeans and non-Europeans, and to provide for matters incidental thereto.**

*(English Text signed by the Governor-General.)  
(Assented to 1st July, 1949.)*

**BE IT ENACTED** by the King's Most Excellent Majesty, the Senate and the House of Assembly of the Union of South Africa, as follows:—

<b>Act No. 55 of 1949.</b>	<b>1.</b> (1) As from the date of commencement of this Act a marriage between a European and a non-European may not be solemnized, and any such marriage solemnized in contravention of the provisions of this section shall be void and of no effect: Provided that—
<b>Marriages between Europeans and non-Europeans prohibited.</b>	(a) any such marriage shall be deemed to be valid, if— <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) it has been solemnized in good faith by a marriage officer, and neither of the parties concerned, or any other person in collusion with one or the other of them, has made any false statement relating to the said marriage amounting to a contravention of section <i>four</i>; and</li> <li>(ii) any party to such marriage professing to be a European or a non-European, as the case may be, is in appearance obviously what he professes to be, or is able to show, in the case of a party professing to be a European, that he habitually consorts with Europeans as a European, or in the case of a party professing to be a non-European, that he habitually consorts with non-Europeans as a non-European;</li> </ul>
	(b) where any such marriage has been solemnized in good faith by a marriage officer, any children born or conceived of such marriage before it has been declared by a competent court to be invalid, shall be deemed to be legitimate.
	(2) If any male person who is domiciled in the Union enters into a marriage outside the Union which cannot be solemnized in the Union in terms of sub-section (1), then such marriage shall be void and of no effect in the Union.
<b>Solemnization of mixed marriage by marriage officer an offence.</b>	<b>2.</b> Any marriage officer who knowingly performs a marriage ceremony between a European and a non-European shall be guilty of an offence and liable to a fine not exceeding fifty pounds.
<b>Presumption of race from appearance.</b>	<b>3.</b> Any person who is in appearance obviously a European or a non-European, as the case may be, shall for the purposes of this Act be deemed to be such, unless and until the contrary is proved.
<b>False statement to a marriage officer an offence.</b>	<b>4.</b> Any person who makes a false statement to a marriage officer, relating to the question whether any party seeking to have his marriage solemnized by such marriage officer is a European or a non-European, knowing such statement to be false, shall be guilty of an offence and liable to the penalties prescribed by law for the crime of perjury.
<b>Short title.</b>	<b>5.</b> This Act shall be called the Prohibition of Mixed Marriages Act, 1949.



WAR MEASURES CONTINUATION.  
POPULATION REGISTRATION.

275

Item No.	Proclamation No.	Title or Subject of Regulations.	Extent of Continuation.
22	185 of 1946 (War Measure No. 49 of 1946).	Control of prices and prevention of hoarding of goods.	The whole.
23	197 of 1946 (War Measure No. 53 of 1946) and sub-section (g) of section <i>two</i> of Act No. 48 of 1948.	Vesting of shares, stocks and debentures in the Custodian of Enemy Property and the powers of the Custodian in regard thereto.	The whole, in so far as it relates to the powers of the Custodian of Enemy Property in regard to shares, stocks and debentures vested in him as at the 31st December, 1948.
24	205 of 1946 (War Measure No. 55 of 1946).	Control of foodstuffs and certain other commodities.	The whole.
25	206 of 1946 (War Measure No. 56 of 1946) as amended by Proclamation No. 101 of 1947 (War Measure No. 25 1947) and sub-section (h) of section <i>two</i> of Act No. 48 of 1948.	Slaughter animal and meat control.	The whole.

Act No. 29  
of 1950.

Act No. 30  
of 1950.

## ACT

To make provision for the compilation of a Register of the Population of the Union; for the issue of Identity Cards to persons whose names are included in the Register; and for matters incidental thereto.

(Afrikaans Text signed by the Officer Administering the Government.)  
(Assented to 22nd June, 1950.)\*

**BE IT ENACTED** by the King's Most Excellent Majesty, the Senate and the House of Assembly of the Union of South Africa, as follows :—

1. In this Act, unless the context otherwise indicates— Definitions.
- (i) "alien" means an alien as defined in section *one* of the Aliens Act, 1937 (Act No. 1 of 1937); (xv)

- (ii) "board" means a board constituted in terms of section *eleven*; (x)
- (iii) "coloured person" means a person who is not a white person or a native; (iv)
- (iv) "Director" means the Director of Census appointed under section *four* of the Census Act, 1910 (Act No. 2 of 1910), and includes the Assistant Director of Census and any officer acting under a delegation from or under the control or direction of the Director; (ii)
- (v) "ethnic or other group" means a group prescribed and defined by the Governor-General in terms of subsection (2) of section *five*; (iii)
- (vi) "fixed date" means the date upon which the census is taken in the year 1951 in terms of section *three* of the Census Act, 1910 (Act No. 2 of 1910); (xiii)
- (vii) "identity card" means the identity card referred to in section *thirteen* but does not include an identity card which has lapsed in terms of any regulation; (viii)
- (viii) "identity number" means the identity number assigned to a person in terms of section *six*; (ix)
- (ix) "Minister" means the Minister of the Interior; (vi)
- (x) "native" means a person who in fact is or is generally accepted as a member of any aboriginal race or tribe of Africa; (vii)
- (xi) "prescribed" means prescribed by regulation; (xiv)
- (xii) "register" means the register referred to in section *two*; (xi)
- (xiii) "regulation" means a regulation made under section *two*; (xii)
- (xiv) "this Act" includes the regulations; (v)
- (xv) "white person" means a person who in appearance obviously is, or who is generally accepted as a white person, but does not include a person who, although in appearance obviously a white person, is generally accepted as a coloured person. (i)

Act No. 30  
of 1950.

2. There shall, as soon as practicable after the fixed date, be compiled by the Director and thereafter maintained by him, a register of the population of the Union.

Compilation and maintenance of population register.

3. The particulars required for the compilation of the register in respect of the population of the Union as at the fixed date shall be extracted by the Director from the forms and returns received by him under the Census Act, 1910 (Act No. 2 of 1910), in connection with the census taken on the fixed date and from such other records as may be available to the Director.

Data from which register to be compiled.

4. There shall be included in the register, in three separate parts thereof, the names of—

What persons to be included in the register.

- (a) (i) all South African citizens within the Union on the fixed date;
- (ii) all South African citizens who enter or are born in the Union after the fixed date; and
- (iii) all persons who become South African citizens in the Union after the fixed date;

- (b) (i) all persons who are not South African citizens and are within the Union on the fixed date and were prior to the fixed date born in any part of South Africa included in the Union or admitted to the Union for permanent residence therein; and
- (ii) all persons who are not South African citizens and are after the fixed date born in the Union or admitted to the Union for permanent residence therein; and
- (c) (i) all persons who are not South African citizens and are within the Union on the fixed date for a temporary purpose; and
- (ii) all persons who are not South African citizens and are admitted to the Union for a temporary purpose after the fixed date.

Act No. 30  
of 1950.

5. (1) Every person whose name is included in the register shall be classified by the Director as a white person, a coloured person or a native, as the case may be, and every coloured person and every native whose name is so included shall be classified by the Director according to the ethnic or other group to which he belongs.

Classification of persons whose names are included in the register.

(2) The Governor-General may by proclamation in the *Gazette* prescribe and define the ethnic or other groups into which coloured persons and natives shall be classified in terms of sub-section (1), and may in like manner amend or withdraw any such proclamation.

(3) If at any time it appears to the Director that the classification of a person in terms of sub-section (1) is incorrect, he may, subject to the provisions of sub-section (7) of section *eleven* and after giving notice to that person and, if he is a minor, also to his guardian, specifying in which respect the classification is incorrect, and affording such person and such guardian (if any) an opportunity of being heard, alter the classification of that person in the register.

6. The Director shall assign an identity number to every person whose name is included in the register.

Identity number to be assigned to every person whose name is included in the register.

7. (1) There shall, in respect of every person whose name is included in the register, other than a native, be included in the register the following particulars and no other particulars whatsoever namely—

- (a) his full name, sex and ordinary place of residence;
- (b) his classification in terms of section *five*;
- (c) the date and place of his birth;
- (d) his citizenship or nationality, and in the case of an alien, an indication of the fact that he is an alien;
- (e) his marital status;

The particulars to be included in respect of every person whose name is included in the register.

- (f) in the case of a registered voter, the electoral division and polling district in which he is registered as a voter under the Electoral Consolidation Act, 1946 (Act No. 46 of 1946);
- (g) the date of his arrival in the Union, if not born in a part of South Africa included in the Union;
- (h) a recent photograph of himself, except in the case of a person who has not yet attained the age of sixteen years, or who has been admitted to the Union for a temporary purpose; and
- (i) his identity number.

Act No. 30  
of 1950.

(2) There shall in respect of every native whose name is included in the register, be included in the register the following particulars and no other particulars whatsoever, namely—

- (a) his full name, sex and the district in which he is ordinarily resident;
- (b) his citizenship or nationality, the ethnic or other group and the tribe to which he belongs;
- (c) the date, or if the date is not known, the year or reputed year, and the place, or if the place is not known, the district of his birth;
- (d) his marital status;
- (e) the year of his arrival in the Union, if not born in a part of South Africa included in the Union;
- (f) a recent photograph of himself except in the case of a native who has not yet attained the age of sixteen years, and, in the case of a native who is not a South African citizen, his fingerprints; and
- (g) his identity number.

(3) Upon the death or permanent departure from the Union of a person whose name is included in the register, the date of his death or departure from the Union, as the case may be, shall be recorded in the register.

8. (1) There shall be maintained at the office of the magistrate of every district or at such other office within a district as the Minister may approve, a copy of the register containing the names and other particulars recorded in the register in respect of all persons registered as residing within that district.

Copies of  
register to be  
maintained  
in every district.

(2) A list made from the copy of the register maintained in terms of sub-section (1) and containing in respect of every person whose name is included therein the undermentioned particulars and no other particulars whatsoever, shall be open for inspection by the public at the office of the magistrate of the district to which the list relates and at such other places within the district as the Director may determine at all reasonable times during office hours—

- (a) his name, sex and ordinary place of residence or, in the case of a native, the district in which he is ordinarily resident;
- (b) his classification in terms of section *five*;
- (c) his citizenship or nationality;
- (d) in the case of a registered voter, the electoral division and polling district in which he is registered as a voter under the Electoral Consolidation Act, 1946 (Act No. 46 of 1946); and
- (e) his identity number.

Act No. 30  
of 1950.

(3) As soon as a list made from the copy of the register referred to in sub-section (1) becomes available for inspection by the public in terms of sub-section (2) at the office of the magistrate of any district, the Director shall cause to be published in the *Gazette* and in at least one Afrikaans and one English newspaper circulating in that district, a notice to the effect that such list shall, with effect from a date specified in the notice, be so available for inspection by the public at the office of the magistrate of that district and at such other places within that district as the Director may specify.

9. If the name of any person whose name is by this Act required to be included in the register, does not appear on the register, that person or, if that person has not attained the age of sixteen years, his guardian, shall furnish the Director in the prescribed form with such particulars in regard to himself or, as the case may be, his ward under the age of sixteen years, as may be necessary for the inclusion in the register of his or his ward's name.

Persons to furnish particulars to Director for the inclusion in the register of their names or the names of their wards who have not attained the age of sixteen years.

10. (1) Every person (other than a native) whose name is included in the register and the guardian of any such person who has not attained the age of sixteen years, shall within fourteen days or, in a particular case, such longer period as the Director may allow, after any permanent change in the ordinary place of residence of that person or of his ward under the age of sixteen years, as the case may be, notify the Director in the prescribed manner of that change of residence.

Notification of change of residence.

(2) Any permanent change in the ordinary place of residence of a native from one district to another shall be notified to the Director by such person and in such manner as may be prescribed.

11. (1) Any person who considers himself aggrieved by his classification by the Director in terms of section *five* and any person who has any objection to the classification of any other person in terms of the said section, may at any time object in writing to the Director against that classification.

Objections and appeals against classification of persons in register.

(2) Every such objection shall be lodged in duplicate and shall be accompanied by an affidavit in duplicate setting forth fully the grounds upon which the objection is made, and if the objection relates to the classification of a person other than the objector, a copy of the objection and the affidavit shall be

transmitted by the Director to the person to whose classification the objection relates.

(3) Every objection received by the Director in terms of sub-section (2) shall be referred by him for decision to a board of not less than three persons, including the chairman, constituted for the purpose by the Minister, and presided over by a person, appointed by the Minister, who is or has been a judge of the Supreme Court of South Africa, or a magistrate: Provided that no objection which relates to the classification of a person other than the objector shall be so referred for decision unless the objector has paid the deposit referred to in sub-section (4).

(4) Every person who lodges an objection with the Director in terms of sub-section (2) against the classification of any other person, shall deposit with the Director an amount of ten pounds which amount shall—

- (a) if the objection is sustained by the board to which it has been referred for decision in terms of sub-section (3), be refunded to the objector; or
- (b) if the objection is rejected by the board, be forfeited to the State.

(5) The provisions of the Commissions Act, 1947 (Act No. 8 of 1947), except section *one* thereof, shall apply *mutatis mutandis* with reference to any board constituted under sub-section (3) of this section: Provided that the Director and every objector and every person in regard to whose classification the objection has been made, shall be entitled to appear before the board concerned either in person or by counsel or attorney on his behalf, to cross-examine witnesses and to adduce such evidence as may be relevant to the matter before the board: Provided further that all sittings of a board shall be held in public or *in camera* as the person whose classification is in issue may elect.

(6) A board may, if it is satisfied that an objection made in terms of sub-section (1) against the classification of a person other than the objector is unfounded or frivolous or vexatious, order the objector to pay to the person against whose classification the objection has been made, an amount not exceeding an amount equal to the reasonable costs incurred by the latter in connection with his appearance at the hearing of the objection, and any such order shall have all the effects of and may be executed as if it were a civil judgment of a magistrate's court.

(7) The decision of a board shall be final and binding upon all persons including the Director: Provided that any person who considers himself aggrieved by a decision of a board in regard to his own classification may within thirty days after the decision of the board has been given, appeal against that decision by way of application on notice of motion to the provincial or local division of the Supreme Court of South Africa having jurisdiction in the area within which such person is ordinarily resident.

(8) The division of the said Supreme Court to which appeal is made shall enquire into and consider the matter and shall confirm, vary or set aside the decision of the board, or give such other decision as in its opinion the board ought to have given, and may make such order as to costs as it may deem fit.

**Act No. 30  
of 1950.**

(9) Any judgment given or order made by a provincial or local division of the said Supreme Court in terms of sub-section (8), shall be subject to appeal to the Appellate Division of the Supreme Court of South Africa in the same manner and on the same conditions as a judgment given or order made in a civil proceeding in that provincial or local division: Provided that no person other than the person whose classification in terms of section *five* is the subject of the judgment or order shall have a right of appeal to the said Appellate Division unless an order of costs has been made against such person.

(10) Any decision by the court in terms of sub-section (8) or (9) relating to the classification of any person shall, for the purpose of this Act, be deemed to be the decision of a board.

(11) A member of a board who is not a member of the public service may be paid such remuneration for his services as a member of the board as the Minister may, in consultation with the Minister of Finance, determine.

12. The Director may require any person in respect of whom any particulars required for recording in the register, have been furnished in any form or return received under the Census Act, 1910 (Act No. 2 of 1910), or in any form prescribed under section *nine*, to furnish to him evidence as to the correctness of any such particulars.

Director may require proof of correctness of particulars furnished for purposes of this Act.

13. (1) The Director shall, as soon as practicable after the inclusion in the register of the name of any person who has attained the age of sixteen years or after any person whose name has been so included, attains the age of sixteen years, and subject to the succeeding provisions of this section, issue an identity card to that person.

Identity cards.

(2) If the person referred to in sub-section (1) is a white person or a coloured person and is not an alien or a person referred to in sub-section (4), the identity card issued to that person shall contain the following particulars and no other particulars in relation to that person whatsoever, namely—

- (a) his name and sex;
- (b) his classification in terms of section *five*;
- (c) his citizenship or nationality;
- (d) his identity number;
- (e) a recent photograph of himself; and
- (f) the date of issue of the identity card.

(3) If the person is an alien and was born in any part of South Africa included in the Union or admitted to the Union for permanent residence therein, the identity card issued to that person shall contain, in addition to the particulars men-



tioned in sub-section (2), the following particulars and no other particulars in relation to that person whatsoever, namely—

**Act No. 30  
of 1950.**

- (a) the date of his arrival in the Union (if not born in a part of South Africa included in the Union);
- (b) an indication of the fact that he is an alien; and
- (c) his signature or, if he is unable to sign his name, his fingerprints.

(4) If the person is not a South African citizen and has been admitted to the Union for a temporary purpose the identity card issued to that person shall contain all the particulars prescribed in respect of an alien by sub-section (3) except a photograph of that person.

(5) If the person is a native, the identity card issued to him shall contain the following particulars and no other particulars in relation to him whatsoever, namely—

- (a) his name and sex;
- (b) the ethnic or other group and the tribe to which he belongs and, in the case of a native who is not a South African citizen, his citizenship or nationality;
- (c) his identity number;
- (d) a recent photograph of himself and in the case of a native who is not a South African citizen, his fingerprints; and
- (e) the date of issue of the identity card.

**14.** (1) After a date to be fixed by the Governor-General by proclamation in the *Gazette*, which date shall be not less than three months from the date of the proclamation— **Production of identity cards.**

- (a) any peace officer (as defined in section *three-hundred-and-ninety* of the Criminal Procedure and Evidence Act, 1917 (Act No. 31 of 1917)) may, whenever he is in terms of sub-section (3) of section *twenty-seven* of the said Act entitled to call upon any person to furnish such peace officer with his full name and address, request that person; and
- (b) any person authorized thereto in writing by the Director may, whenever it is necessary for him to do so for the purpose of carrying out his duties under this Act and upon production of his written authority, request any person,

if that person's name is by this Act required to be included in the register and he has attained the age of sixteen years, to produce to such peace officer or, as the case may be, to such authorized person, his identity card.

(2) Every person who is in terms of sub-section (1) requested by a peace officer or a person authorized thereto by the Director to produce to him his identity card shall, within seven days of the date of such request, produce his identity card to that peace officer or to that authorized person or at a police station indi-



cated by him and recorded by the peace officer or the authorized person, as the case may be.

**Act No. 30  
of 1950.**

(3) If any person fails or refuses to indicate a police station in terms of sub-section (2) the peace officer or the authorized person concerned shall for the purposes of that sub-section indicate and record the police station which he considers nearest to the ordinary place of residence of the said person.

15. Any person to whom an identity card has been issued which contains any particulars which are incorrect or which by reason of any change of circumstances or by reason of the alteration by the Director in terms of sub-section (3) of section *five* or by a board in terms of section *eleven* of the classification in terms of section *five* of the person to whom it relates, have become incorrect, or on which the photograph of the person to whom the identity card relates has ceased to be a recognizable image of that person shall, on the written request of the Director, surrender the identity card in question to the Director who shall thereupon issue, free of charge, but subject to the provisions of section *sixteen*, a fresh identity card to that person.

Director may require surrender of identity cards which reflect incorrect particulars and issue new cards.

16. (1) Every person whose name is included in the register, except a person who has not yet attained the age of sixteen years, shall, at his own expense and as often as it is or becomes necessary to issue an identity card to him, furnish the Director with two copies of a recent photograph of himself:

Photographs of persons whose names are included in the register.

(2) One copy of the photograph referred to in sub-section (1) shall be attached to the identity card issued to the person concerned and the other copy shall be filed in the register.

17. (1) No person employed for the purposes of this Act shall, subject to the provisions of section *eight* and sub-section (2) of this section, publish or communicate to any other person, otherwise than in the course of such employment and for the purposes of this Act, any information acquired by him in the course of his employment, and no person who has come into possession of any such information which to his knowledge has been communicated to him in contravention of the provisions of this section, shall publish or communicate that information to any other person.

Particulars in register not to be published or communicated except in certain cases.

(2) The Director may, notwithstanding the provisions of sub-section (1)—

- (a) furnish to any department of State for any of the purposes of that department or for the purpose of any criminal proceedings, any particulars recorded in the register in relation to any person whose name is included therein;
- (b) on payment of the prescribed fee, furnish to any person upon the written application of that person—
  - (i) the last recorded address of any person whose name is included in the register;
  - (ii) any other particulars recorded in the register in relation to any person whose name is included therein, provided the Director is satisfied that it is in the interests of the last-mentioned person to furnish such particulars.

(3) The Director shall not furnish any particulars to any person under paragraph (b) of sub-section (2) unless the purposes for which the information is required, are set out fully in the written application referred to in that paragraph.

Act No. 30  
of 1950.

18. Any person who—

Penalties.

- (a) for the purposes of this Act knowingly makes or causes to be made a statement which is false in a material particular;
- (b) having come into possession of an identity card belonging to another person, represents it as his own;
- (c) with intent to deceive, imitates, alters, defaces, destroys or mutilates any identity card;
- (d) allows any other person to come into possession of an identity card belonging to him;
- (e) without lawful cause fails or refuses to comply with a request by the Director in terms of section *twelve* or *fifteen*;
- (f) without lawful cause fails or refuses to comply with any of the provisions of sub-section (1) of section *ten* or sub-section (2) of section *fourteen*;
- (g) contravenes any of the provisions of sub-section (1) of section *seventeen*,

shall be guilty of an offence and liable on conviction—

- (i) in the case of an offence referred to in paragraph (a), (b) or (c), to a fine not exceeding one hundred pounds or to imprisonment for a period not exceeding six months, or to both such fine and imprisonment; and
- (ii) in the case of an offence referred to in paragraph (d), (e), (f) or (g) to a fine not exceeding fifty pounds.

19. (1) A person who in appearance obviously is a white person shall for the purposes of this Act be presumed to be a white person until the contrary is proved. Evidence and presumption.

(2) It shall be no defence to a charge under paragraph (f) of section *eighteen* for failing to comply with the provisions of sub-section (2) of section *fourteen* that the name of the accused, has not been included in the register or that an identity card has not been issued to him, unless he proves that it was not due to any failure or neglect on his part.

20. (1) The Governor-General may make regulations as to— Regulations.

- (a) the form of identity cards;
- (b) the manner in which and the conditions subject to which an identity card shall be delivered to the person to whom it relates;
- (c) the issue of duplicate identity cards, the circumstances under and the conditions subject to which they may be issued and the fees payable therefor;

- (d) the surrender or seizure of identity cards relating to deceased persons, persons who leave the Union permanently, or persons who have in terms of sub-section (1) of section *twenty-one* been exempted from those provisions of this Act which relate to the production of identity cards;
- (e) the period of validity of identity cards issued to all persons generally or to any particular class of persons, and the issue of fresh identity cards to replace identity cards which have lapsed;
- (f) the size of and the requirements with which a photograph referred to in section *sixteen* shall comply;
- (g) the proper maintenance of the register and the particulars recorded therein;
- (h) the compilation, in relation to any class of persons whose names are included in the register, of family registers, the maintenance of such family registers and the particulars to be recorded therein;

**Act No. 30  
of 1950.**

and generally, as to all matters which by this Act are required or permitted to be prescribed or which he considers it necessary or expedient to prescribe in order that the purposes of this Act may be achieved.

(2) Any regulations made under sub-section (1) may prescribe penalties for any contravention thereof or failure to comply therewith not exceeding a fine of fifty pounds or imprisonment for a period of six months.

(3) Any regulations made under sub-section (1) shall be laid on the Tables of both Houses of Parliament within fourteen days after promulgation thereof if Parliament is then in ordinary session, or if Parliament is not then in ordinary session, within fourteen days after the commencement of its next ensuing ordinary session, and shall remain on the said Tables for at least twenty-eight consecutive days, and if Parliament is prorogued before the necessary twenty-eight days have elapsed, such regulations shall again be laid on the said Tables as aforesaid within fourteen days after the commencement of its next ensuing ordinary session.

(4) If both Houses of Parliament by resolution passed in the same session (being a session during which such regulations have been laid on the Tables of both Houses of Parliament in terms of sub-section (3)) disapprove of any such regulations or of any provision thereof, such regulations or such provision thereof shall thereafter cease to be of force and effect to the extent to which they are so disapproved, but without prejudice to the validity of anything done in terms of such regulations or of such provision thereof up to the date upon which they so ceased to be of force and effect, or to any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred as at the said date under and by virtue of such regulations or such provision thereof.

21. (1) The Governor-General may by proclamation in the *Gazette* exclude, for a specified or unspecified period, from the provisions of this Act or exempt, for a specified or unspecified period and either unconditionally or subject to such conditions as may be prescribed in the proclamation, from any specified provisions thereof—

- (a) persons employed in the Union in the service of a foreign government (other than persons engaged locally);
- (b) members of any military, naval or air force of the Union or any other government;
- (c) officers and crews of ships or aircraft calling temporarily at Union ports;
- (d) any other class of persons, or persons or class of persons ordinarily resident in any specified area, the generality of the provisions of this paragraph not being limited by the provisions of the preceding paragraphs,

and may in like manner amend or withdraw any such proclamation.

(2) Paragraph (d) of sub-section (1) shall not be construed as authorizing the Governor-General to exclude from the provisions of this Act persons whose names were at any time after the fixed date required under this Act to be included in the register, or to exempt from any of the provisions of this Act any persons who were at any time after the date fixed in terms of section *fourteen* subject to those provisions.

(3) An immigration officer may, subject to the directions of the Minister and for such period of not exceeding six months as he may deem fit, exempt from those provisions of this Act which relate to the production of identity cards, any person who enters the Union for a temporary purpose.

(4) The Director may extend any period for which an exemption has been granted under sub-section (3) by such further period or periods as he may deem fit.

(5) An immigration officer shall forthwith advise the Director of every exemption granted by him in terms of sub-section (3) and every such exemption and every extension of such exemption under sub-section (4) shall be noted by the immigration officer or the Director, as the case may be, on the passport of the person concerned.

(6) The provisions of this Act relating to the issue of identity cards shall not, during the period of an exemption granted under sub-section (3) or during an extension of such period under sub-section (4), apply in respect of the person to whom the exemption relates.

22. The Governor-General may, after consultation with the Executive Committee of the territory of South-West Africa, by proclamation in the *Gazette* and subject to such conditions, modifications and exceptions as may be prescribed in the proclamation, apply the provisions of this Act to the said territory.

**Act No. 30  
of 1950.**

Certain classes  
of persons may  
be exempted  
from provisions  
of this Act.

Extension of  
application  
of Act.

23. The following sub-section is hereby substituted for sub-section (3) of section *one* of the Statistics Act, 1914 :

Act No. 30  
of 1950.

Amendment of  
section 1 of  
Act 38 of 1914.

- “(3) (a) There shall be established a statistical council consisting of the Director of Census, who shall be chairman, and the Assistant-Director of Census, who shall be vice-chairman, and not less than six and not more than ten other persons who shall be appointed by the Governor-General and shall hold office during pleasure.
- (b) The council shall advise the Minister in regard to any matter connected with this Act or the Population Registration Act, 1950, and may from time to time make or cause to be made by a person authorized thereto by the Council such inspections of the population register compiled and maintained under the last-mentioned Act as it may deem fit, and shall report any irregularity in the compilation or maintenance thereof to the Minister.
- (c) The council shall meet at least once in every year upon written notice of the chairman.
- (d) A report on the activities of the council shall be submitted to the Minister annually and the Minister shall lay that report on the Tables of both Houses of Parliament within thirty days after receipt thereof by him if Parliament be then in ordinary session, or, if Parliament be not then in ordinary session, within thirty days after the commencement of its next ensuing ordinary session.”

24. This Act shall be called the Population Registration Act, 1950. Short title.

Act No. 31  
of 1950.

## ACT

To amend the Financial Relations Consolidation and Amendment Act, 1945.

(English text signed by the Officer Administering the Government.)  
(Assented to 22nd June, 1950.)

**BE IT ENACTED** by the King's Most Excellent Majesty, the Senate and the House of Assembly of the Union of South Africa, as follows:—

1. (1) Section *fourteen* of the Financial Relations Consolidation and Amendment Act, 1945 (hereinafter referred to as the principal Act) is hereby amended—

Amendment of  
section 14 of  
Act 38 of 1945.

- (a) by the insertion in sub-section (1) after the words “benefit of” of the words “the province or”;
- (b) by the insertion in the said sub-section after the words “supervision by” of the words “the province or, as the case may be,”; and

Act No. 19  
of 1954.

## ACT

To provide for the removal of natives from any area in the magisterial district of Johannesburg or any adjoining magisterial district and their settlement elsewhere, and for that purpose to establish a board and to define its functions; and to provide for other incidental matters.

(English text signed by the Governor-General.)  
(Assented to 4th June, 1954.)

**BE IT ENACTED** by the Queen's Most Excellent Majesty, the Senate and the House of Assembly of the Union of South Africa, as follows:—

1. In this Act, unless the context otherwise indicates— Definitions.

- (i) "Administrator" means the Administrator of the Transvaal; (i)
- (ii) "board" means the Natives Resettlement Board established under section *two*; (vii)
- (iii) "council" means the council of the city of Johannesburg; (viii)
- (iv) "land" includes any right in or over land; (ii)
- (v) "magistrate" includes a native commissioner, an additional magistrate or an additional native commissioner; (iv)
- (vi) "Minister" means the Minister of Native Affairs; (v)
- (vii) "native" means any person who is a member of an aboriginal race or tribe of Africa, and whenever there is doubt as to whether any person is a native, he shall be presumed to be a native, unless the contrary is proved; (vi)
- (viii) "rates" means rates levied on the value of land or premises; (iii)
- (ix) "specified area" means any area described in the Schedule to this Act, and any area within the magisterial district of Johannesburg or within any magisterial district adjoining such first-mentioned district, to which the Governor-General may, by proclamation in the *Gazette*, apply the provisions of this Act. (ix)

2. (1) There is hereby established a board to be known as the Natives Resettlement Board, which shall be a body corporate capable of suing and being sued in its corporate name and of performing all such acts as are necessary for or incidental to the exercise of its powers and the performance of its functions and duties under this Act.

Establishment  
of Natives  
Resettlement  
Board.

(2) The board shall not be liable for any tax, duty, fee or other charge imposed by or under any law.

3. (1) The board shall consist of not less than nine and not more than ten members appointed by the Governor-General, of whom not less than four or (if ten members are appointed) five shall be nominated by the Minister on the ground mainly of their acquaintance with and wide knowledge of the affairs of the council, and for each member (other than the member designated as chairman of the board) there shall be an alternate appointed in the same manner as such member.

Act No. 19  
of 1954.  
Constitution  
of board.

(2) The Governor-General shall designate one of the members of the board to be chairman of the board.

(3) The name of every person appointed as a member or as an alternate to a member of the board shall be made known in the *Gazette*.

4. (1) A member or an alternate to a member of the board shall be appointed for such a period as the Governor-General may in each case determine, and shall be eligible for re-appointment on the termination of any period for which he has been appointed.

Tenure of  
office of  
members of  
board.

(2) A member or an alternate to a member of the board shall vacate his office—

- (a) if he resigns or dies or the board is abolished in terms of section *thirty-one*;
- (b) if his estate is sequestrated or a notice with reference to him is published under sub-section (1) of section *ten* of the Farmers' Assistance Act, 1935 (Act No. 48 of 1935);
- (c) if he becomes of unsound mind or is convicted of an offence under section *eight* or is convicted of any other offence and sentenced to imprisonment without the option of a fine; or
- (d) in the case of a member, if he has absented himself from three consecutive meetings of the board without its leave which shall not be granted for a period exceeding six months in any period of twelve months.

(3) A member or an alternate to a member of the board may at any time be removed from his office by the Governor-General.

5. (1) The first meeting of the board shall be held at a time and place to be determined by the Minister, and all subsequent meetings shall, subject to the provisions of sub-section (2), be held monthly at such times and places as the board or the chairman of the board, if authorized thereto by it, may determine.

Meetings of  
the board.

(2) The chairman of the board may at any time call a special meeting of the board, and shall call such a meeting within fourteen days after receipt of a written request, signed by not less than four members of the board, desiring such a meeting to be called.

(3) Five members of the board shall form a quorum for a meeting of the board.



(4) The chairman of the board shall preside at all meetings thereof at which he is present, and if he is absent from any meeting the members present thereat may elect one of their number to preside at such meeting.

Act No. 19  
of 1954.

(5) The decision of a majority of the members of the board present at any meeting thereof shall be deemed to be the decision of the board: Provided that in the event of an equality of votes on any matter before a meeting of the board, the person presiding at such meeting shall have a casting vote in addition to his deliberative vote.

(6) A member or an alternate to a member of the board shall not be present at or take part in the discussion of or vote upon any matter before the board, or any committee thereof, in which he or his spouse, or his partner or employer, or the partner or employer of his spouse, has, directly or indirectly, any pecuniary interest.

6. (1) There shall be payable to a member or an alternate to a member of the board who is not in the full-time employment of the State, such remuneration and allowances in respect of his services as the Minister may in consultation with the Minister of Finance, determine.

Remuneration  
and allowances  
of members of  
board.

(2) A member or an alternate to a member of the board who is in the full-time employment of the State, may receive such remuneration, in addition to his salary and allowances in respect of such employment, as may be determined subject to the laws governing the public service.

(3) Any remuneration or allowances which may become payable under this section shall be paid out of the funds of the board.

(4) The board shall refund to the Department of Native Affairs for the benefit of the Consolidated Revenue Fund any amount paid out of public funds by way of transport or subsistence allowance to a member or an alternate to a member of the board whilst engaged in connection with the business of the board, including any such business entrusted to the executive committee appointed under section *seven* or any committee appointed under paragraph (b) of sub-section (1) of section *twelve*.

7. (1) The board shall appoint an executive committee consisting of the chairman of the board and two other members, of whom one shall be a member appointed on nomination by the Minister on the ground mainly of his acquaintance with and wide knowledge of the affairs of the council, and one shall be a member not so appointed.

Appointment  
and powers  
of executive  
committee.

(2) The chairman of the board shall be the chairman of the executive committee.

(3) The executive committee may, subject to the directions of the board, exercise all the powers and perform all the functions of the board between meetings of the board, but shall not have power, save in so far as the board otherwise directs, to set aside or vary any decision of the board, and any action taken or



decision made by the executive committee shall be subject to review at the first ensuing meeting of the board.

Act No. 19  
of 1954.

(4) The executive committee shall meet at such times and places as the chairman of the board may direct.

8. (1) A member or an alternate to a member of the board who directly or indirectly receives any fee or reward from any person in connection with any matter whatsoever dealt with by the board, shall be guilty of an offence and liable on conviction to imprisonment for a period not exceeding one year.

Prohibition  
on receiving of  
fees or rewards  
and preservation  
of secrecy.

(2) A member or an alternate to a member of the board, or any officer or other person in its service, who discloses, except with the consent of the board or in the performance of his duties or as a witness in a court of law, any information acquired by him in the course of his duties, shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine not exceeding fifty pounds.

9. (1) The work incidental to the performance by the board of its functions shall be performed at its expense and under its directions and control by—

Staff of board.

- (a) officers in the public service who may on the recommendation of the Public Service Commission be seconded to the service of the board;
- (b) officers in the service of the council who may by arrangement with the council be seconded to the service of the board; and
- (c) such other persons as may be appointed by the board on such terms and conditions as may be approved by the Minister in consultation with the Minister of Finance.

(2) Any person appointed under paragraph (c) of sub-section (1) shall, except in so far as it is otherwise provided in the terms and conditions of his appointment, be subject to the conditions of employment applicable to temporary employees of the council, as if he were such a temporary employee, and for that purpose any reference to the council in any staff regulations or resolutions of the council or in any agreement or award which is in operation under the Industrial Conciliation Act, 1937 (Act No. 36 of 1937), or any other law, and which relates to the conditions of employment of employees of the council, shall be construed as a reference to the board, and any reference therein to any officer of the council in whom any powers are vested either in terms of any such staff regulations or resolutions or for the purpose of any such agreement or award, shall be deemed to be a reference to an officer or employee of the board designated by it or under its authority.

(3) The Minister shall designate one of the officers so seconded from the public service as secretary to the board and such officer shall be the chief administrative officer of the board.

(4) Any officer seconded to the service of the board under this section shall in all respects remain subject to the laws

governing the public service or the service of the council, as the case may be, and for that purpose—

Act No. 19  
of 1954.

- (a) the chief administrative officer of the board shall, in relation to any officer in the public service, be deemed to be the head of the department in which such officer is employed;
  - (b) the provisions of sub-section (2) shall *mutatis mutandis* apply in relation to any officer in the service of the council so seconded to the service of the board.
- (5) Any officer in the public service who has been seconded to the service of the board may receive such remuneration, in addition to his salary and allowances as such an officer, as may be determined subject to the laws governing the public service.
- (6) Any reference in sub-section (2) or (4) to an officer of the board shall be deemed to include a reference to any officer seconded under paragraph (a) or (b) of sub-section (1) to the service of the board.

10. (1) The funds of the board shall consist of—

Funds and assets  
of board.

- (a) any loans granted to the board on such conditions as the Minister of Finance may determine, out of moneys appropriated by Parliament for the purpose;
  - (b) moneys derived from the sale or lease of land or premises by the board;
  - (c) any amounts which may become payable to the board under this Act or any regulations made under section *thirty-three*;
  - (d) any amounts obtained from any other source.
- (2) The council shall pay to the board out of its native services levy fund referred to in section *nineteen* of the Natives (Urban Areas) Consolidation Act, 1945 (Act No. 25 of 1945), such amounts as the Minister may from time to time after consultation with the Native Services Levy Committee appointed under section *seven* of the Native Services Levy Act, 1952 (Act No. 64 of 1952), direct, and any such amounts shall be used by the board exclusively for the purposes set out in sub-section (3)*bis* of the said section *nineteen*.
- (3) Any assets (including any land) or rights acquired and any liabilities or obligations incurred by the Government of the Union prior to the commencement of this Act, for a purpose connected with the object for which the board is established, shall, save as may be otherwise determined by the Minister after consultation with the Minister of Finance, and subject to such conditions as may be so determined, be deemed to have been acquired or incurred by the board, and any amount paid by the Minister before such commencement in connection with such a purpose, shall be deemed to be a loan granted to the board under paragraph (a) of sub-section (1) subject to conditions to be determined by the Minister of Finance.
- (4) Notwithstanding the provisions of section *sixteen* of the Deeds Registries Act, 1937 (Act No. 47 of 1937), the transfer

to the board of any land referred to in sub-section (3) may be effected by endorsement on the title deed on application to the officer in charge of the deeds registry concerned, and such endorsement shall for all purposes be sufficient evidence of the fact that the ownership in the land in question is vested in the board.

Act No. 19  
of 1954.

(5) The board shall cause full and correct account to be kept of all amounts received or expended by it.

(6) Any moneys in the possession of the board which are not required for immediate use, shall, subject to the provisions of sub-section (7), be invested by it with the Public Debt Commissioners or in such other manner as the Minister may in consultation with the Minister of Finance determine.

(7) The board may from time to time pay to the Consolidated Revenue Fund, such amounts from funds standing to its credit as may in each case be approved by the Minister in consultation with the Minister of Finance.

11. The books and statements of account and balance sheet of the board shall be audited annually by the Controller and Auditor-General. Auditing of accounts.

12. (1) The object for which the board is established is to effect the removal from specified areas of natives residing in those areas and to provide for the settlement elsewhere of such natives, and to that end the board shall, in addition to any other powers vested in it by this Act, have power— Object and general powers of board.

(a) with the approval of the Minister, and subject to such conditions as he may in consultation with the Minister of Finance determine, to acquire or hire such property and to appoint such servants as it may consider necessary for the effective performance of its functions;

(b) to appoint from amongst its members one or more committees and to vest in a committee so appointed such of its powers as it may deem fit: Provided that the vesting of any powers in any such committee shall not have the effect of divesting the board or the executive committee referred to in section *seven* of those powers, and that any action taken or decision made by any such committee shall be subject to review at the first ensuing meeting of the board, and, where a meeting of the executive committee takes place before such a meeting of the board, also at that meeting of the executive committee;

(c) with the approval of the Minister and subject to such conditions as he may, in consultation with the Minister of Finance, determine either generally or in any particular case—

(i) to acquire by purchase, exchange, expropriation or otherwise such land as the board may consider necessary for the attainment of the object for which it is established;

to the board of any land referred to in sub-section (3) may be effected by endorsement on the title deed on application to the officer in charge of the deeds registry concerned, and such endorsement shall for all purposes be sufficient evidence of the fact that the ownership in the land in question is vested in the board.

Act No. 19  
of 1954.

(5) The board shall cause full and correct account to be kept of all amounts received or expended by it.

(6) Any moneys in the possession of the board which are not required for immediate use, shall, subject to the provisions of sub-section (7), be invested by it with the Public Debt Commissioners or in such other manner as the Minister may in consultation with the Minister of Finance determine.

(7) The board may from time to time pay to the Consolidated Revenue Fund, such amounts from funds standing to its credit as may in each case be approved by the Minister in consultation with the Minister of Finance.

11. The books and statements of account and balance sheet of the board shall be audited annually by the Controller and Auditor-General. Auditing of accounts.

12. (1) The object for which the board is established is to effect the removal from specified areas of natives residing in those areas and to provide for the settlement elsewhere of such natives, and to that end the board shall, in addition to any other powers vested in it by this Act, have power— Object and general powers of board.

- (a) with the approval of the Minister, and subject to such conditions as he may in consultation with the Minister of Finance determine, to acquire or hire such property and to appoint such servants as it may consider necessary for the effective performance of its functions;
- (b) to appoint from amongst its members one or more committees and to vest in a committee so appointed such of its powers as it may deem fit: Provided that the vesting of any powers in any such committee shall not have the effect of divesting the board or the executive committee referred to in section seven of those powers, and that any action taken or decision made by any such committee shall be subject to review at the first ensuing meeting of the board, and, where a meeting of the executive committee takes place before such a meeting of the board, also at that meeting of the executive committee;
- (c) with the approval of the Minister and subject to such conditions as he may, in consultation with the Minister of Finance, determine either generally or in any particular case—
  - (i) to acquire by purchase, exchange, expropriation or otherwise such land as the board may consider necessary for the attainment of the object for which it is established;

- 
- Act No. 19  
of 1954.
- (ii) to develop any land belonging to the board and to provide services and amenities in any specified area or any area to which natives are or are intended to be removed;
  - (iii) to sell, let, hypothecate or otherwise dispose of or encumber any land belonging to the board or to exchange it for other land or to donate it for any purpose or to deal therewith in any other manner as the board may deem fit;
- (d) with the approval of the Minister, given after consultation with the Administrator and the council, to require the council, with due regard to the provisions of the Townships and Town Planning Ordinance, 1931 (Ordinance No. 11 of 1931), of the Transvaal, and the directions of the board—
- (i) to sub-divide, lay out, plan and develop any specified area or any portion thereof;
  - (ii) to cause surveys, plans, sections, maps, diagrams or drawings to be made in respect thereof;
  - (iii) to reserve or set aside any portion thereof for streets, open spaces or other public purposes;
  - (iv) to construct roads, streets, thoroughfares, bridges, subways, drains, sewers, aqueducts, conduits, water and other mains, power lines and such other works, including buildings, on or over such areas as the board may consider necessary;
- (e) with the approval of the Minister, given after consultation with the Administrator and the council, and with due regard to the provisions of the said Ordinance, to do any act or perform any function in relation to any specified area or any area to which natives are or are intended to be removed under this Act, which in terms of paragraph (d) the board is empowered to require the council to do or perform in relation to any specified area or any portion thereof;
- (f) with the approval of the Minister, and subject to such conditions as he may in consultation with the Minister of Finance, determine—
- (i) to build houses or other structures on land belonging to the board elsewhere than in a specified area, and to grant leases over such land or houses or to dispose of the right of occupation of such houses to natives removed from such an area;
  - (ii) to make available any such land for lease by such natives for the purpose of enabling them, subject to the approval of the board and on such conditions as it may deem fit, to provide for their own housing requirements;
-

(iii) to grant loans or advance money or make available materials for any purpose which in the opinion of the board will contribute towards the attainment of the object for which the board is established;

Act No. 19  
of 1954.

(g) with due regard to any relevant agreements between the Union Government and the council which are in existence at the date of commencement of this Act, to enter into contracts with the Union Government, including the South African Railways Administration and the Provincial Administration of the Transvaal, the council or any other body or person for the performance of any act which the board is empowered to perform; and

(h) generally to do all such things as in the opinion of the board are necessary for or incidental to the attainment of the object for which the board is established.

(2) The board shall keep a register of all immovable property acquired by or vested in the board, reflecting the descriptions of such property, the dates and costs of acquisition thereof, details of any consolidations, subdivisions or disposals and such other particulars as may be deemed necessary.

(3) Save as provided in paragraphs (d) and (e) of sub-section (1), the board shall not be required to comply with the provisions of the Proclamation of Townships Ordinance, 1905, or the Townships Act, 1907, or the Townships Amendment Act, 1908, or the Townships and Town Planning Ordinance, 1931, of the Transvaal, or of any other law relating to townships or town planning.

13. (1) The board shall have the right, after notice to the council—

Assistance and facilities to be afforded to board by council.

(a) to connect any drain, sewer, conduit, water or other main or power line on land belonging to the board, to any drain, sewer, conduit, water or other main or power line in the vicinity of such land which is under the control of the council;

(b) to connect any road, street or thoroughfare on such land to any road, street or thoroughfare controlled by the council,

in so far as may be reasonably practicable and necessary for the purpose of providing essential services on land belonging to the board or ensuring convenient entrance to or exit from such land, and may for the purpose of paragraph (a) require the council or its servants to furnish any assistance or information which the board may consider necessary for the effective exercise of its powers under that paragraph.

(2) The council shall in so far as may be reasonably practicable supply water and electricity from and receive water or sewerage at any connection made under sub-section (1) in the same manner and on the same conditions as if the services in question were

provided in respect of land within the jurisdiction of the council: Provided that any charges made in respect of such services shall not exceed the charges for similar services in respect of a location or native village defined and set apart by the council under section *two* of the Natives (Urban Areas) Consolidation Act, 1945 (Act No. 25 of 1945).

Act No. 19  
of 1954.

14. (1) The board shall from time to time, but not less than once in every year, submit to the Minister reports on its activities, and the Minister shall lay copies of all such reports on the Tables of both Houses of Parliament within fourteen days after receipt thereof if Parliament is then in ordinary session or if Parliament is not then in ordinary session, within fourteen days after the commencement of its next ensuing ordinary session.

Reports by  
board.

(2) The Minister shall forward to the Administrator and the council copies of all reports submitted to him in terms of sub-section (1).

15. (1) Notwithstanding anything to the contrary in any other law contained, the Governor-General may on the recommendation of the Minister by proclamation in the *Gazette* direct that any restrictive condition affecting the use or occupation of land belonging to or to be acquired by the board shall be suspended for such period or shall lapse or shall be modified in such manner and to such extent as may be specified in that direction.

Extinction or  
modification of  
any restrictions  
on land.

(2) No recommendation shall be made by the Minister under sub-section (1) except after not less than one month's prior notice to every person who in his opinion is likely to be affected thereby.

(3) The provisions of sub-sections (2), (3) and (4) of section *seventeen* shall *mutatis mutandis* apply in connection with any notice required to be given under sub-section (2) of this section.

16. Notwithstanding anything to the contrary in any other law contained, the board may, with the written approval of the Minister, expropriate any land situate in any specified area or elsewhere as the board may consider necessary in order to achieve the object for which the board is established: Provided that land which, in terms of any law relating to mining, is or is deemed to be proclaimed land or which forms part of any such land, or upon which prospecting, digging or mining operations are being carried on, or on which there are reasonable grounds for believing that minerals exist in workable quantities, shall not be expropriated except after consultation with the Minister of Mines: Provided further that the Minister shall not approve of the expropriation of any land unless he is satisfied that the board is unable to purchase such land on reasonable terms and (in the case of land outside a specified area) that no other suitable land is available to the board and that the board is unable to purchase other suitable land on reasonable terms.

Expropriation  
of land.

17. (1) Upon receipt of the written approval of the Minister to expropriate any land, the board shall serve or cause to be served on the owner a notice in the manner prescribed in sub-

Procedure on  
expropriation.

section (2) setting forth clearly and fully a description of the land and inviting the owner to state the amount claimed by him for the land: Provided that it shall not be necessary for the board to serve any notice on any person who is not to the knowledge of the board, the owner of the land to be expropriated.

Act No. 19  
of 1954.

(2) The notice referred to in sub-section (1) shall be served—

- (a) by delivery of the notice to the owner personally; or
- (b) by leaving the notice with some adult inmate of his place of residence; or
- (c) by despatching the notice by registered post in an envelope addressed to his last known address; or
- (d) if service cannot be effected as provided in paragraph (a), (b) or (c), by publication in both official languages of the Union in three consecutive ordinary issues of the *Gazette* and once a week during three consecutive weeks in a newspaper circulating in the magisterial district in which the land is situate.

(3) It shall not be necessary in any notice under sub-section (1) to name the owner, but the notice if it does not name him shall describe him as the owner in respect of the land in question.

(4) A notice under sub-section (1), which has been served as provided in sub-sections (2) and (3), shall be deemed to have been duly served, and the date of service of a notice under paragraph (d) of sub-section (2) shall be the date of the first publication thereof.

(5) A notice to expropriate shall be served within thirty days after receipt of the approval by the Minister and if not served within that time, such approval shall lapse unless the Minister has agreed in writing to the extension thereof.

(6) Upon the service of any such notice the ownership in the land described in the notice shall pass to the board free of all encumbrances and the board may, after expiry of a period of not less than thirty days from the date of such service, take possession of and use the land.

18. (1) Whenever any land has been expropriated under section *seventeen*, the board shall forthwith—

Duties of  
registrar of  
deeds on  
expropriation.

- (a) transmit to the registrar of deeds a certified copy of the notice by which the expropriation has taken place; and
- (b) transmit to every holder of a bond registered over such land, whose name and address are known to it, a copy of such notice.

(2) Upon receipt of the copy referred to in sub-section (1) the registrar of deeds shall—

- (a) record thereon the time and date of such receipt; and



- (b) note in the appropriate records that the land in question has been expropriated. **Act No. 19 of 1954.**
- (3) A mortgagee to whom a copy of a notice of expropriation has been transmitted shall within fourteen days of the date of receipt thereof, transmit to the board—
- (a) a statement in writing setting forth the amounts received by him in payment of the debt secured by the bond and particulars of the amount still owing thereunder; and
- (b) the bond of which he is the holder and any document of title relating to the land which may be in his possession or under his control.
- (4) (a) Every owner on whom a notice has been served under section *seventeen* shall, within thirty days after the date of expropriation, or within such further period as the board may allow, deliver or cause to be delivered to the board—
- (i) a statement in writing setting forth the amount of compensation, if any, claimed by him;
- (ii) his documents of title to the land if these are in his possession or under his control;
- (iii) a list signed by him of the said documents if these are not in his possession or under his control, setting forth the registration numbers and dates thereof and the name and address of the person in whose possession or under whose control those documents are and the registration numbers and dates of mortgage bonds, if any, on the land and the names and addresses of the holders thereof.
- (b) The board may by notice in writing call upon any person named in any list delivered to it under subparagraph (iii) of paragraph (a), to deliver or cause to be delivered to the board, within a period specified in the notice, the documents referred to in that subparagraph.
- 19.** (1) If the owner of land and the board do not, within a period of sixty days from the date of expropriation of such land, or within such further period as the board may allow, come to an agreement as to the amount of compensation to be paid for the land, such amount shall subject to the provisions of section *twenty*, be determined by two arbitrators, one of whom shall be appointed by the board and the other by the owner or (if he is absent from the Union or his whereabouts cannot be readily ascertained or he fails to nominate any person or to advise the board of the name and address of the person nominated by him within fourteen days after having been required in writing by the board to make a nomination) by the Minister. **Appointment of arbitrators and referees.**
- (2) The arbitrators shall before taking any steps in connection with the arbitration appoint a suitable person as a referee in case the arbitrators do not agree, and the decision of such

referee shall be final and if the arbitrators fail to appoint or are unable to agree upon the appointment of a person as a referee, the Minister shall appoint a suitable person as a referee, whose decision shall be final.

Act No. 19  
of 1954.

(3) The costs, calculated in accordance with the table of costs in magistrates' courts, in connection with any determination of compensation in terms of this section, shall, in the absence of agreement between the parties, be paid as directed by the arbitrators or if the arbitrators are unable to agree, as directed by the referee, whose decision shall be final.

20. (1) Whenever the Minister approves of the expropriation of land, the compensation payable therefor shall not exceed, in the case of land situate within the area of jurisdiction of the council, the lesser amount of either—

Basis for  
determination  
of amount of  
compensation.

- (a) subject to the provisions of sub-section (5), the maximum amount which would have been payable in terms of Chapter III of the Slums Act, 1934 (Act No. 53 of 1934), if the expropriation had taken place under that Act; or
- (b) subject to the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) an amount determined by one or other of the following methods, whichever is appropriate, namely—
  - (i) in the case of land acquired by the owner by purchase, by adding to the purchase price an amount calculated at the rate of six per cent. per annum on that price for the period from the date of acquisition of the land by the owner to the date of expropriation; or
  - (ii) in the case of land acquired by the owner otherwise than by purchase, by adding to the purchase price paid by the last previous owner who acquired it by purchase, an amount calculated at the rate of six per cent. per annum on that price for the period from the date of acquisition by such last previous owner to the date of expropriation.

(2) If any land expropriated under this Act forms part of a larger area of land acquired by the owner or the last previous owner, as the case may be, the amount payable as compensation shall be an amount which bears the same ratio to an amount determined in accordance with the applicable sub-paragraph of paragraph (b) of sub-section (1), as the assessed value of such expropriated land bears to the assessed value of such larger area of land.

(3) Whenever the purchase price paid in respect of any land by any person cannot be readily ascertained, that price shall for the purpose of paragraph (b) of sub-section (1) be deemed to be the assessed value of that land at the date of purchase thereof.

(4) In the event of improvements having been made to land since the date of acquisition thereof by the owner or the last

previous owner, as the case may be, there shall be added to the compensation as determined under paragraph (b) of sub-section (1)—

Act No. 19  
of 1954.

- (a) an amount equal to the actual cost of such improvements plus an amount calculated at the rate of six per cent. per annum on such cost from the date on which the improvements were completed to the date of expropriation, less a reasonable amount in respect of depreciation; or
- (b) where such actual cost or the date of completion of such improvements cannot be readily ascertained, an amount equal to the assessed value of the improvements.

(5) Where a goodwill value, which is likely to be lost on account of the expropriation of any land, is attached to any profession or business being conducted on that land, there shall be added to the compensation determined under paragraph (a) or (b) of sub-section (1), an amount equivalent to the assessed value of such goodwill, but not exceeding the net profit derived from such profession or business during the immediately preceding period of twelve months, or, where such profession or business has been carried on for less than twelve months, an amount equivalent to twelve times the average net profit per month during the period such profession or business has actually been conducted on such land.

(6) If the Minister is of opinion that the owner of the land expropriated acquired such land at more than a normal price for speculative purposes, he may order in writing under his hand that the compensation payable therefor according to the provisions of paragraph (b) of sub-section (1) shall be calculated *mutatis mutandis* according to the said provisions on the basis of a lesser amount for which another named person or the predecessor of the said owner, acquired that land within a period not exceeding three years prior to the expropriation.

(7) In the event of the land expropriated not being situated within the area of jurisdiction of the council, the compensation payable therefor shall not exceed an amount calculated according to the provisions of paragraph (b) of sub-section (1).

(8) For the purposes of this section—

- (a) any transfer duty, transfer or survey fees paid in connection with the acquisition of land shall be deemed to form part of the price at which that land was acquired; and
- (b) the expression "assessed value" means the value assessed by the arbitrators appointed under sub-section (1) of section *nineteen* or (where they fail to agree) by the referee appointed under sub-section (2) of that section.

21. Any compensation for land expropriated shall be paid to the owner of such land, if his address is known, or, if his address is not known, to the master of the supreme court for deposit in the guardian's fund: Provided that where the land is mortgaged, the compensation may be applied as far as may be

Payment of  
compensation.

required towards the payment of the claims of mortgagees in their legal order of preference provided such mortgagees have complied with the provisions of section *eighteen*: Provided further that in the event of the said land having been sold prior to expropriation to a person who adduces proof that he has paid the purchase price either in full or in part, the full amount of the compensation payable in respect of such land, less any amount still due to the seller in respect of the purchase price, may be paid to the purchaser, whether or not he has taken transfer of the land.

Act No. 19  
of 1954.

22. (1) The registrar of deeds shall, subject to the provisions of section *thirty-one* of the Deeds Registries Act, 1937 (Act No. 47 of 1937)—

Registration  
of transfer  
of land.

- (a) register the transfer to the board of any land expropriated by it;
- (b) at the same time note in his register the suspension, lapsing or modification of any restrictive condition upon the use or occupation of such land which may have been suspended or modified or may have lapsed by virtue of any proclamation issued under section *fifteen*;
- (c) if such land is subject to any bond, endorse upon the bond that the land is released therefrom.

(2) The board shall have the right to appoint a conveyancer to act for it in connection with the transfer of land acquired by it and shall be responsible for the costs of transfer.

(3) Notwithstanding anything to the contrary in any other law contained, the registrar of deeds may, on being satisfied that the title deeds of any land have been lost or destroyed, register the transfer to the board of such land without the production thereof or the authority of any order of court.

(4) No transfer of land which has been expropriated under this Act shall be registered unless the registrar of deeds has been furnished with a certificate signed on behalf of the board that—

- (a) the procedure prescribed in section *seventeen* has been observed; and
- (b) all amounts payable by the board on the transaction have been paid or guaranteed.

23. (1) If within three months after the date on which any land registered in the name of a native is acquired by the board under this Act, that native in writing advises the Minister that he desires to acquire ownership in other land, the South African Native Trust (hereinafter referred to as the Trust) shall, notwithstanding anything contained in the Native Trust and Land Act, 1936 (Act No. 18 of 1936), but subject to the provisions of sub-sections (2) and (3)—

Land to be made  
available to  
natives in lieu  
of land acquired by  
board.

- (a) make available for purchase by that native such land belonging to the Trust as it may determine and afford him such assistance as it may deem fit in connection with the purchase of such land; or

(b) if the Trust is unable to make available such land or to reach agreement with the native concerned as to the purchase price or the other conditions of sale of any such land which the Trust is able to make available, afford that native such assistance as it may deem fit in connection with the purchase of any land (not being land belonging to the Trust) in a released area as defined in the said Act which that native may be able to acquire.

Act No. 19  
of 1954.

(2) No assistance shall be granted to any native under sub-section (1) except in accordance with and subject to the provisions of the aforesaid Act.

(3) Any land made available under sub-section (1) shall either be land comprising an economic agricultural unit or land in a village or settlement established by the Trust, and the conditions of title to any such land shall conform to the conditions generally applicable in relation to land of the same class as that made available in the area in which such land is situated.

24. (1) No rates shall be levied upon any land or premises owned by the board so long as such land or premises have not been leased or sold to any person by the board.

Exemption from rates in respect of land belonging to the board.

(2) Whenever any such land or premises have been leased or sold by the board, it shall become rateable as from the date of the lease or sale as if it had been transferred on that date to the person to whom it has been leased or sold and rates thereon shall as from that date become payable by that person.

(3) In respect of the year in which any land or premises is leased or sold as aforesaid, rates on that land or premises may be levied on the same basis as that on which rates on other land or premises within the same area are levied for that year, and the person to whom the land or premises is so leased or sold shall in respect of that year pay such a portion of the rates thereon as is represented by the proportion which the unexpired portion of the year as from the date of the lease or sale bears to the whole year.

25. The board may, by notice in writing addressed or delivered to any native residing in a specified area, or posted up at or near the main entrance to the premises occupied by him, require that native to vacate the premises in which he resides, together with the members of his household, and to remove all property belonging to him or any member of his household from those premises, within a period stated in the notice, but ending not earlier than the last day of the month following that during which such notice is given: Provided that no native entitled to reside in the area under the jurisdiction of the council shall be required to vacate any premises, unless—

Notice to vacate premises in specified area.

- (a) in the case of a native residing in the township of Sophiatown, Martindale, Newclare or Pageview as described in the Schedule to this Act, a house or other place of residence for himself and his household or (if he so elects) a right to occupy land on which he may provide for the housing needs of himself and his household; or
- (b) in the case of a native who, except for the members of his household, is the sole occupant (otherwise than as a lessee under a sub-lease) of a house which is situated elsewhere than in any of the said townships and has been approved under the bye-laws or regulations of the local authority in whose area it is situated, a house or other place of residence for himself and his household or (if he so elects) a right to occupy land on which he may provide for the housing needs of himself and his household; or
- (c) in the case of any other native, a right to occupy land as aforesaid or a place of residence,
- is offered to him by the board and specified in the notice requiring him to vacate any such premises.

Act No. 19  
of 1954.

26. (1) Whenever it is proved to the satisfaction of a magistrate by means of affidavits placed before him that any native or any member of his household, has failed to vacate any premises in accordance with the requirements of a notice under section *twenty-five*, that magistrate may, after consultation with the chairman of the board and the chairman of the non-European affairs committee of the council, if such consultation is considered necessary by that magistrate, issue such orders and give such instructions and confer such authority as he may deem necessary—

Procedure on  
failure to  
vacate premises.

- (a) to effect the immediate removal of such native or member of his household from those premises;
- (b) to effect the transfer of such native or member of his household to the house, place of residence or land offered by the board and specified in such notice;
- (c) to ensure the demolition and removal from such premises of all buildings and structures which may have been erected thereon, and of any property belonging to that native or any member of his household in so far as the demolition or removal thereof may be considered necessary:

Provided that—

- (i) before the magistrate issues any order as aforesaid, he shall be satisfied on affidavit that a notice of the intention to apply for such an order, and of the time and place at which the application will be made, in both official languages of the Union and in a native language commonly used by natives in the specified area in question has, not less than three days prior to the making of the application been served on the person concerned or where such service cannot be effected,

has been posted up in a prominent place on the said premises;

Act No. 19  
of 1954.

- (ii) such person shall be entitled to appear or to be suitably represented before such magistrate by an advocate or attorney and to reply either orally or by affidavit or through his representative to the allegations set out in the said affidavits.

(2) Any member of the police force or any officer in the service of the council or any officer or person in the service of the board may take any steps which may be necessary for carrying out any instruction given to him or in connection with the exercise of any authority conferred upon him under sub-section (1), and no action shall lie in respect of any loss or damage which may be sustained in consequence of the *bona fide* carrying out of any such instruction or exercise of any such authority.

(3) Any expenditure incurred by the board in giving effect to the provisions of paragraph (a), (b) or (c) of sub-section (1) shall be met from the funds of the board.

27. (1) The chairman of the board may appoint in writing any member of the board or any officer referred to in section *nine* as an inspector who may at all reasonable times in furtherance of the object for which the board is established—

Appointment  
and duties  
of inspectors.

- (a) enter upon any premises in a specified area;
- (b) question any person found in or upon any such premises;
- (c) inspect the title deeds, books or other records of any person which relate in any way to the ownership or occupation of or residence on land or premises in a specified area, and make extracts from such title deeds, books or other records;
- (d) call upon any person to furnish any information at his disposal relating to the ownership or occupation of or residence on such land or premises.

(2) Any inspector referred to in sub-section (1) may be accompanied by an interpreter or other assistant in the performance of his functions under that sub-section.

(3) An interpreter or assistant shall, while acting under the lawful directions of any inspector referred to in sub-section (1) whom he accompanies, be deemed to be an inspector, and any question put through, reply made to, requirement made by or obstructing or hindering of or interference with an interpreter or assistant while so acting, shall be deemed to be a question put by, reply made to, requirement made by, obstruction or hindering of or interference with an inspector.

28. (1) The board may with the approval of the Minister, and subject to such conditions as may be determined by him in consultation with the Minister of Finance and the council, on

Transfer of  
land to  
council.



not less than three months' notice in writing given to the council, transfer any land owned by the board together with any improvements thereon, to the council which shall be bound to accept transfer thereof and shall, subject to such terms and conditions as may be determined by the Minister in consultation with the Minister of Finance and the council, pay to the Department of Native Affairs for the benefit of the Consolidated Revenue Fund the cost of such land and improvements together with any interest or other charges, including any expenses incurred in connection with the removal of natives to such land, and such proportion of all direct and indirect expenditure incurred by the board up to the date of such notice as may, in relation to such land and improvements, be deemed by the Minister, after consultation with the Minister of Finance and the council, to be reasonable: Provided that in the determination of any amount payable by the council under this sub-section due regard shall be had to any income derived by the board from the land and improvements in connection with the transfer of which such amount is payable.

Act No. 19  
of 1954.

(2) The council shall within one month of the date of the notice referred to in sub-section (1) apply for the Minister's approval to the defining and setting apart as a location, native village or native hostel in terms of section *two* of the Natives (Urban Areas) Consolidation Act, 1945 (Act No. 25 of 1945), of any land to be transferred to the council for any such purpose, if such land has not already been so defined and set apart, and shall, upon receipt of such approval, forthwith proceed to define and set apart the said land accordingly.

(3) The provisions of sub-section (2) of section *twenty-nine* shall *mutatis mutandis* apply in respect of the recovery of any amount which may by virtue of the provisions of sub-section (1) of this section become payable by the council.

29. (1) If the council neglects to perform any act which by or under the provisions of this Act it is empowered or required to perform, or performs any such act in such a manner that, in the opinion of the board, effect is not given to the object for which the board is established, the board shall report accordingly to the Minister who may, after consultation with the Administrator, and subject to such conditions as the Minister may determine, require the council, by written notice given through the Administrator, to perform such act, or to perform such act in accordance with the directions set forth in such notice, within a period to be specified in such notice, and if the council fails to comply with such notice to the satisfaction of the Minister, he may, after consultation with the Administrator and after written notice to the council, direct the board to perform such act and do all such things as may be necessary to give effect to

Powers of  
Minister.



such notice, and the board shall for that purpose have all the rights and powers which the council may have in connection with the performance of such act.

Act No. 19  
of 1954.

(2) Should the council fail within the period fixed in any notice given under sub-section (1), or within any extension of that period granted by the Minister after consultation with the Administrator, to comply with any requirement specified in that notice, the board may, after written notice to the council, recover the costs incurred by the board in performing any act or doing anything in accordance with a direction of the Minister given under sub-section (1)—

- (a) by action in a competent court against the council; or
- (b) by levying a special rate upon all rateable property within the area under the jurisdiction of the council; or
- (c) by deduction from any subsidy, grant or other moneys payable out of the Consolidated Revenue Fund or payable by the Administrator to the council,

or by all three or any two of such methods for recovery, and a certificate by the board as to the amount of such costs shall be *prima facie* proof of that amount.

30. The Governor-General may, if he deems it expedient, after reference to the Administrator and the urban local authority concerned, by proclamation in the *Gazette* and as from a date to be specified in such proclamation, designate the board as an urban local authority for the purpose of the application, within one or more specified areas, or within any area belonging to the board and specified in the proclamation, of such provisions of the Natives (Urban Areas) Consolidation Act, 1945 (Act No. 25 of 1945), as may be so specified, and thereupon in respect of the provisions and the area or areas so specified, the board shall be vested and charged with all the powers, duties and functions of an urban local authority under that Act to the exclusion of any other urban local authority or any other body designated for the purpose in terms of section *thirty-nine* of the said Act.

Designation  
of board as  
urban local  
authority.

31. (1) Whenever the Governor-General is satisfied that the board has achieved the object for which it was established, he may by proclamation in the *Gazette* declare that the board shall be abolished with effect from a date to be specified in the proclamation.

Abolition  
of board.

(2) As from the date specified in any proclamation issued under sub-section (1) all the powers, duties, assets and rights of the board shall vest in the Minister and all the liabilities and obligations of the board shall devolve upon the Minister, and any reference in any law or document to the board shall be deemed to be a reference to the Minister.

(3) The registrar of deeds shall cause all such notes and endorsements to be made in his registers and on the title deeds of any land owned by the board as may be necessary to give effect to the provisions of this section.

**32.** Any rights or assets acquired or liabilities or obligations, including any expenditure, incurred by the council prior to the commencement of this Act, for any purpose connected with the object for which the board is established, shall be deemed to have been duly acquired or incurred by the council in the exercise of powers vested in it by law.

**Act No. 19  
of 1954.**

Validation  
of certain  
actions of  
council.

**33.** (1) The Minister may make regulations, not inconsistent with this Act, as to—

Regulations.

- (a) the regulation and control of land owned by the board, the planning or replanning and laying out of any such land, the reservation or setting aside of any such land by the board for streets, open spaces or other public purposes or any works constructed by it or under its authority and the siting, construction, erection, maintenance and control of buildings and other improvements thereon;
- (b) the vacation of land expropriated;
- (c) the powers, functions and duties of inspectors appointed under section *twenty-seven*;
- (d) the conduct of and procedure at expropriation proceedings, including the subpoenaing of witnesses and the payment of allowances to such witnesses;
- (e) the procedure relating to the calling for and acceptance of tenders for the execution of any work on behalf of the board or for the supply of any goods or materials to the board;
- (f) generally any other matter in regard to which it may be necessary to make regulations in order to ensure the effective administration of this Act.

(2) In any regulation made under this section, provision may be made for the imposition of penalties for a contravention or default in complying with the provisions thereof or with any requirements or conditions prescribed in any permit, order or other document issued thereunder.

(3) Whenever any person has been convicted under any regulation made in terms of paragraph (a) of sub-section (1), the board may order him to remove or alter any building or improvement in respect of the siting, construction, erection, maintenance or control of which he has been so convicted or cause such building or improvement to be removed or altered at his expense.

(4) Any regulation made under this section shall be laid upon the Tables of both Houses of Parliament within fourteen days after promulgation thereof if Parliament is then in ordinary session, or if Parliament is not then in ordinary session within fourteen days after the commencement of its next ensuing ordinary session, and shall, if both Houses of Parliament pass resolutions disapproving thereof or of any provision thereof during the session in which it is so laid upon the said Tables,

cease to have effect to the extent to which it is so disapproved of, on the day on which the last of such resolutions is passed. **Act No. 19 of 1954.**

- 34.** (1) Any person who—
- (a) contravenes or fails to comply with any provision of this Act or any regulation made thereunder;
  - (b) falsely holds himself out to be an inspector;
  - (c) in any statement or particulars or document which he is, in terms of this Act or any regulation framed thereunder, required to furnish, furnishes information, particulars or documents which are false in any material particular, knowing the same to be false;
  - (d) obstructs, hinders, resists or interferes with any inspector in the exercise of his powers or the performance of his functions or duties in terms of this Act or any regulation made thereunder or refuses or fails without reasonable cause to furnish any information, particulars or documents or fails to comply with any requirement made by such inspector,

Offences and penalties.

shall be guilty of an offence and liable on conviction, where no other penalty is prescribed, to a fine not exceeding fifty pounds or to imprisonment for a period not exceeding six months or to both such fine and such imprisonment.

(2) Notwithstanding anything to the contrary in any other law contained, a magistrate's court shall have jurisdiction to issue any order or instruction or to impose any penalty which may be given or imposed under this Act or any regulation made thereunder.

(3) Any fine recovered or bail estreated in respect of a contravention of this Act or any regulation made thereunder shall accrue to the board.

**35.** (1) Notwithstanding the provisions of section *eight* of the Natives (Urban Areas) Consolidation Act, 1945 (Act No. 25 of 1945), or any notice issued thereunder, the townships of Sophiatown, Martindale and Newclare, as described in the Schedule to this Act, shall not for the purposes of the said section, be regarded as areas predominantly occupied by natives.

Sophiatown, Martindale and Newclare not to be regarded as areas predominantly occupied by natives.

(2) Government notices numbers 192, 193 and 194 dated 4th February, 1949, are hereby withdrawn.

**36.** This Act shall be called the Natives Resettlement Act, 1954, and shall come into operation upon a date to be fixed by the Governor-General by proclamation in the *Gazette*.

Short title and commencement.

**Schedule.**

**DESCRIPTION OF AREAS.**

(1) The Township of Sophiatown being portion of the freehold farm Waterval No. 10, district of Johannesburg, in extent 113 morgen 383 square roods and more fully defined on the general plan of the township framed by Surveyor James B. Tucker in June, 1903, and approved by the Surveyor-General on the 4th January, 1905, under S.G. No. A. 5005/03.

(2) The Township of Martindale being portion in extent 23 morgen 337 square roods of portion marked E of the freehold farm Waterval No. 10, district of Johannesburg, and more fully defined on the general plan of the township framed by Surveyor James B. Tucker in August, 1904, and approved by the Surveyor-General on the 19th October, 1904, under S.G. No. A. 4549/04.

Act No. 19  
of 1954.

(3) The Township of Newclare being portion in extent 73 morgen 22 square roods of portion marked E of the freehold farm Waterval No. 10, district of Johannesburg, and more fully defined on the general plan of the township framed by Surveyor O. T. de Villiers in September, 1905, and approved by the Surveyor-General on the 28th August, 1912, under S.G. No. A. 1025/12.

(4) The Township of Pageview being portion 3, in extent 11 morgen 227 square roods of the freehold farm Johannesburg No. 29, district of Johannesburg, and portion 213 (a portion of portion of portion) in extent 8 morgen 510 square roods of the farm Braamfontein No. 11, district of Johannesburg, and more fully defined on the true extract of the general plan No. 626/94 approved by the Surveyor-General on the 21st April, 1894.

Act No. 20  
of 1954.

---

---

## ACT

To amend the South Africa Act, 1909.

*(Afrikaans text signed by the Governor-General.)  
(Assented to 4th June, 1954.)*

**BE IT ENACTED** by the Queen's Most Excellent Majesty, the Senate and the House of Assembly of the Union of South Africa, as follows:—

1. Section *seventy-eight* of the South Africa Act, 1909, is hereby amended by the addition at the end of sub-section (3) of the words "and a member of the executive committee shall not be disqualified from being elected as a member of the provincial council". Amendment of section 78 of the South Africa Act, 1909.

2. This Act shall be called the South Africa Act Amendment Act, 1954. Short title.

Act No. 21  
of 1954.

---

---

## ACT

To amend the Criminal Procedure and Evidence Act, 1917, the Female Jurors Act, 1931, and the General Law Amendment Act, 1949.

*(English text signed by the Governor-General.)  
(Assented to 4th June, 1954.)*

**BE IT ENACTED** by the Queen's Most Excellent Majesty, the Senate and the House of Assembly of the Union of South Africa, as follows:—

---

Please note that most Acts are published in English and another South African official language. Currently we only have capacity to publish the English versions. This means that this document will only contain even numbered pages as the other language is printed on uneven numbered pages.



REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

# GOVERNMENT GAZETTE

---

## STAATSKOERANT

VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

*Registered at the Post Office as a Newspaper*

*As 'n Nuisblad by die Poskantoor Geregistreer*

Price 10c Prys  
Overseas 15c Oorsee  
POST FREE—POSVRY

Vol. 47.]

CAPE TOWN, 21<sup>ST</sup> MAY, 1969.

[No. 2404.

KAAPSTAD, 21 MEI 1969.

DEPARTMENT OF THE PRIME MINISTER.

DEPARTEMENT VAN DIE EERSTE MINISTER.

No. 821. 21st May, 1969.

No. 821. 21 Mei 1969.

It is hereby notified that the State President has assented to the following Act which is hereby published for general information:—

Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—

No. 57 of 1969: Immorality Amendment Act, 1969.

No. 57 van 1969: Ontugwysigingswet, 1969.

## ACT

To amend the provisions of the Immorality Act, 1957, with regard to the commission of offences with girls or boys; to prohibit the manufacture, sale or supply of any article which is intended to be used to perform an unnatural sexual act; to make provision in the said Act for a prohibition on the commission at a party of acts between male persons and which are calculated to stimulate sexual passion or to give sexual gratification; and to repeal section 10 of Act No. 22 of 1898 of Natal.

*(Afrikaans text signed by the State President.)  
(Assented to 9th May, 1969.)*

**BE IT ENACTED** by the State President, the Senate and the House of Assembly of the Republic of South Africa, as follows:—

Substitution of section 14 of Act 23 of 1957.

**1.** The following section is hereby substituted for section 14 of the Immorality Act, 1957 (hereinafter referred to as the principal Act):

**14.** (1) Any male person who—  
 (a) has or attempts to have unlawful carnal intercourse with a girl under the age of sixteen years; or  
 (b) commits or attempts to commit with such a girl or with a boy under the age of nineteen years an immoral or indecent act; or  
 (c) solicits or entices such a girl or boy to the commission of an immoral or indecent act, shall be guilty of an offence.

(2) It shall be a sufficient defence to any charge under this section if it shall be made to appear to the court—

- (a) that the girl at the time of the commission of the offence was a prostitute, that the person so charged was at the said time under the age of twenty-one years and that it is the first occasion on which he is so charged; or
- (b) that the person so charged was at the said time under the age of sixteen years if the offence was committed in respect of a girl; or
- (bA) that the person so charged was at the said time under the age of nineteen years if the offence was committed in respect of a boy; or
- (c) that the girl or person in whose charge she was, deceived the person so charged into believing that she was over the age of sixteen years at the said time.”

## Act No. 57, 1969

## IMMORALITY AMENDMENT ACT, 1969.

Insertion of section 18A in Act 23 of 1957.

2. The following section is hereby inserted in the principal Act after section 18:

“Manufacture, sale or supply of article which is intended to be used to perform an unnatural sexual act.”

18A. (1) Any person who manufactures, sells or supplies any article which is intended to be used to perform an unnatural sexual act, shall be guilty of an offence.

(2) For the purposes of subsection (1), ‘sell’ includes to offer for sale, to keep for sale or to keep in a place where goods are sold, offered or kept for sale.”

Insertion of section 20A in Act 23 of 1957.

3. The following section is hereby inserted in the principal Act after section 20:

“Acts committed between men at a party and which are calculated to stimulate sexual passion or to give sexual gratification.”

20A. (1) A male person who commits with another male person at a party any act which is calculated to stimulate sexual passion or to give sexual gratification, shall be guilty of an offence.

(2) For the purposes of subsection (1) ‘a party’ means any occasion where more than two persons are present.

(3) The provisions of subsection (1) do not derogate from the common law, any other provision of this Act or a provision of any other law.”

Amendment of section 22 of Act 23 of 1957, as substituted by section 4 of Act 68 of 1967.

4. Section 22 of the principal Act is hereby amended by the substitution for paragraph (g) of the following paragraph:

“(g) in the case of an offence referred to in section 18A, 19, 20 (1) (b) or (c), or 20A (1), to a fine not exceeding four hundred rand or to imprisonment for a period not exceeding two years or to both such fine and such imprisonment.”

Repeal of section 10 of Act 22 of 1898 (Natal).

5. Section 10 of the Act “To amend the law relative to the trial and punishment of the Crimes of Rape and Indecent Assault and Conduct” (Act No. 22 of 1898 (Natal)), is hereby repealed.

Short title.

6. This Act shall be called the Immorality Amendment Act 1969.



**WETTE**  
VAN  
**DIE UNIE VAN SUID-AFRIKA**  
**1950**

— MET —  
ALFABETIESE TABEL VAN INHOUD EN TABEL VAN WETTE,  
ENS., DEUR HIERDIE WETTE HERROEP OF GEWYSIG.

— GEPUBLISEER OP LAS —  
*En Gedruk onder Toesig van die Staatsdrukker.*

— PAROW, K.P. —  
1950.



**STATUTES**  
OF  
**THE UNION OF SOUTH AFRICA**  
**1950**

— WITH —  
TABLE OF ALPHABETICAL CONTENTS AND TABLE OF LAWS  
ETC., REPEALED OR AMENDED BY THESE STATUTES.

— PUBLISHED BY AUTHORITY —  
*And Printed under the Superintendence of the Government Printer.*

— PAROW, C.P. —  
1950.



- (d) the maintenance and control of any fund which may be established under section *eighteen*, the manner in which, the times at which and the extent to which profits shall be appropriated to any such fund; and
- (e) the carrying out of any other financial provisions of this Act, and generally for the proper management of the affairs of the corporation and the carrying out of the provisions of this Act.

Act No. 40  
of 1950.

46. This Act shall be called the Klipfontein Organic Products Corporation Act, 1950. Short title.

Act No. 41  
of 1950.

## ACT

provide for the establishment of group areas, for the control of the acquisition of immovable property and the occupation of land and premises, and for matters incidental thereto.

(English Text signed by the Officer Administering the  
Government.)  
(Assented to 24th June, 1950.)

IT ENACTED by the King's Most Excellent Majesty, the Senate and the House of Assembly of the Union of South Africa, as follows:—

In this Act, unless the context otherwise indicates—

Definitions

- (i) "Administrator" means Administrator in Executive Committee; (i)
- (ii) "acquire" in relation to immovable property, means to become the owner of such property in any manner whatsoever; (xx)
- (iii) "board" means the Land Tenure Advisory Board established by section *twenty-four*; (xviii)
- (iv) "company" includes any private company, any company referred to in section *sixteen* any foreign company as defined in section *two hundred and twenty-nine* of the Companies Act, 1926 (Act No. 46 of 1926) and any registered or unregistered corporate body other than a statutory body; (ix)
- (v) "controlled area" means any area which is not a group area or a scheduled native area, location, native village, coloured persons settlement, mission station or communal reserve referred to in paragraph (c) of sub-section (3) of section *three*, and includes, except for the purposes of section *ten*, any specified area referred to in section *eleven*: Provided that any group area which is not in terms of a proclamation under paragraph (a) of sub-section (1) of section *three* a group area for occupation, shall form part of the controlled area for the purposes of the provisions of this Act relating to the occupation of land or premises in the controlled area, and that any group

area which is not in terms of a proclamation under paragraph (b) of the said sub-section a group area for ownership, shall form part of the controlled area for the purposes of the provisions of this Act relating to the acquisition of immovable property in the controlled area; (ii)

**Act No. 41  
of 1950.**

- (vi) "controlling interest", in relation to any company, means—
- (a) a majority of its shares; or
  - (b) shares representing more than half its share capital; or
  - (c) shares of a value in excess of half the aggregate value of all its shares; or
  - (d) shares entitling the holders thereof to more than half its profits or assets; or
  - (e) shares entitling the holders thereof to a majority or preponderance of votes; or
  - (f) any claim arising from a loan, for an amount in excess of half its share capital, or debentures for such an amount; or
  - (g) the power to exercise, directly or indirectly, by holding any interest, whether or not of the nature referred to in paragraphs (a) to and including (f), in any other company, or otherwise, any control whatsoever over the activities or assets of the company; (iii)
- (vii) "disqualified company", in relation to immovable property, land or premises, means a company wherein a controlling interest is held or deemed to be held by or on behalf or in the interest of a person who is a disqualified person in relation to such property, land or premises; (xi)
- (viii) "disqualified person", in relation to immovable property, land or premises in any group area, means a person who is not a member of the group specified in the relevant proclamation under section *three*, and in relation to any immovable property, land or premises in the controlled area, means a person who is not a member of the same group as the owner of such property, land or premises, or if the owner is a statutory body other than a municipality in the province of the Cape of Good Hope, of the same group as the majority of the members of such body or in the case of any such municipality, of the same group as the majority of the members of the council thereof, or if the owner is a company, of the same group as any person by whom or on whose behalf or in whose interest a controlling interest is held or deemed to be held in such company; (xii)
- (ix) "group" means either the white group, the coloured group or the native group referred to in section *two*, and includes, to the extent required to give effect to any relevant proclamation under sub-section (2) of the said section, any group of persons who have under the said section been declared to be a group; (iv)

- (x) "group area" means any area proclaimed under section *three*; (v)
- (xi) "immovable property" includes any real right in immovable property and any right which would upon registration be such a real right and any lease or sub-lease of immovable property, (other than a lease or sub-lease of immovable property in an area which is a specified area in terms of section *eleven*), but does not include any right to any mineral (including any right to prospect for or to dig or mine any mineral) or a lease or sub-lease of any such right or a mortgage bond over immovable property; (xiii)
- (xii) "inspector" means an inspector appointed under section *thirty-one*; (viii)
- (xiii) "land" includes any portion of land; (vi)
- (xiv) "local authority" means any institution or body contemplated in paragraph (vi) of section *eighty-five* of the South Africa Act, 1909; (xvii)
- (xv) "marriage" includes a union, recognized as a marriage (whether or not of a monogamous nature) in native law or custom or under the tenets of the religion of either of the parties to the union; (vii)
- (xvi) "Minister" means the Minister of the Interior: Provided that in relation to any group area for the native group or for any group defined under sub-section (2) of section *two* consisting of members of the native group, any area which is a released area in terms of the Native Trust and Land Act, 1936 (Act No. 18 of 1936), any area referred to in sub-section (1) of section *eight* of the Natives (Urban Areas) Consolidation Act, 1945 (Act No. 25 of 1945), and to any immovable property, land or premises in any such area, any reference to the Minister in paragraph (b) of sub-section (3) of section *three*, section *six*, sub-section (1) of section *seven*, sections *fourteen*, *twenty*, *twenty-six*, *twenty-seven*, *thirty-two* and *thirty-three*, sub-section (4) of section *thirty-five* and sub-section (4) of section *thirty-six*, shall be a reference to the Minister of Native Affairs; (x)
- (xvii) "permit" means a permit issued or deemed to be issued under the relevant provision of section *fourteen*; (xiv)
- (xviii) "person" shall not be limited in its meaning by reason of any special reference to a disqualified person, a disqualified company, a private company, a company referred to in section *sixteen* or a statutory body; (xvi)

- (xix) "premises" includes any room or apartment in any building; (xv)
- (xx) "statutory body" means any council, board or body established by or under any law (xix).

Act No. 41  
of 1950.

2. (1) For the purposes of this Act, there shall be the following groups:

Groups for the  
purposes of this  
Act.

- (a) a white group, in which shall be included any person who in appearance, obviously is, or who is generally accepted as a white person, other than a person who although in appearance obviously a white person, is generally accepted as a coloured person, or who is in terms of sub-paragraph (ii) of paragraphs (b) and (c) or of the said sub-paragraphs read with paragraph (d) of this sub-section and paragraph (a) of sub-section (2), a member of any other group;
- (b) a native group, in which shall be included—
- (i) any person who in fact is, or is generally accepted as a member of an aboriginal race or tribe of Africa, other than a person who is, in terms of sub-paragraph (ii) of paragraph (c), a member of the coloured group; and
  - (ii) any woman to whichever race, tribe or class she may belong, between whom and a person who is, in terms of sub-paragraph (i), a member of a native group, there exists a marriage or who cohabits with such a person;
- (c) a coloured group, in which shall be included—
- (i) any person who is not a member of the white group or of the native group; and
  - (ii) any woman, to whichever race, tribe or class she may belong, between whom and a person who is, in terms of sub-paragraph (i), a member of the coloured group, there exists a marriage, or who cohabits with such a person; and
- (d) any group of persons which is under sub-section (2) declared to be a group.

(2) The Governor-General may by proclamation in the Gazette—

- (a) define any ethnical, linguistic, cultural or other group of persons who are members either of the native group or of the coloured group; and
- (b) declare the group so defined to be a group for the purposes of this Act or of such provisions thereof as may be specified in the proclamation, and either generally or in respect of one or more group areas, or in respect of the controlled area or of any portion thereof so specified, or both in respect of one or more group areas and of the controlled area or any such portion thereof.

(3) A proclamation under paragraph (a) of sub-section (2) may provide that only persons who have in accordance with

regulation been registered on application, or who have been registered under any other law, as members of the group referred to in the proclamation, shall be members thereof.

Act No. 41  
of 1950.

(4) A member of the native group or of the coloured group who is or becomes a member of any group defined under paragraph (a) of sub-section (2) shall, to the extent required to give effect to any proclamation under paragraph (b) of the said sub-section, be deemed not to be a member of the native group or of the coloured group, as the case may be.

3. (1) The Governor-General may, whenever it is deemed expedient, by proclamation in the *Gazette*—

Establishment  
of group areas.

(a) declare that as from a date specified in the proclamation, which shall be a date not less than one year after the date of the publication thereof, the area defined in the proclamation shall be an area for occupation by members of the group specified therein; or

(b) declare that, as from a date specified in the proclamation, the area defined in the proclamation shall be an area for ownership by members of the group specified therein.

(2) Proclamations under paragraphs (a) and (b) of sub-section (1) may be issued also in respect of the same area.

(3) No proclamation shall be issued under this section—

(a) except with the prior approval in each case by resolution of both Houses of Parliament: Provided that any such proclamation may be issued without such approval—

(i) if it is issued before the expiration of a period of five years from the date of promulgation of this Act, in respect of a group area for a group other than the native group or a group defined under sub-section (2) of section *two* consisting of members of the native group, in the province of the Cape of Good Hope or of Natal; or

(ii) if it is issued in respect of an area in the province of the Transvaal for the coloured group or a group defined under sub-section (2) of section *two*, consisting of members of the coloured group, the whole or the greater part of which consists of an area assigned or set apart, as at the commencement of this Act, under paragraph (d) of section *two* of Law No. 3 of 1885 of the Transvaal or section *ten* of the Municipal Amending Ordinance, 1905 (Ordinance No. 17 of 1905) of the Transvaal, or of land described in sub-section (10) of section *one hundred and thirty-one A* of the Precious and Base Metals Act, 1908 (Act No. 35 of 1908) of the Transvaal;

Act No. 41  
of 1950.

- (b) unless in each case the Minister has considered a report by the board and has consulted the Administrator of the province concerned, and in the case of an area situated wholly or partly on land which, in terms of any law relating to mining, is proclaimed land or deemed to be proclaimed land or upon which prospecting, digging or mining operations are being carried on, also the Minister of Mines, and in the case of an area situated wholly or partly within a controlled area as defined in section *one* of the Natural Resources Development Act, 1947 (Act No. 51 of 1947), also the Natural Resources Development Council established by section *two* of the said Act;
- (c) by which there would be included in any group area the whole or any part of—
- (i) any land situated in an area which is a scheduled native area or a released area in terms of the Native Trust and Land Act, 1936 (Act No. 18 of 1936);
  - (ii) any location, native village or native hostel referred to in section *two* of the Natives (Urban Areas) Consolidation Act, 1945 (Act No. 25 of 1945), or any area approved for the residence of natives under paragraph (*h*) of sub-section (2) of section *nine* of the said Act;
  - (iii) a coloured persons settlement as defined in section *one* of the Coloured Persons Settlement Act, 1946 (Act No. 7 of 1946);
  - (iv) any mission station or communal reserve to which the provisions of the Mission Stations and Communal Reserves Act, 1909 (Act No. 29 of 1909) of the Cape of Good Hope, or of the said Act read with section *sixteen* of the Coloured Mission Stations and Reserves Act, 1949 (Act No. 12 of 1949), apply; or
  - (v) any area which is a national park in terms of the National Parks Act, 1926 (Act No. 56 of 1926), or any land which forms part of such a park.

4. (1) As from the date specified in the relevant proclamation under paragraph (*a*) of sub-section (1) of section *three*, and notwithstanding anything contained in any special or other statutory provision relating to the occupation of land or premises, no disqualified person shall occupy and no person shall allow any disqualified person to occupy any land or premises in any group area to which the proclamation relates, except under the authority of a permit. Occupation in group areas.

(2) The provisions of sub-section (1) shall not render it unlawful for any disqualified person to occupy land or premises in any group area—

- (a) as a *bona fide* servant or employee of the State, or a statutory body or as a domestic servant of any person lawfully occupying the land or premises;

- (b) as a *bona fide* visitor for a total of not more than ninety days in any calendar year of any person lawfully residing on the land or premises or as a *bona fide* guest in an hotel;
- (c) as a *bona fide* patient in a hospital, asylum, or similar institution controlled by the State or a statutory body or in any such institution in existence at the commencement of the Act, which is aided by the State, or as an inmate of a prison, work colony, inebriate home or similar institution so controlled; or
- (d) as the *bona fide* employee (other than a domestic servant) of any person or as the husband, wife, minor child or dependant of any person (including a domestic servant or employee) who is lawfully occupying such land or premises: Provided that the provisions of this paragraph shall apply in respect of any group area or any part of any group area only if the Governor-General has by proclamation in the *Gazette*, declared them to apply in respect of that group area, or that part thereof, and only to the extent and subject to the conditions (if any) which may be specified in the proclamation.

**Act No. 41  
of 1950.**

(3) Any provision in the title deed of any immovable property situate in any group area referred to in sub-section (1) prohibiting or restricting the occupation or use of such property by persons who are members of the group for which that area has been established shall lapse as from the date referred to in the said sub-section, and no such provision shall thereafter be inserted in the title deed of any immovable property in such group area.

5. (1) If any group area is in terms of a proclamation under paragraph (b) of sub-section (1) of section *three* a group area for ownership—

Acquisition of  
immovable  
property in  
group areas.

- (a) no disqualified person and no disqualified company shall, on or after the relevant date specified in the proclamation, acquire any immovable property situate within that area, whether or not in pursuance of any agreement or testamentary disposition entered into or made before that date, except under the authority of a permit: Provided that the provisions of this paragraph shall not render unlawful any acquisition of immovable property by a statutory body;
- (b) no disqualified company which is on the said date the holder of any immovable property situate within that area, shall hold that property after the expiration of a period of ten years from the said date, except under the authority of a permit;
- (c) no company which on or after the said date becomes or again becomes a disqualified company, shall hold any immovable property situate within that area which it has on or after the said date acquired otherwise than in pursuance of a permit, except under the authority of a permit;



(d) any provision in the title deed of any immovable property situate in that area prohibiting or restricting the acquisition of such property by persons who are members of the group for which that area has been established, shall lapse as from the said date, and no such provision shall thereafter be inserted in the title deed of any immovable property situate in that area.

Act No. 41  
of 1950.

(2) Sub-section (1) shall apply notwithstanding anything contained in any special or other statutory provision relating to the acquisition or holding of immovable property, but the provisions of paragraph (b) of sub-section (1) shall not render it unlawful for any company engaged in mining operations or in operations carried on in a factory as defined in the Factories, Machinery and Building Work Act, 1941 (Act No. 22 of 1941), in which machinery acquired at a price of not less than five thousand pounds has been installed, to hold any immovable property used by such company in connection with such operations.

(3) A testamentary disposition or intestate succession by which any person would acquire or hold any immovable property in contravention of sub-section (1) shall, unless the beneficiary is authorized to acquire or hold such property under permit, be deemed to be a testamentary disposition of or succession in respect of the nett proceeds of such property, and it shall be the duty of the executor of the estate of the deceased to realize the property within a period of one year from the date of his death, or such further period as the Minister may allow.

6. (1) The Minister may by notice in the *Gazette*, establish for any group area (other than an area for the white group), a governing body to be constituted in accordance with regulation.

Governing body  
for certain  
group areas.

(2) Such governing body may consist wholly or mainly of members of the group for which the group area has been established, and shall have such powers and functions as may be prescribed by regulation, and shall exercise its powers and functions, where the group area concerned is wholly or partly within the area of jurisdiction of a local authority, subject to such supervision (if any) by that local authority as may be prescribed by regulation, and where the group area concerned is partly within the area of jurisdiction of one local authority, and partly within the area of jurisdiction of any other local authority or wholly outside the area of jurisdiction of any local authority, subject to such supervision (if any) by a local authority designated by the Minister, as may be so prescribed.

(3) The establishment of a governing body under this section shall not divest any local authority, in respect of the group area concerned, of any powers or functions not vested in such governing body.

(4) The Minister shall not exercise his powers under this section without the concurrence of the Administrator of the province who shall consult any local authority concerned.



7. (1) The Minister may, if he is of opinion that any area referred to in paragraph (d) of article two of Law No. 3 of 1885 of the Transvaal, or in section ten of the Municipal Amending Ordinance, 1905 (Ordinance No. 17 of 1905) of the Transvaal or any group area (other than an area for the white group) which is situate within the area of jurisdiction of an urban local authority, is not properly administered by that local authority, request the Administrator of the province concerned to cause an enquiry to be held (at which the said local authority shall be afforded an opportunity of being heard) and thereafter the said Administrator may, by notice in writing, call upon such local authority, forthwith to carry out any work defined in the said notice which the said local authority has power to carry out and which in the opinion of the Administrator, is necessary for the proper administration of that area and may reasonably be required to be carried out by the said local authority, and if such local authority fails to comply with that notice, the Administrator may himself cause that work to be carried out and may for that purpose authorize any person to perform any act which the said local authority could lawfully perform.

**Act No. 41  
of 1950.**

Measures to ensure proper municipal administration in certain areas.

(2) The Administrator may recover from the local authority concerned any expenditure incurred by him under this section—

- (a) by action in a competent court against the local authority in default; or
- (b) by levying a special rate upon all rateable property within the area of jurisdiction of the local authority in default; or
- (c) by deduction from any subsidy, grant or other moneys payable out of the Consolidated Revenue Fund or by the Administrator to the local authority in default,

or by all three or any two of such methods of recovery, and the Administrator's certificate shall be proof of the amount due by the local authority under this section, subject to an appeal to the Minister, whose decision shall be final.

8. (1) No person shall, except under the authority of a permit enter into any agreement, whether on his own behalf or on behalf or in the interest of any other person, in terms whereof any disqualified person or any disqualified company acquires or purports to acquire or would acquire any immovable property situate in the controlled area.

Restrictions on certain agreements relating to immovable property in controlled area.

(2) Sub-section (1) shall not apply in respect of the acquisition of immovable property in a released area as defined in the Native Trust and Land Act, 1936 (Act No. 18 of 1936), by a native as so defined, or in respect of any acquisition of immovable property which is governed by the said Act or the Natives (Urban Areas) Consolidation Act, 1945 (Act No. 25 of 1945).

(3) For the purposes of sub-section (1) a sheriff, deputy-sheriff, messenger of the court, trustee, executor, liquidator, curator or administrator dealing with immovable property

in his capacity as such, or any other person dealing with immovable property in a representative capacity, shall be deemed to be acting on behalf or in the interest of the person in whose name the property is registered.

Act No. 41  
of 1950.

9. (1) If at the commencement of this Act a company of any group holds immovable property in the controlled area and thereafter becomes a company of another group, it shall not hold that property, except under the authority of a permit.

Restrictions on holding of immovable property in controlled area by companies.

(2) If after the commencement of this Act a company of any group acquires immovable property in the controlled area, and thereafter becomes a company of another group, it shall not hold that property, except under the authority of a permit.

(3) For the purposes of this section a company shall be a company of a group, if a controlling interest in that company is held or deemed to be held by or on behalf or in the interest of a member of that group.

10. (1) No disqualified person shall occupy and no person shall allow any disqualified person to occupy any land or premises in the controlled area, except under the authority of a permit.

Restrictions on occupation of land in controlled area.

(2) The provisions of sub-section (1) shall not render it unlawful for any disqualified person to occupy any land or premises—

- (a) in pursuance of any right conferred by or under any statute;
- (b) under any agreement lawfully entered into or under any testamentary disposition made on or before the 24th day of April 1950, or in the case of land or premises which have by virtue of any proclamation under section *thirty-three*, ceased to be subject to the operation of a proclamation under section *eleven*, under any agreement lawfully entered into or under any testamentary disposition made while the land or premises were subject to the operation of such last-mentioned proclamation, or under any renewal of any such agreement to which any party thereto is in terms thereof entitled;
- (c) by virtue of any prescriptive title acquired at or before the commencement of this Act;
- (d) under any arrangement entered into under the Housing Act, 1920 (Act No. 35 of 1920) or under any regulations made under the Housing (Emergency Powers) Act, 1945 (Act No. 45 of 1945), if he is a member of the same group as the class of persons for which the dwelling or other building in question is intended;
- (e) as a *bona fide* servant or employee of the State, or a statutory body or as a domestic servant of any person lawfully occupying the land or premises;
- (f) as the *bona fide* visitor for a total of not more than ninety days in any calendar year of any person lawfully residing on the land or premises or as a *bona fide* guest in an hotel;

- (g) as a *bona fide* patient in a hospital, asylum, or similar institution controlled by the State or a statutory body or in any such institution in existence at the commencement of this Act, which is aided by the State, or as an inmate of a prison, work colony, inebriate home, or similar institution so controlled;
- (h) as the *bona fide* employee (other than a domestic servant) of any person, or as the husband, wife, minor child or dependant of any person (including a domestic servant or employee), who is lawfully occupying such land or premises: Provided that the Governor-General may by proclamation in the *Gazette* declare that the provisions of this paragraph shall apply in any portion of the controlled area defined in the proclamation, only to the extent and subject to the conditions (if any) which may be specified in the proclamation; or
- (i) under any arrangement for the accommodation of any native labourer as defined in the Native Labour Regulation Act, 1911 (Act No. 15 of 1911), after his recruitment and before his arrival at the place where he is to work, or after his departure, on the expiry of his term of employment, from the said place, and before his arrival at the place of his recruitment, by an employer or labour agent, as so defined, lawfully occupying such land or premises.
- (3) The Governor-General may by proclamation in the *Gazette* exclude any area defined in the proclamation, for the period specified therein, from the provisions of sub-section (1).
- (4) A testamentary disposition by which any person would acquire a right to occupy any land or premises in contravention of sub-section (1) shall be deemed to be a testamentary disposition of the nett proceeds of the realization of such right and unless the beneficiary is authorized to occupy such land or premises under permit it shall be the duty of the executor of the estate of the deceased to realize such right within a period of six months from the date of the death of the testator.
- 11.** (1) The Governor-General may by proclamation in the *Gazette* declare that the provisions of sections *twelve* and *thirteen* shall, as from a date specified in the proclamation (in the said sections referred to as the specified date) apply in any portion of the controlled area so specified (in the said sections referred to as a specified area).
- (2) As from such date, the said provisions shall, notwithstanding anything contained in any special or other statutory provision relating to the occupation of land or premises, apply in any such portion of the controlled area, and the provisions of section *ten* shall, subject to the provisions of sub-section (2) of section *twelve* while the first-mentioned provisions so apply, be suspended in respect of that portion of the controlled area.

**Act No. 41  
of 1950.**

Application of  
sections 12 and 13.

**Act No. 41  
of 1950.**

(3) Upon the application of the provisions of this Act under sub-section (1) of section *thirty-seven* in respect of any area in the province of Natal which consists of or includes the municipal area of Durban, it shall be deemed that a proclamation under this section has been issued, declaring that the provisions of sections *twelve* and *thirteen* shall apply in the said municipal area, as from the date from which the provisions of this Act are applied in respect of such first-mentioned area.

(4) Upon the establishment of any group area, the relevant proclamation issued or deemed to have been issued under this section shall cease to have any effect in respect of so much of any such portion of the controlled area as may be comprised by or included in that group area.

12. (1) As from the specified date, no person who is a member of any group shall occupy and no person shall allow any such person to occupy any land or premises in a specified area which was not lawfully occupied and is not under section *thirteen* deemed to have been occupied at the said date by a person who is a member of the same group, except under the authority of a permit.

Restriction on occupation of land or premises in area specified under section 11.

(2) The provisions of paragraphs (e), (f), (g), (h) and (i) of sub-section (2) of section *ten* shall *mutatis mutandis* apply in respect of the occupation of land or premises in a specified area.

13. (1) (a) If after the specified date any building is erected or completed on any land or premises situated in a specified area elsewhere than in an area defined by proclamation under paragraph (a) of sub-section (3), or if at the said date any building, land or premises in a specified area are unoccupied, such building, land or premises shall, if any person other than a body corporate is the owner thereof, subject to the provisions of sub-sections (2), (3), (4), (5) and (7), for the purposes of section *twelve* be deemed to have been occupied at the specified date by the person who is the owner thereof.

Buildings erected or completed after specified date, and buildings, land or premises unoccupied at that date.

(b) If a body corporate is the owner of such building, land or premises, or if at the said date such building, land or premises are not lawfully occupied, the Minister shall, subject to the provisions of sub-section (3), on the written application of the owner, determine the group by a member of which the building, land or premises shall for the said purposes be deemed to have been occupied at the specified date.

(2) If after the specified date any building on land or premises situated in a specified area elsewhere than in an area defined by proclamation under paragraph (a) of sub-section (3), is demolished and any other building erected in its stead on the same site, or any such building is extended, the building so

erected or extended shall, subject to the provisions of sub-sections (3), (4), (5) and (7), for the purposes of section *twelve* be deemed to have been occupied at the specified date by the person who last lawfully occupied the demolished or extended building before the demolition or extension.

**Act No. 41  
of 1950.**

- (3) (a) The Governor-General may by proclamation in the *Gazette* define any area in a specified area for the purposes of paragraph (b).
- (b) The Minister shall, on the written application of the owner of any building which is completed, erected (whether or not in the stead of a demolished building) or extended in an area defined in any such proclamation, after the date of publication thereof, or of any land or premises in any such area which is or are unoccupied or not lawfully occupied on the said date, determine the group by a member of which such building, land or premises shall, for the purposes of section *twelve*, be deemed to have been occupied at the specified date.
- (c) Until a determination is made under paragraph (b) in respect of any building referred to therein, such building shall, for the purposes of section *twelve*, be deemed to have been unoccupied at the specified date.
- (d) If in terms of any determination under paragraph (b) any building, land or premises, is deemed to have been occupied by a member of the native group or of the coloured group, and a group consisting of members of such group is after such determination established under sub-section (2) of section *two*, the Minister may, on like application, withdraw the determination and under the said paragraph determine that such building, land or premises shall be deemed to have been occupied by a member of such last-mentioned group.
- (4) Any dwelling or other building in a specified area which has been constructed under the Housing Act, 1920 (Act No. 35 of 1920) or under any regulations made under the Housing (Emergency Powers) Act, 1945 (Act No. 45 of 1945), shall for the purposes of section *twelve* be deemed to have been occupied at the specified date by a person who is a member of the same group as the class of persons for which such dwelling or building is intended.
- (5) If the title deed of any building, land or premises in a specified area contains any condition which prohibits or restricts the occupation thereof by persons of one or more groups, the Minister shall not make any determination under sub-section (3) which would be contrary to any such condition.
- (6) The Minister may, whenever for any reason he deems it expedient to do so, postpone the making of a determination under sub-section (2) or paragraph (b) of sub-section (1) for such period as he may deem fit.

(7) If any permit is issued in respect of the occupation of any land or premises in a specified area, such land or premises shall, unless it is specifically otherwise stated in the permit, as from the commencement of such occupation in pursuance of the permit, for the purposes of section *twelve* be deemed to have been occupied at the specified date by a person who is a member of the same group as the person in respect of whose occupation the permit is issued.

Act No. 41  
of 1950.

(8) (a) If at the specified date there exists any determination under sub-section (2) or paragraph (b) of sub-section (4) of section *six* of the Asiatic Land Tenure Act, 1946 (Act No. 28 of 1946), in respect of any building, land or premises in a specified area, and such building, land or premises remain unoccupied or the erection or extension of such building has not been completed, such determination shall be deemed to have been made under the relevant provisions of this section: Provided that any reference in the determination to a person who is not an Asiatic, shall be deemed to be a reference to a member of the white group, and any reference therein to a person who is an Asiatic, shall be deemed to be a reference to a member of the coloured group.

(b) If at the said date there exists any permit under section *eight* of the said Act authorizing the occupation of land or premises in a specified area, and such land or premises are not occupied in pursuance of the permit, the permit shall be deemed to have been issued under the relevant provision of section *fourteen* of this Act.

14. (1) The Minister may, subject to the provisions of sub-section (2), in his discretion, on written application made therefor— Permits and determinations.

(a) direct that a permit be issued, subject to such conditions as he may determine (including, in the case of a permit authorizing the acquisition of immovable property, a condition providing that the holder of the permit shall not dispose of the property concerned to any person other than a person belonging to the same group as the person from whom such holder acquires the property), to be signed by an officer thereto appointed by him, authorizing—

(i) the acquisition or holding of immovable property in a group area or in the controlled area; or

(ii) the occupation of or the granting of permission to occupy any land or premises in a group area, in the controlled area or in a specified area referred to in section *twelve*; and

(b) direct that the conditions of a permit be amended or that it shall be available for a portion only of the land or premises in respect of which it has been issued.



(2) The Minister shall not direct that any permit be issued under sub-section (1)—

Act No. 41  
of 1950.

- (a) authorizing the acquisition or holding of immovable property or the occupation of land or premises in a group area unless he is of opinion that the refusal of the permit would cause undue hardship or that the issue of the permit would be in the interest of the group for which the group area has been established; or
- (b) authorizing any person to acquire, hold or occupy any land or premises contrary to any provision in the title deed which prohibits or restricts the acquisition, holding or occupation of the land or premises by persons belonging to any group or class.

(3) In directing that a permit be issued or that the conditions thereof be amended under sub-section (1) and in making a determination under section *thirteen*, the Minister may take into consideration the relative needs of any group concerned, in regard to housing, the amenities of life and educational and recreational facilities, trading and industrial undertakings, the situation of the immovable property, land or premises in relation to other property, land or premises owned or occupied by members of any group, and any other matters which in his opinion are relevant to the question whether or not any such permit should be issued or an amendment of the conditions thereof should be made or how any such determination should be made.

(4) A permit authorizing the holding of immovable property or the occupation of land or premises, may be issued for an indefinite or a specified period or until withdrawn at the discretion of the Minister.

(5) A permit authorizing the acquisition of immovable property may also be issued to the person who disposes of the property or on application of a person in whose favour the property is mortgaged, and may in such a case authorize the acquisition of the property by any person who is a member of a group specified in the permit, or by a company wherein a controlling interest is held or deemed to be held by or on behalf or in the interest of any such person;

(6) A permit authorizing the acquisition of immovable property by a company referred to in section *sixteen* or authorizing an institution the business or part of the business of which it is to advance money on mortgage, to acquire immovable property mortgaged in its favour, may be issued—

- (a) in respect of any particular immovable property; or
- (b) in respect of immovable property in any area specified in the permit; or
- (c) in respect of immovable property in general; and
- (d) in the cases referred to in paragraphs (b) and (c), either for a specified period or until withdrawn at the discretion of the Minister: Provided that upon the expiration of any such period or the withdrawal of the permit, the conditions of the permit shall

continue to apply in respect of any immovable property acquired under the authority thereof.

**Act No. 41  
of 1950.**

(7) A permit authorizing the occupation of any land or premises by any employee or the granting of permission to any employee to occupy land or premises, may be issued in respect of any individual employee or in respect of any number and class of employees specified in the permit, and in the latter case either for a specified period or until withdrawn at the discretion of the Minister.

(8) A permit authorizing the occupation of any land or premises by any person as a patient in or inmate of any institution, may also be issued to the institution, and may authorize the occupation of such land or premises by all *bona fide* patients in or inmates of such institution who are members of any group specified in the permit.

(9) There shall be payable to the Minister in respect of every application for a permit which is submitted within two years after the date of any previous application relating to the same land or premises, or any portion of such land or premises, which has been refused, a fee of twenty-five pounds: Provided that the Minister may after consideration of any such application, in his discretion, refund to the applicant out of moneys to be appropriated by Parliament for the purpose, an amount equal to the amount so paid or any portion thereof as he may deem fit.

(10) Any permit shall lapse if, in the case of a permit authorizing the acquisition of immovable property by agreement, the agreement is not entered into, or if, in the case of a permit authorizing the occupation of land or premises, the land or premises are not occupied, in pursuance of the permit, within a period of six months after the issue thereof or within such further period as the Minister may allow on an application lodged with him prior to the expiration of such firstmentioned period.

(11) If any land or premises in respect of which a permit has been issued under sub-paragraph (ii) of paragraph (a) of sub-section (1) is occupied or used contrary to any condition subject to which the permit was issued, the Minister may, after not less than one month's notice to the holder of the permit, revoke the permit.

15. (1) Whenever a private company holds any immovable property, any share in or debenture of that company held by or pledged to a person who or a company which is a disqualified person or a disqualified company in relation to that property (other than a banking institution as defined in the Banking Act, 1942 (Act No. 38 of 1942)), or by or to any person on behalf or in the interest of such a person to company, may, after not less than three months' notice in writing to the person or company concerned, be declared by the Minister to be forfeited to the State.

Shares and  
debentures  
of private  
companies.

(2) It shall be the duty of the secretary and every director of any company referred to in sub-section (1), which holds any immovable property, to notify the registrar of companies when-



ever any person who or company which is a disqualified person or disqualified company in relation to that property or any other person on behalf or in the interest of such a person or company, holds any share in or debenture of such firstmentioned company.

**Act No. 41  
of 1950.**

(3) The provisions of sub-sections (1) and (2) shall not apply in respect of any shares in or debentures of a private company—

- (a) which are held immediately after the commencement of this Act by a disqualified person or a disqualified company, or immediately after the date specified in the relevant proclamation under paragraph (b) of sub-section (1) of section *three* by a person who or a company which, as a result of such proclamation, becomes a disqualified person or a disqualified company in relation to any immovable property held by such private company, while such shares or debentures are held by such person or company; or
- (b) which are held by a disqualified person, if he inherited them from a disqualified person who lawfully held them; or
- (c) which are held by a disqualified person who or a disqualified company which lawfully holds any other shares in or debentures of that company, if such person or company acquired such firstmentioned shares or debentures from a disqualified person who or a disqualified company which lawfully held them:

Provided that nothing in this sub-section contained shall affect the application of sub-sections (1) and (2) in respect of any shares or debentures unlawfully held at the commencement of this Act.

(4) If any share in or a debenture of any company has been forfeited under sub-section (1), the secretary of the company shall make such entries in any register, book or document under the control of the company and issue such document as the registrar of companies may direct for the purpose of giving effect to the forfeiture.

(5) For the purposes of this section no person shall, by reason of the establishment of a group area, be a disqualified person in relation to immovable property in that area, unless that area is in terms of a proclamation under paragraph (b) of sub-section (1) of section *three*, a group area for ownership.

16. (1) No company which has to an extent of more than one-third of its shares, share warrants or debentures, issued any shares or share warrants or debentures entitling the bearer thereof to any rights in regard thereto, and no company wherein a controlling interest is held by or on behalf or in the interest of any such company, shall acquire immovable property, situated in the controlled area or in any group area, except under the authority of a permit.

Companies with  
bearer shares or  
debentures.

(2) If any company referred to in sub-section (1) holds any immovable property in the controlled area, the Minister may, after not less than three months' notice in writing to the company, declare the company, by notice in the *Gazette*, to be a company wherein a controlling interest shall, for the purposes of section *ten*, be deemed to be held by a member of a group specified in the notice, and thereupon the company shall for the said purposes be deemed to be such a company, and it shall further for the said purposes be deemed that no controlling interest in the company is held by or on behalf or in the interest of any member of any other group.

Act No. 41  
of 1950.

17. (1) If it appears to the Minister that there is reason to presume that a controlling interest in any company is held by or on behalf or in the interest of any member of any group, he may by notice in writing call upon that company to furnish him, within a period specified in the notice, with such particulars in regard to the control of that company, as may be so specified.

Declaration as to  
controlling  
interest in  
companies.

(2) If the company fails to comply with any such notice within the said period or within such further period as the Minister may allow, or the said notice has been complied with, and the Minister is satisfied that a controlling interest in the company was at the date of such notice held by or on behalf or in the interest of any member of any group, he may by notice in the *Gazette* declare that for the purposes of this Act, it shall be a company wherein a controlling interest is held by or on behalf or in the interest of a member of that group, and thereupon the company shall for the said purposes be deemed to be such a company, and it shall further for the said purposes be deemed that no controlling interest in the company is held by or on behalf or in the interest of any member of any other group.

(3) The company shall be notified of such declaration and may, within a period of two months after a date specified in the notification or such longer period as the Court may, upon application, allow, apply to any provincial division of the Supreme Court having jurisdiction for an order setting aside the notice referred to in sub-section (2), and the court may set aside the notice if the company proves that it is not a company wherein a controlling interest was, either at the date of the notice under sub-section (1) or at the date of the notice under sub-section (2), held by or on behalf or in the interest of any member of the group in question.

(4) The operation of a notice under sub-section (2) shall, in respect of immovable property, shares or debentures held by or pledged to the company at the date of the notice, be suspended until the expiration of the period referred to in sub-section (3), or if an application is made under the said sub-section until the application has been disposed of.

(5) A notice under sub-section (1) or (3) shall, in the case of a foreign company (as defined in section *two hundred and*

*twenty-nine* of the Companies Act, 1926 (Act No. 46 of 1926)),  
be deemed to have been effectually given—

**Act No. 41  
of 1950.**

- (a) if served upon a person who is, in regard to the company concerned, authorized as provided in paragraph (c) of sub-section (1) of section *two hundred and one* of the said Act; or
- (b) where there is no such person in the Union, if given in the manner which, in the opinion of the Minister, is best calculated to bring it to the knowledge of the company concerned.

**18.** Any condition or provision in any document whatsoever, empowering or purporting to empower any disqualified person or any disqualified company to exercise any influence upon the transfer of immovable property, shall be null and void: Provided that where at the time such condition or provision was made, the person or company concerned was not a disqualified person or a disqualified company, as the case may be, in relation to the property in question, it shall be revived if such person or company ceases to be a disqualified person or a disqualified company in relation to that property.

Certain provisions in regard to immovable property to be null and void.

**19.** No person shall acquire or hold on behalf or in the interest of any other person any immovable property which such other person may not lawfully acquire or hold in terms of this Act.

Acquisition and holding of property for other person.

**20.** (1) If any immovable property—

- (a) is acquired or held in contravention of any provision of this Act or is dealt with or used contrary to any condition of a permit under the authority of which it has been acquired or is held; or
- (b) has at the commencement of this Act been acquired or is at the said commencement held in contravention of any provision of any law repealed by this Act or in pursuance of any agreement which is null and void in terms of any such provision, or is registered in favour of any person who is in terms of any such provision debarred from holding it, or is dealt with or used contrary to any condition of a permit or any term of a certificate issued under any such provision, under the authority of which it was acquired or held,

Disposition of property illegally held.

the Minister may, after not less than three months' notice in writing to the person concerned and to the holder of any registered mortgage bond over the property, cause the property to be sold either out of hand upon the terms and conditions agreed to by the person concerned and approved by the Minister after consultation with the mortgagee or if the property has not been so sold, within such period, not being less than one month, as the Minister may allow, then by public auction upon such terms and conditions as the Minister may determine.

Act No. 41  
of 1950.

(2) The costs of such sale (including a sale out of hand) shall be a first charge upon the proceeds thereof and any balance shall be applied towards the payment of any debt of which the payment is secured by such property, in its legal order of priority, and any balance left thereafter shall be paid—

(a) in the case of property referred to in paragraph (b) or (c) of sub-section (1) of section *five* or in section *nine* of this Act or in section *three* of the Asiatic Land Tenure Act, 1946 (Act No. 28 of 1946), to the company concerned; and

(b) in any other case, unless the Minister otherwise directs, into the Consolidated Revenue Fund:

Provided that if the property has been acquired or is held in contravention of section *nineteen* of this Act, the proceeds thereof shall not be applied directly or indirectly towards the payment of any debt to the person on whose behalf or in whose interest the property has been acquired or is held.

(3) A copy of every notice under sub-section (1) shall be transmitted to the officer in charge of the deeds registry concerned, and the said officer shall, upon receipt thereof, note thereon the day and hour of its receipt, and note in the appropriate registers that such a notice has been given in respect of the immovable property in question.

(4) Subject to the provisions of sub-section (5), the said officer shall not after receipt by him of any such notice register any transfer, lease or mortgage or other encumbrance of such immovable property, except a transfer in pursuance of a sale under sub-section (1).

(5) If any such notice is withdrawn, a notice of the withdrawal shall be transmitted to the said officer, and upon receipt of such notice or upon the transfer of the immovable property in pursuance of a sale under sub-section (1), any entry made under sub-section (3) shall be cancelled.

(6) The Minister and any officer designated by him for the purpose, shall have power to do whatever may be necessary to effect the transfer of any property sold under sub-section (1) to the purchaser thereof.

(7) If the owner of the property fails to produce the title deed thereof, the officer in charge of the deeds registry shall nevertheless pass transfer of the property and note the transfer on the duplicate title deed filed in his office and in the appropriate registers.

(8) The provisions of this section shall apply notwithstanding anything to the contrary contained in the Administration of Estates Act, 1913 (Act No. 24 of 1913), the Companies Act, 1926 (Act No. 46 of 1926), the Farmers' Assistance Act, 1935 (Act No. 48 of 1935) or the Insolvency Act, 1936 (Act No. 24 of 1936).

(9) A sale under this section shall, for the purpose of sub-section (3) of section *twenty-four* of the Building Societies Act, 1934 (Act No. 62 of 1934), be deemed to be a sale in execution.

21. (1) A Surveyor-General may at the request of any person and upon payment by such person to the Surveyor-General of such fee as may be prescribed by regulation, issue to that person a certificate, in such form as may be so prescribed, stating that any land described therein, within his area of jurisdiction, is situated within the controlled area or within any specified area referred to in section *eleven*, any defined area referred to in sub-section (3) of section *thirteen* or any group area which is so described.

**Act No. 41  
of 1950.**

Issue of  
certificates by  
Surveyors-  
General.

(2) A certificate issued under sub-section (1) shall in all courts of law and public offices in the Union be *prima facie* evidence of the facts stated therein.

22. (1) The officer in charge of any deeds registry shall not register any transfer of immovable property situated in the controlled area or in any group area, unless the requirements prescribed under paragraph (d) of sub-section (1) of section *thirty-six* have been complied with and the transferee has submitted to him such further proof as he may require that the transferee may lawfully acquire and hold such immovable property in terms of this Act.

Restriction upon  
registration of  
immovable  
property.

(2) If any immovable property is registered in the name of any person who may not lawfully acquire or hold such property in terms of this Act, the registration shall, subject to any penalty which may be incurred under this Act and to the provisions of section *twenty*, not be invalid by reason of the provisions of this Act.

23. (1) If any officer entrusted by or under any law with the issue of any licence to carry on any business, trade or occupation, to whom an application for the issue or renewal of any such licence has been made, has reason to believe that the proposed holder of the licence or the person or persons who will be in actual control of the business, trade or occupation to be licensed, may not lawfully carry on the business, trade or occupation on the premises whereon it is to be carried on, he shall not issue or renew the licence unless the applicant proves that such holder and the said person or persons may lawfully carry on the business, trade or occupation on the said premises.

Trading licences  
not to be issued  
except upon  
production of  
certain proof.

(2) Any such licence issued to or renewed in the name of a person who may not lawfully carry on the business, trade or occupation to which the licence relates, on the premises whereon it is to be carried on, shall be invalid, and if at any time any person who may not lawfully carry on such business, trade or occupation on the said premises, is in actual control of such business, trade or occupation, the licence shall lapse.

(3) Any person whatever may, within two months after the issue or renewal of any such licence, and any applicant for such a licence or the renewal thereof whose application has been refused under sub-section (1), may, within two months after refusal note an appeal against the issue, renewal or refusal, as

the case may be, to the magistrate of the district wherein the premises referred to in sub-section (1) are situate.

**Act No. 41  
of 1950.**

- (4) The magistrate may on dealing with such appeal—
- (a) hear evidence in regard to the matter before him;
  - (b) declare to be invalid or cancel any licence issued by such officer or order such officer to accept, for the purposes of the application for the issue or renewal of a licence, that the proof required by sub-section (1) has been given; and
  - (c) make *mutatis mutandis* such order as to the costs of the appeal as he could have made if the appeal had been a civil trial in his court.

(5) Such costs shall be taxable, *mutatis mutandis* in the same manner as costs incurred in connection with such a trial.

(6) The decision of the magistrate on any such appeal shall be subject to an appeal to the provincial division of the Supreme Court having jurisdiction as if it were a civil judgment of a magistrate's court.

**24.** (1) There is hereby established a board to be known as the Land Tenure Advisory Board, which shall consist of not more than seven members appointed by the Minister.

**Establishment of  
Land Tenure  
Advisory Board.**

(2) One of the members shall be designated by the Minister as the chairman and one as vice-chairman of the board.

(3) A member of the board shall be appointed for such period, not exceeding five years, as the Minister may determine at the time of his appointment and any member whose office has become vacant (otherwise than under sub-section (4)), shall be eligible for reappointment.

(4) A member of the board shall cease to hold his office—

- (a) if his estate is sequestrated or if a notice with reference to him is published under sub-section (1) of section *ten* of the Farmers' Assistance Act, 1935 (Act No. 48 of 1935);
- (b) if he becomes of unsound mind or is convicted of an offence and sentenced to imprisonment without the option of a fine;
- (c) if he is absent from three consecutive meetings without the permission of the chairman; or
- (d) if he is removed from his office by the Minister on the ground of incapacity or misbehaviour.

(5) A casual vacancy on the Board shall be filled by the appointment of a member for the unexpired portion of the period for which the member whose office has become vacant, has been appointed.

(6) A member of the board (other than a person who is in the full-time employment of the State and in receipt of a salary from public funds) shall, and any such lastmentioned person may, receive such remuneration and allowances as the Minister in consultation with the Minister of Finance, may determine.

**25.** (1) The meetings of the board shall, subject to the provisions of sub-section (2), be held at such times and places as the board may fix.

**Meetings and  
quorum.**



(2) The chairman may at any time call a special meeting of the board to be held at such time and place as he may direct.

Act No. 41  
of 1950.

(3) A quorum for a meeting of the board shall be three of the members thereof.

(4) Whenever the chairman is absent or unable to fulfil his duties, the vice-chairman shall act as chairman during such absence or inability, and in the absence from any meeting of the board of the chairman and the vice-chairman, the members present at that meeting may elect one of their number to preside at that meeting.

(5) The decision of the majority of the members present at a meeting of the board shall be the decision of the board: Provided that in the event of an equality of votes, the person presiding at the meeting shall have a casting vote in addition to his deliberative vote.

26. No proclamation under sub-section (2) of section *two*, sub-section (1) of section *three*, paragraph (d) of sub-section (2) of section *four*, paragraph (h) of sub-section (2) or sub-section (3) of section *ten*, sub-section (1) of section *eleven* or sub-section (3) of section *thirteen*, shall be issued, withdrawn or amended, and the Minister shall not make any determination under section *thirteen*, or issue or revoke any permit under section *fourteen*, or amend any of its conditions, unless the Minister has considered a report made by the board under section *twenty-seven* in regard thereto.

Consideration by  
Minister of  
reports of board.

27. (1) The board shall enquire into and by means of a written report advise the Minister in regard to—

Functions of  
board.

- (a) the desirability or otherwise of issuing, amending or withdrawing any proclamation referred to in section *twenty-six*;
- (b) any determination to be made under section *thirteen*;
- (c) the issue of or the amendment of the conditions of any permit under section *fourteen*; and
- (d) any matter relating to the administration of this Act which the Minister may refer to it.

(2) Before advising the Minister as to any proclamation under sub-section (1) of section *three* or as to any matter referred to in paragraph (b) or (c) of sub-section (1) (other than the issue of or the amendment of the conditions of any permit under paragraph (c) of sub-section (6) of section *fourteen*) the board shall publish in a newspaper circulating in the district in which the area concerned will be or the land or premises concerned are situated, as the case may be, at least once in each of two consecutive weeks, a notice setting forth the matter which is being investigated (including in the case of any such area, the proposed situation or the approximate proposed situation thereof or the place within the district where a plan showing such situation

may be inspected) and inviting all persons who have an interest therein to lodge with the board at an address specified in the notice and within a period so specified (which shall not be less than ten days after the last publication of the notice) any representations in writing which they may wish to make to the board in connection with such matter: Provided that the Minister may direct the board—

**Act No. 41  
of 1950.**

(a) in any particular case or in any class of case specified by him, to publish any such notice in such other manner than in such a newspaper, as he may determine; and

(b) in the case of an application for a permit authorizing the acquisition of mortgaged immovable property in a group area by a disqualified person or a disqualified company from a disqualified person or a disqualified company of the same group, to dispense with the publication of any such notice.

(3) The publication of a notice referred to in sub-section (2) shall not, unless the Minister so directs, be required in respect of the issue of a permit, if the board is satisfied that the issue of the permit is not necessary under the provisions of this Act or that a permit previously issued in respect of the same land or premises, or any portion thereof, has lapsed by virtue of the provisions of sub-section (10) of section *fourteen*.

(4) If the Minister so directs, the board shall comply with the provisions of sub-section (2) also in regard to any proclamation referred to in section *twenty-six* (other than a proclamation under sub-section (1) of section *three*) or to any matter referred to in paragraph (d) of sub-section (1), or shall follow such other procedure for bringing the matter (including any matter to be dealt with by any such proclamation) to the notice of interested persons, as the Minister may determine.

(5) The board shall not advise the Minister in regard to the issue of any proclamation under sub-section (1) of section *three*, without taking into consideration whether or not suitable accommodation will be available outside the area concerned, for persons whose occupation of land or premises in that area would be rendered unlawful by such proclamation.

28. (1) The board may—

- (a) for the purpose of any enquiry conducted by it, summon any person who in its opinion may be able to give material information concerning the subject of the enquiry or who it suspects or believes has in his possession or custody or under his control any book, document or thing which has any bearing upon the subject of the enquiry, to appear before it at a time and place specified in the summons, to be interrogated or to produce that book, document or thing, and the board may retain for examination any book, document or thing so produced;
- (b) call and by its chairman administer an oath to, or accept an affirmation from, any person present at the enquiry who was or might have been summoned in

Powers of the  
Board.



terms of this section, and may interrogate him or allow him to be interrogated by any person to whose application the enquiry relates or any person who has lodged representations in pursuance of the notice under sub-section (2) or (4) of section *twenty-seven* or on behalf of any such person by any person entitled to appear as an advocate or attorney in a court of law in the Union, and require him to produce any book, document or thing in his possession or custody or under his control: Provided that in connection with the interrogation of any such firstmentioned person, or the production of any such book, document or thing, the law relating to privilege, as applicable to a witness subpoenaed to give evidence or to produce any book, document or thing before a court of law, shall apply;

- (c) at all reasonable times enter upon and inspect any land or premises for the purpose of any investigation conducted by it, or authorise any person nominated by the chairman of the board so to enter upon and inspect such land or premises.

(2) A summons for the attendance before the board of any person or for the production of any book, document or thing shall be in writing signed by the chairman or the secretary of the board and shall be served by registered post.

29. (1) The board may authorize any member thereof, or any committee appointed by it consisting of two or more of its members, or (with the approval of the Minister) of one or more of its members and one or more other persons, to conduct any enquiry which the board may deem necessary for the proper carrying out of its functions, and any member or committee so authorized shall for the purpose of such enquiry exercise all the powers conferred and perform all the duties imposed upon the board in respect of any such enquiry conducted by it.

(2) In appointing a committee under sub-section (1), the board shall designate one of the members thereof who is a member of the board, to be the chairman.

(3) A summons under section *twenty-eight* read with sub-section (1) for the attendance before any member of the board or before any committee conducting an enquiry under the said sub-section, or for the production of any book, document or thing, may be signed by such member or by the chairman of the committee, as the case may be.

30. The Minister may assign to the board an officer in his department to be the secretary, and such other officers in his department as may be necessary to enable the board to carry out its functions.

31. (1) The Minister shall, subject to the laws governing the public service, appoint such inspectors (one of whom shall be the chief inspector) as may be necessary for the purpose of ascertaining such facts as may be required by the Minister, the board, any officer in charge of a deeds registry or any officer referred to in section *twenty-three*, in connection with the application of this Act, and of ascertaining whether the pro-

Act No. 41  
of 1950.

Investigations  
by individual  
members and  
committees of  
board.

Assignment of  
officers to board.

Appointment  
and powers  
of inspectors.

visions of this Act and of any other statute prohibiting or restricting the ownership, acquisition or occupation of land by any class of persons are being complied with.

**Act No. 41  
of 1950.**

(2) Any such inspector may for any such purpose—

- (a) without previous notice, at any time during the day or night, enter upon any premises whatsoever and make such examination and enquiry as may be necessary;
- (b) at any time and at any place require from any person who has the possession, custody or control of any book, record or other document, the production thereof, then and there or at a time and place fixed by the inspector;
- (c) examine and make extracts from and copies of any book, record or document, and require from any person an explanation of any entries therein, and seize any such book, record or document, as in his opinion may afford evidence of a contravention or evasion of any provision referred to in sub-section (1);
- (d) question either alone or in the presence of any other person as he thinks fit, with respect to any matter relevant to any such purpose, any person whom he finds on any premises entered under this section;
- (e) require any person whom he has reasonable grounds for believing to be in possession of information relevant to any such purpose, to appear before him at a time and place fixed by him and then and there question that person concerning any matter relevant to any such purpose.

(3) An inspector exercising any power under paragraph (d) or (e) of sub-section (2) shall keep a record of any statement made to him, and the person who made the statement shall be entitled to a copy of the statement as so recorded.

(4) Any person who is questioned under paragraph (d) or (e) of sub-section (2) shall be entitled to all the privileges to which a person giving evidence before a court of law is entitled.

(5) Every person occupying or residing upon any premises entered by an inspector under sub-section (2) or employed by any such person, shall at all times furnish such facilities as are required by the inspector for the purpose of exercising his powers under the said sub-section.

(6) An inspector entering any premises under sub-section (2) may be accompanied by an interpreter or any member of the South African Police.

(7) Every such inspector shall be furnished with a certificate signed by an officer thereto designated by the Minister stating that he has been appointed as an inspector under this section, and any inspector exercising any power conferred upon him by this section shall on demand produce such certificate.

32. (1) No inspector and no interpreter or member of the South African Police referred to in sub-section (6) of section *thirty-one*, shall disclose any information in relation to the financial or business affairs of any person, firm or business, acquired in the exercise of his powers or in the performance of his duties, to any person, except—

**Act No. 41  
of 1950.**

Preservation  
of secrecy.

- (a) to the Minister or a member of the board or any committee thereof or an officer in the public service for the purposes of the performance of any duty in connection with any matter investigated under the said section; or
- (b) for the purpose of the performance of his duties; or
- (c) for the purpose of the institution of any legal proceedings or when required to do so before a court or under any law.

(2) No member of the board or of any committee thereof and no such officer shall disclose any information received by him under sub-section (1), to any person, except for a purpose referred to in paragraph (b) or (c) of the said sub-section.

33. Whenever the Governor-General or the Minister, as the case may be, is by this Act authorized to issue any proclamation or notice, he may in like manner, whenever it is deemed expedient, withdraw or amend such proclamation or notice including a proclamation deemed to have been issued under section *eleven*.

Withdrawal and  
amendment of  
proclamations and  
notices.

34. (1) Any person who—

Penalties.

- (a) contravenes the provisions of sub-section (1) of section *four*, paragraph (a), (b) or (c) of sub-section (1) of section *five*, sub-section (1) of section *eight*, section *nine*, sub-section (1) of section *ten*, sub-section (1) of section *twelve*, sub-section (1) of section *sixteen* or section *nineteen*; or
- (b) contravenes or fails to comply with any condition of a permit; or
- (c) contravenes or fails to comply with the provisions of sub-section (4) of section *fifteen*, sub-section (5) of section *thirty-one* or section *thirty-two*; or
- (d) having been summoned or called under section *twenty-eight* or under the said section read with section *twenty-nine*, fails without sufficient cause to attend at the time and place specified in the summons or to remain in attendance until excused from further attendance, or refuses to be sworn or to affirm as a witness; or
- (e) refuses or fails, without sufficient cause, to answer fully and satisfactorily to the best of his knowledge and belief any relevant question lawfully put to him at an enquiry under section *twenty-eight* or under the said section read with section *twenty-nine*, or to produce any book, document or thing in his possession or custody which he has been lawfully required to produce at such enquiry; or

Act No. 41  
of 1950.

- (f) having been sworn or having made an affirmation at any such enquiry, gives an answer to any relevant question lawfully put to him or makes any relevant statement, which is false in any material particular, knowing such answer or statement to be false; or
- (g) falsely holds himself out to be an inspector; or
- (h) refuses or fails, without sufficient cause, to answer fully and satisfactorily to the best of his knowledge and belief any relevant question lawfully put to him by an inspector in the exercise of his powers; or
- (i) gives an answer to any such question or makes any relevant statement to an inspector, which is false in any material particular, knowing such answer or statement to be false; or
- (j) hinders or obstructs the chairman, the secretary or any member of the board or of a committee thereof, or any person nominated under paragraph (c) of sub-section (1) of section *twenty-eight* or under the said paragraph read with section *twenty-nine*, or any inspector, in the exercise of his powers or functions under this Act,

shall be guilty of an offence, and liable on conviction, in the case of an offence referred to in paragraph (a), (b) or (f), to a fine not exceeding two hundred pounds or to imprisonment for a period not exceeding two years, or to both such fine and imprisonment, and in the case of an offence referred to in any other paragraph, to a fine not exceeding one hundred pounds or to imprisonment for a period not exceeding one year or to both such fine and imprisonment.

(2) The court which convicts any person of a contravention of sub-section (1) of section *four*, sub-section (1) of section *ten* or sub-section (1) of section *twelve*, shall order the person convicted to vacate the land or premises to which the conviction relates, on or before a date to be specified in such order but not less than fourteen days after the date of the conviction.

(3) Any person who fails to comply with an order made under sub-section (2), shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine not exceeding fifty pounds or to imprisonment for a period not exceeding six months, or to both such fine and imprisonment, and to a further fine not exceeding five pounds for every day during which the failure to comply with such order continued.

35. (1) A person who in appearance obviously is a white person shall for the purposes of this Act be presumed to be a member of the white group until the contrary is proved. Presumptions.

(2) A person who in fact is or is generally accepted as a member of an aboriginal race or tribe of Africa shall for the purposes of this Act be presumed to be a member of the native group until the contrary is proved.

(3) A person who is not in appearance obviously a white person and who is not in fact or is not generally accepted as a member of an aboriginal race or tribe of Africa shall for the

purposes of this Act be presumed to be a member of the coloured group until the contrary is proved.

Act No. 41  
of 1950.

(4) Whenever in any proceedings under this Act, whether civil or criminal, it is alleged by or on behalf of the Minister or any officer in charge of a deeds registry or in any indictment or charge that any company is a company wherein a controlling interest is held by or on behalf or in the interest of a member of any group, that company shall be presumed to be such a company, until the contrary is proved.

36. (1) The Governor-General may make regulations— Regulations.

- (a) as to the registration of any persons as members of any group referred to in any proclamation under sub-section (2) of section *two*;
- (b) as to the manner in which any governing body referred to in sub-section (1) of section *six*, is to be constituted (including the election of all or some of its members), the powers and functions of such governing body (including the power to levy rates and charges), the supervision to be exercised over such governing body by any local authority referred to in sub-section (2) of the said section, and the powers and functions of such local authority in any group area concerned;
- (c) prescribing the form of a certificate under section *twenty-one* and the fee payable in respect thereof;
- (d) prescribing requirements to be complied with in connection with the registration of immovable property for the purpose of ensuring compliance with the provisions of this Act; and
- (e) generally, as to all matters which he considers it necessary or expedient to prescribe in order that the purposes of this Act may be achieved.

(2) Different regulations may be made in respect of different groups and of different areas or provinces of the Union.

(3) The regulations may provide for legal presumptions in regard to membership of any group established under sub-section (2) of section *two*, and may prescribe penalties for any contravention thereof or failure to comply therewith, not exceeding a fine of fifty pounds or imprisonment for a period of six months.

(4) No regulations shall be made under paragraph (b) of sub-section (1), unless the Minister has consulted the Administrator of the province and any local authority concerned.

37. (1) The provisions of this Act, in so far as they relate to the board or to inspectors, shall come into operation in the Union upon a date to be fixed by the Governor-General by proclamation in the *Gazette*, and in so far as they relate to any other matter, they shall come into operation in each province of the Union upon a date to be fixed for that province by the

Coming into  
operation of  
this Act.

Governor-General by proclamation in the *Gazette*: Provided that in the case of the province of the Cape of Good Hope, Natal or Transvaal, the Governor-General may either fix a date for the province or by one proclamation or by more than one proclamation issued at different times, fix different dates for different areas within any of the said provinces.

Act No. 41  
of 1950.

(2) For the purposes of sub-section (1), the territories referred to as the Northern Districts in section *three* of the Northern Districts Annexation Act, 1902 (Act No. 1 of 1902) of Natal, shall be deemed to be included in the province of Transvaal.

(3) Any reference in this Act to its commencement shall be construed in accordance with the provisions of sub-section (1).

38. (1) Sections *ten* to and including *fifteen* and paragraphs *(b)* to and including *(f)* of sub-section (1) of section *sixteen* of the Asiatic Land Tenure Act, 1946 (Act No. 28 of 1946), sections *fourteen*, *fifteen* and *sixteen* of the Asiatic Land Tenure Amendment Act, 1949 (Act No. 53 of 1949), and section *four* of the Asiatic Land Tenure Amendment Act, 1950 (Act No. 15 of 1950), are hereby repealed as from the date fixed by the proclamation first referred to in section *thirty-seven*. Repeals and saving.

(2) Any reference in the firstmentioned Act or in any other law to the Land Tenure Advisory Board established by section *ten* of the said Act, shall, as from the said date, be deemed to be a reference to the board.

(3) As from the date fixed under section *thirty-seven* for the province of Natal or for any area in that province, the laws specified in the First Schedule shall, in their application in that province or in any such area, as the case may be, be amended to the extent set out in the second column of that Schedule.

(4) As from the date fixed under section *thirty-seven* for the province of Transvaal or for any area in that province, the laws specified in the Second Schedule shall, in their application in that province or in any such area, as the case may be, be repealed and amended to the extent set out in the Second Column of that Schedule.

(5) For the purposes of sub-sections (3) and (4), the territories referred to as the Northern Districts in section *three* of the Northern Districts Annexation Act, 1902 (Act No. 1 of 1902) of Natal, shall be deemed to be included in the province of Transvaal.

(6) As from the date fixed under section *thirty-seven* for any province of the Union, or for any area in the province of the Cape of Good Hope, Natal or Transvaal, the provisions of sub-section (1) of section *one* of the Natives Land Act, 1913 (Act No. 27 of 1913) shall cease to apply in respect of land in that province or area which is situated in the controlled area or in any group area.

(7) Nothing in this Act contained shall affect in any way the application of the provisions of the Diplomatic Immunities Act, 1932 (Act No. 9 of 1932).

39. This Act shall be called the Group Areas Act, 1950.

Short title.



## First Schedule.

Act No. 41  
of 1950.

<i>Law amended.</i>	<i>Extent of amendment.</i>
Transvaal Asiatic Land Tenure Amendment Act, 1936 (Act No. 30 of 1936).	The repeal of paragraphs (e) and (f) of sub-section (1), and sub-sections (4) and (5) of section <i>fourteen</i> .
Asiatic Land Tenure Act, 1946 (Act No. 28 of 1946).	The repeal of sections <i>one</i> to and including <i>four</i> , sections <i>six</i> to and including <i>nine bis</i> , and sections <i>sixteen</i> , <i>seventeen</i> and <i>thirty-nine</i> .
Asiatic Land Tenure Amendment Act, 1949 (Act No. 53 of 1949).	The repeal of sections <i>six</i> to and including <i>thirteen</i> , and sections <i>seventeen</i> and <i>eighteen</i> .
Asiatic Land Tenure Amendment Act, 1950 (Act No. 15 of 1950).	The repeal of section <i>three</i> .

## Second Schedule.

<i>Law repealed or amended.</i>	<i>Extent of repeal or amendment.</i>
Law No. 3 of 1885 of the Transvaal.	The repeal of the whole.
The Asiatics (Land and Trading) Amendment Act (Transvaal), 1919 (Act No. 37 of 1919).	The repeal of the whole, except section <i>one</i> , so much of section <i>eleven</i> as defines any expression used in section <i>one</i> and section <i>twelve</i> . The amendment of section <i>twelve</i> by the substitution for the words "Asiatics (Land and Trading) Amendment Act (Transvaal)" of the words "Gold Law (Coloured Persons) Amendment Act". The amendment of the long title by the deletion of the words "with reference to the prohibition of ownership of land by Asiatics and", and the substitution for the words "and trading by them" of the words "by coloured persons".
Asiatic (Cape Malay) Amendment Act, 1924 (Act No. 12 of 1924).	The deletion in sub-section (1) of section <i>one</i> , of the words "Law No. 3 of 1885 of the Transvaal, of section <i>two</i> of the Asiatics (Land and Trading) Amendment Act (Transvaal), 1919 (Act No. 37 of 1919) or" and of the word "other".
Asiatics in the Northern Districts of Natal Act, 1927 (Act No. 33 of 1927).	The repeal of section <i>fourteen</i> .
Transvaal Asiatic Land Tenure Act, 1932 (Act No. 35 of 1932).	The repeal of sections <i>seven</i> , <i>eight</i> and <i>nine</i> .
Transvaal Asiatic Land Tenure Amendment Act, 1936 (Act No. 30 of 1936).	The repeal of sections <i>one</i> , <i>eight</i> , <i>nine</i> , <i>ten</i> and <i>eighteen</i> . The deletion of paragraphs (e) and (f) of sub-section (1), and of sub-sections (4) and (5) of section <i>fourteen</i> .
Asiatic Land Tenure Act, 1946 (Act No. 28 of 1946).	The repeal of sections <i>one</i> , <i>five</i> , <i>six</i> , <i>seven</i> , <i>eight</i> and <i>nine bis</i> , sections <i>sixteen</i> to and including <i>nineteen</i> , sections <i>twenty-five</i> to and including <i>thirty-two</i> and sections <i>thirty-seven</i> and <i>thirty-nine</i> .